



ENERGÍA, PODER Y TRANSICIÓN

ESTADO DE PODER 2024



Estado de Poder 2024

Energía, poder y transición

Estado de poder 2024 : energía, poder y transiciónGrupo de investigación Decarbonising Electricity ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Amsterdam : TNI Transnational Institute, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Mercedes Camps ; Nuria del Viso ; Álvaro Queiruga.

ISBN 978-987-813-982-1

1. Energía. 2. Crisis de Energía. 3. Petróleo. I. Grupo de investigación Decarbonising Electricity II. Camps, Mercedes, trad. III. Viso, Nuria del, trad. IV. Queiruga, Álvaro, trad.

CDD 531.62

Arte de tapa: Dominique Cortondo Arias

Diseño de interiores: Eleonora Silva

Corrección de estilo: Leonardo Berneri

Estado de Poder 2024

Energía, poder y transición



PLATAFORMAS PARA
EL DIÁLOGO SOCIAL

FUHEM
educación +
ecosocial



tni
transnational institute



CLACSO



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampin - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial



Santiago Álvarez Cantalapiedra -

Director del Área Ecosocial de FUHEM

Nuria del Viso - Responsable de la edición del Estado del Poder



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Estado de Poder 2024. Energía, poder y transición (Buenos Aires: CLACSO, febrero de 2025).

ISBN 978-987-813-982-1



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos

Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.



TNI

Editor: Nick Buxton

Traducciones: Mercedes Camps, Nuria del Viso, Álvaro Queiruga

Revisión: Mercedes Camps

Equipo asesor editorial: Daniel Chávez, Deborah Eade, Lavinia Steinfort, Nuria del Viso

Ilustrador: Matt Rota

Investigación para infografías: Elaine Forde

Diseño de infografías: Evan Clayburg

Transnational Institute – www.TNI.org

Noviembre 2023

El contenido del informe puede citarse o reproducirse con fines no comerciales, siempre que la fuente esté debidamente citada. TNI agradecería recibir una copia o un enlace al texto en el que se utiliza o cita. Tenga en cuenta que los derechos de autor de las imágenes pertenecen a los ilustradores. <http://www.tni.org/copyright>

Índice

9 Cambio de paradigma

Forjar una transición energética justa en la era de poder corporativo e imperial

Charla entre Timothy Mitchell, Thea Riofrancos, Ozzi Warwick y Nick Buxton

29 ¿Quién lucra con la fiebre de la energía verde?

La reducción del riesgo y las relaciones de poder en la financiación de la energía renovable de África

Steffen Haag, Johanna Tunn, Tobias Kalt, Franziska Müller y Jenny Simon

57 Cómo negociar la crisis energética mundial desde la escalera

Lecciones del Líbano

Ebla Research Collective

83 Encuentros titánicos

La geopolítica en el centro de las transiciones energéticas en Sri Lanka

Gz. MeeNilankco Theiventhran y Kristian Stokke

107 Un futuro sin combustibles fósiles

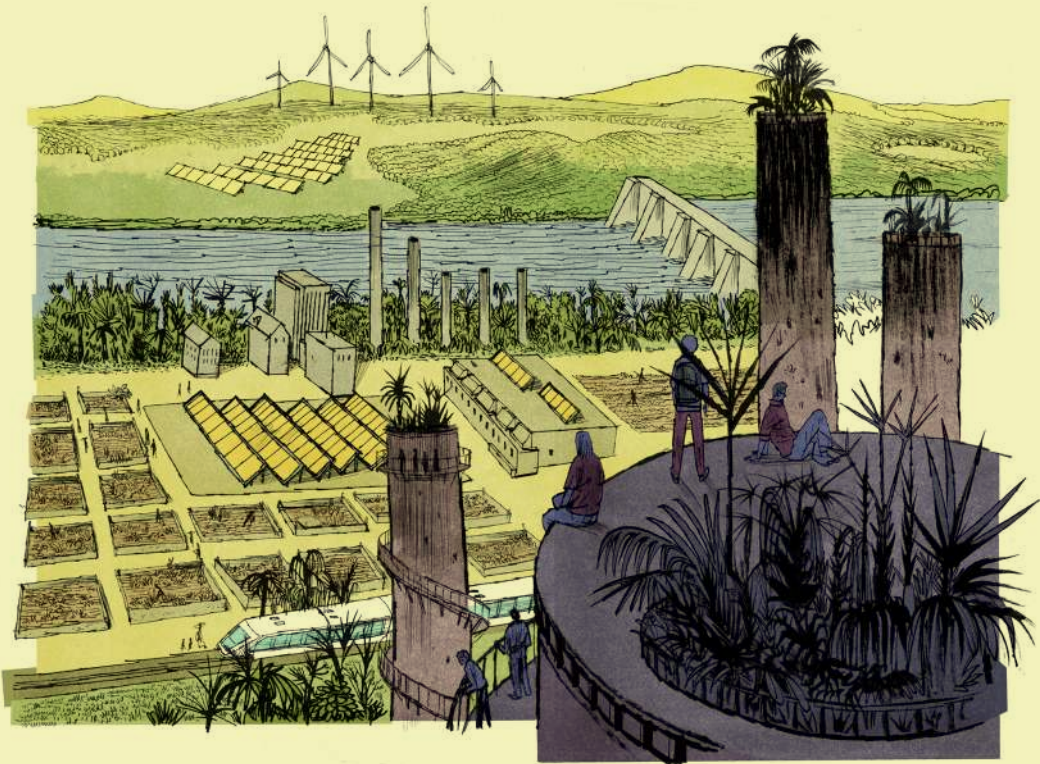
Lecciones de la lucha contra las grandes empresas petroleras

Entrevista a Olivier Petitjean y Clémence Dubois

- 125 Descarbonizar la electricidad**
Los costos de las energías renovables impulsadas por el sector privado y las oportunidades de alternativas en Australia, Alemania y la India
James Goodman y el grupo de investigación Decarbonising Electricity
- 151 Empresas petroleras administradas por el Estado y la transición energética**
El caso de Ecopetrol en Colombia
Daniel Chávez y Lala Peñaranda
- 179 Revolucionando un mundo en crisis**
Transformaciones socioecológicas y energías comunitarias
Tatiana Roa Avendaño y Eliana Carolina Carrillo Rodríguez
- 201 Socializar la energía**
Lecciones de las campañas radicales de vivienda en Alemania
Colectivo communia
- 223 Doble poder**
Forjar un movimiento para abolir el capital fósil y construir energías renovables públicas
Ashley Dawson
- 249 Sobre los autores y autoras**

Cambio de paradigma

Forjar una transición energética justa
en la era de poder corporativo
e imperial



*Charla entre Timothy Mitchell, Thea Riofrancos,
Ozzi Warwick y Nick Buxton*

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: MERCEDES CAMPS



La energía basada en los combustibles fósiles es un pilar del sistema capitalista que ha concentrado poder y riqueza y amenaza la vida en la Tierra. Para el ensayo introductorio de esta edición de *Estado del Poder*, el Transnational Institute (TNI) reunió a un especialista en grandes empresas petroleras de Oriente Medio, una académica y activista que trabaja para lograr una transición energética justa y un destacado organizador sindical del sector petrolero de Trinidad y Tobago, para que conversaran sobre la dinámica del poder en nuestro sistema energético actual y cómo realizar la transición hacia un futuro energético democrático, justo y sostenible.

Timothy Mitchell es un teórico político, historiador y catedrático de estudios sobre Oriente Medio, Asia Meridional y África en la Universidad de Columbia. En 2012, su libro *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil* redefinió la historia de la energía en Oriente Medio, demostrando el modo en que el petróleo debilitó la democracia, contribuyó al militarismo y al imperio, y creó un mito peligroso de crecimiento infinito.

Thea Riofrancos es profesora adjunta de ciencias políticas de Providence College y miembro del Climate and Community Project, un grupo de estudios de izquierda. Se dedica principalmente a investigar la política de extracción, en particular en América Latina y Estados Unidos. Su próxima publicación es *Extraction: The Frontiers of Green Capitalism*.

Ozzi Warwick es director de educación e investigación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Trinidad y Tobago y secretario general del Movimiento Sindical Conjunto. Es miembro fundador de Trade Unions for Energy Democracy South (TUED South), una nueva plataforma sindical liderada desde el sur, que ha adoptado un enfoque público a una transición energética justa.

Nick Buxton es coordinador del centro de conocimientos del TNI y editor fundador del informe *Estado del Poder*.¹

Nick: En el TNI hemos analizando las relaciones de poder en la economía mundial desde hace doce años a través de nuestro informe, el *Estado del Poder*. Me resultó interesante en esta edición sobre energía que la palabra “poder” tiene un doble significado: quién tiene poder sobre nuestros sistemas, pero también el poder que la energía nos da a nosotros y a la economía mundial. Para comenzar, quisiera preguntarte, Tim, cómo consideras que el sistema energético basado en los combustibles fósiles desde el siglo XIX ha configurado la distribución de poder en la actualidad. Y, a la vez, ¿de qué modo el poder ha configurado nuestro sistema energético?

Tim: En mi libro, *Carbon Democracy*, planteo el argumento, que puedo resumir en una oración, de que el carbón posibilitó la democracia masiva y que el petróleo le impuso límites. El argumento es que en el siglo XIX, cuando los Estados industrializados se volvieron extremadamente dependientes del carbón como única fuente de energía, los trabajadores lograron tener un poder político sin precedentes porque por primera vez podían desconectar el sistema energético de un país, en lo que pasó a conocerse como la huelga general, en que los trabajadores del carbón, los trabajadores ferroviarios y los trabajadores portuarios podían interrumpir ese suministro de energía. Ese poder fue fundamental para el surgimiento de la democracia de masas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El petróleo revirtió esta situación, en parte debido a que brindaba una alternativa, por lo que era más fácil debilitar a esa fuerza de trabajadores organizados, pero también porque el petróleo era diferente, al ser líquido que salía del suelo bajo su propia presión.

¹ Este es un fragmento editado de una entrevista realizada en enero de 2024 por Nick Buxton, cofundador y editor de *Estado del Poder*, también disponible en formato de podcast.

De modo que no hacía falta enviar a trabajadores bajo tierra, se podía extraer fácilmente con oleoductos y buques o camiones cisterna de manera más flexible y era más difícil interrumpir su suministro.

Aun así, los trabajadores petroleros de Oriente Medio estaban tan decididos como los trabajadores del carbón en Europa a ganarse sus derechos políticos y económicos. En Irán, Irak y Arabia Saudita, los tres principales países petroleros de Oriente Medio, los trabajadores organizaron huelgas, como la huelga general en Irán, que dio inicio a la nacionalización del petróleo en 1951. Pero los trabajadores perdieron el poder que habían conquistado respecto del sistema energético y político en decenios anteriores, especialmente porque el petróleo se producía en partes del mundo diferentes de los centros de la vida industrial capitalista. Ello abrió una brecha entre quienes participaban en el consumo y quienes participaban en la producción de energía, lo que dificultó que los trabajadores petroleros en un lugar como Irán entablaran vínculos con luchas políticas en Occidente. Es así que el petróleo tuvo un efecto profundo en el surgimiento de formas políticas en el siglo xx a través de su capacidad para socavar la política democrática en todas partes.

Nick: Gracias, Tim. Quizá Ozzi quisieras comentar algo al respecto, ya que has sido trabajador y sindicalista en el sector del petróleo y el gas. ¿Cómo ves esta interacción de energía en la distribución de poder según tu propia experiencia?

Ozzi: En el caso de Trinidad y Tobago, fue un poco diferente que, por ejemplo, en el Reino Unido. Trinidad y Tobago no tenía una industria del carbón y era principalmente un país agrícola hasta que se descubrió petróleo y ello comenzó a impulsar el sistema energético. Al surgimiento de una industria de combustibles fósiles basada en el petróleo se sumó el surgimiento de uno de los sindicatos más poderosos de nuestro país, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo. De modo que creó poder para los trabajadores. El sindicato fue fundamental para lograr el sufragio universal y la independencia. Los

trabajadores petroleros que participaron en los disturbios laborales de los años treinta dieron lugar a un sentimiento de nacionalismo y sentaron las bases de lo que sería la independencia de nuestro país, que se declaró en 1962. Ello demostró que el sistema energético en general puede dar lugar a la democracia de masas.

Al reflexionar sobre los sistemas energéticos, pienso inmediatamente en el imperialismo y el hecho de que la arquitectura del sistema energético es muy similar al colonialismo o el imperio, donde existe una pequeña concentración de personas u organizaciones que lo controlan. Una de las primeras empresas multinacionales modernas fue la empresa petrolera Standard Oil, fundada a finales del siglo XIX. Tras la Primera Guerra Mundial, los consorcios petroleros realizaron acuerdos con los imperios británico y francés mientras se repartían el Imperio otomano. E incluso en la actualidad, siete de las diez gigantes petroleras son estadounidenses o angloeuropeas. De las otras tres, dos son chinas y una es saudí. De modo que no se puede hablar del sistema energético sin hablar de poder. Y eso se relaciona con el capitalismo mundial, que es impulsado por la producción de mercancías, la producción y el consumo de energía.

Thea: Es evidente que la estructura del capitalismo de combustibles fósiles está estrechamente vinculada con la estructura del poder mundial, económica y geopolíticamente. También es cierto que los sistemas de poder mundial y el capitalismo de combustibles fósiles, que están estrechamente ligados, han planteado grandes desafíos a ese sistema que ha demostrado sus déficits o vulnerabilidades. Podemos ver que a finales de los años sesenta y a comienzos de los setenta, el entonces denominado “tercer mundo” comenzó a organizarse. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) surgió en un momento en que los productores de recursos del tercer mundo intentaban asumir el control de esos recursos, por los cuales no estaban recibiendo beneficios. La OPEP fue una inspiración e incluso un modelo para una propuesta más amplia de un nuevo orden económico internacional, que

nunca se concretó, pero que sigue siendo un idea que cuenta con apoyo hoy en día. Entonces, la energía no es solo un lugar de hegemonía, sino también un lugar de lucha. He investigado el tema en Ecuador, Chile y otros países de América Latina, y en la región persiste una idea poderosa de nacionalismo de los recursos, que surge de los sindicatos y los movimientos sociales y coaliciones populares. La idea es que “nosotros, el pueblo” deberíamos ser propietarios de los recursos y el norte global no debería seguir extrayendo nuestros recursos. Es una forma de protesta que también está presente en nuestro movimiento de transición energética.

Nick: El auge de las grandes empresas petroleras en los últimos decenios ha estado acompañado por una gran financiarización de la economía. ¿Cómo se interrelacionan? ¿Y cuál es la situación actual en cuanto al poder de las grandes empresas petroleras, tanto estatales como privadas?

Tim: En cuanto al petróleo y las finanzas, los dos crecieron juntos. Las grandes multinacionales petroleras también fueron las mayores empresas en cotizar en la bolsa y se asociaron con algunos de los bancos más grandes. Un motivo de esta intersección es, en primer lugar, que la producción de energía es muy cara y requiere una gran cantidad de capital. Un segundo motivo es su capacidad para generar ganancias extraordinarias que atraen finanzas. Ello no se debe únicamente a la dependencia de la energía en el mundo entero, sino también a que las estructuras de producción de energía son relativamente duraderas, por lo que una vez que se construyen, producirán ganancias durante decenios, lo cual suele suceder en otros procesos industriales. Y, por último, la capacidad de capitalizar esas ganancias futuras explica el enorme valor capitalizado de las grandes empresas petroleras. Al garantizar el flujo de dinero se aseguran de contar con una política de seguridad energética.

Ozzi: Con respecto a la interacción entre energía y finanzas, si nos remontamos a la crisis energética de los años setenta, en realidad se trató de una crisis financiera. De hecho, esa crisis desempeñó un papel fundamental en la renovación del poder de los Estados Unidos en las finanzas mundiales, debido a que tuvo como consecuencia la convertibilidad del dólar de los Estados Unidos en oro y dio lugar a la reproducción del petrodólar, lo cual permitió el flujo de dinero de bancos multinacionales estadounidenses a países no productores de petróleo menos desarrollados. Ello provocó un cambio de los préstamos institucionales a los préstamos comerciales, que reposicionó a los bancos privados estadounidenses, los cuales pasaron a dominar el sector de las finanzas a nivel mundial, del mismo modo en que las empresas petroleras de los Estados Unidos dominan el sector energético mundial. Esto provocó la grave crisis de la deuda en muchos países del sur global y permitió que los partidarios del poder neoliberal e imperial impusieran programas de ajuste estructural que consolidaron las relaciones de poder imperial y neocolonial, y arraigó estas relaciones de poder desiguales.

Thea: Es un momento muy contradictorio para formular esta pregunta, debido a que estamos ante una incipiente transición energética, que aún es muy incierta y desigual. Por un lado, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda –no la oferta– de combustibles fósiles alcanzará su nivel máximo en unos años. También hay quienes pronostican que si se lleva a cabo la transición energética, habrá más de un billón de dólares en activos varados, lo cual afectaría gravemente a las empresas energéticas y el sistema financiero. Ello podría sugerir que la industria de combustibles fósiles tiene los días contados. Sin embargo, claramente no es así debido a que también ha registrado ganancias sin precedentes debido a la inestabilidad geopolítica y al continuo aumento de la demanda energética, que en gran medida sigue estando satisfecha por los combustibles fósiles.

También estamos ante nuevas dinámicas, como el auge de empresas de capital de riesgo que invierten en combustibles fósiles, entidades menos transparentes, más difíciles de gobernar incluso que una empresa multinacional de accionistas. Como Brett Christopher ha demostrado, estas empresas de capital de riesgo están incursionando en la energía y la infraestructura, lo que significa que cada vez son propietarias de más infraestructura social fundamental. A menudo convierten estos activos de un modo similar a los fondos buitres, intentando extraer valor para luego venderlo. Lo que resulta irónico es que han comenzado a adquirir más infraestructura de energía sucia, en parte, debido a que algunos fondos de jubilación y otros inversores institucionales retiraron sus inversiones de los combustibles fósiles, lo cual puede dificultar la eliminación progresiva del sector. Es un resultado perverso de una medida que, por lo demás, es admirable por parte de algunas instituciones e inversores.

Nick: ¿Y de qué modo los cambios en los sistemas energéticos se interconectan con los cambios geopolíticos tras el surgimiento de potencias económicas como China y la India?

Tim: Uno de los elementos de cambio sin duda es el surgimiento de China y la India como consumidores de energía y, especialmente en el caso de China, como grandes productores de energía. Por su parte, Estados Unidos, que había sido el mayor productor del mundo durante varios decenios, pero después de los años setenta había disminuido su producción, tuvo un segundo impulso como productor de energía con el aumento del denominado petróleo de esquisto, o el petróleo producido mediante la fracturación hidráulica. Esto ha sido desestabilizador debido a que no está bajo el control de las grandes empresas multinacionales del petróleo que controlan el precio, sino que, con más frecuencia, está en manos de empresas petroleras nuevas o más pequeñas, por lo que nadie controla el precio. La consecuencia de ello ha sido la extraordinaria volatilidad de los precios del petróleo y el surgimiento de empresas de capital de

riesgo se debe en parte a que lograron aprovechar esa volatilidad para su beneficio económico.

Nick: Y, Ozzi, ¿qué ocurre con los actores no estadounidenses, como Venezuela o China? ¿Puedes explicar el conflicto entre Venezuela y Guyana? ¿Qué revela sobre el sistema energético y la lucha geopolítica actual?

Ozzi: En primer lugar, cabe señalar que las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil en este caso, siguen ocupando un lugar central. Pero antes quisiera explicar la disputa sobre tierras, que se remonta más de cien años a la era colonial, cuando Guyana era una colonia británica, Gran Bretaña estaba intentando ampliar su influencia imperialista y Venezuela era una nación independiente. Esta disputa prácticamente se abandonó cuando Chávez visitó Guyana en 2004 y anunció que daba la cuestión por terminada. La situación comenzó a cambiar en 2006, cuando el Gobierno de Chávez realizó una serie de nacionalizaciones y reguló el sector petrolero. La mayoría de las empresas petroleras multinacionales habían aceptado las nuevas condiciones, salvo dos, ConocoPhillips y, por supuesto, ExxonMobil. Habían exigido una indemnización de decenas de miles de millones de dólares a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, en 2014, el CIADI falló que Venezuela debía pagar tan solo 1600 millones de dólares a ExxonMobil, lo cual enfureció al entonces presidente y director ejecutivo de la empresa, Rex Tillerson. Un año más tarde, Exxon anunció que, súbitamente, había encontrado noventa metros de petróleo de buena calidad y cuando se observa el acuerdo de reparto de producción entre Guyana y ExxonMobil, la empresa se quedó con el 75 % de las ganancias del petróleo para recuperar costos y el resto lo repartió en partes iguales con Guyana. Además, el artículo 32 del Acuerdo de Estabilidad establece que el Gobierno no podrá “enmendar, modificar, rescindir, declarar nulo

o inaplicable, exigir la renegociación, obligar a sustituir o de otro modo evitar, alterar o limitar” el acuerdo.

Es decir que ni la población de Venezuela ni la de Guyana se beneficiarán de la intervención política de ExxonMobil en la región. Por lo que no se trata de un conflicto entre las dos poblaciones, sino de un conflicto entre ExxonMobil y la población de estos dos países sudamericanos. De hecho, justo después de que Guyana firmara la Declaración de Argyle por el diálogo y la paz con Venezuela el 14 de diciembre de 2023, mediante la cual se declara que ninguna parte recurrirá al uso de la fuerza, un buque de guerra británico visitó Guyana el 29 de diciembre de 2023.

También cabe señalar que en julio de 2023, el presidente de China Xi Jinping se reunió con su homólogo guyanés, Mohammed Irfan Ali. En la reunión, Xi Jinping destacó la relación entre China y Guyana y el papel importante desempeñado por China en Guyana. Por su parte, Ali reafirmó ese punto y manifestó su admiración por el liderazgo y la influencia mundial de China. Es evidente que Guyana se está convirtiendo rápidamente un campo de batalla para el posicionamiento geopolítico mundial. Este es otro ejemplo claro del vínculo inseparable entre el sistema energético mundial y la competencia imperial.

Nick: Tim, en tu libro, *Carbon Democracy*, también examinas el modo en que la política del petróleo ha configurado el militarismo, especialmente en Oriente Medio, y en relación con Israel y la guerra de 1967. ¿Tiene la guerra sus orígenes, directos o indirectos, en el autoritarismo o el militarismo del carbono del que hablas en el libro?

Tim: Sí y no. Indirecta, más que directamente. La guerra en Gaza es causada por el Estado de Israel, que quiere dominar por completo la zona de Palestina histórica y no tolera ningún tipo de reclamo de derechos nacionales para los palestinos. Los vínculos más amplios con la geopolítica del petróleo radican en que Israel no podría haber hecho esto sin el apoyo financiero, militar y político de Estados

Unidos. La influencia y el sistema de propaganda que Israel puede organizar para mantener el apoyo del Gobierno estadounidense están relacionados con el militarismo de Estados Unidos, que se vincula estrechamente con la historia del petróleo. Estados Unidos gasta más dinero en sus fuerzas armadas que las siguientes diez potencias militares del mundo.

Ello a veces se atribuye, en términos muy simplistas, a que Estados Unidos necesita defender sus recursos vitales, como el petróleo. Un mejor análisis es que la idea engañosa de que los suministros de petróleo son de algún modo vulnerables, en lugar de ser una causa de nuestra vulnerabilidad a una catástrofe climática, se utiliza para generar la sensación de que la seguridad estadounidense está en peligro. Este lenguaje de vulnerabilidad es fundamental para desviar una gran cantidad de recursos públicos a la industria armamentista y de seguridad. De modo que, Estados Unidos no está del lado de Israel para defender el petróleo, sino, al igual que Israel y con su ayuda, para defender los mitos de inseguridad de los cuales depende su propio militarismo.

Nick: Quisiera dejar de lado el aspecto militar, para centrarme en los aspectos ecológicos de esta cuestión. Nuestro sistema energético es claramente destructivo para el planeta, tiene impactos en el clima, el medio ambiente y la salud. Entonces, ¿por qué ha resultado tan difícil cambiar de rumbo?

Thea: Ello implica cuestiones de política y poder más profundas y también los mecanismos del sistema capitalista. Mencioné el fenómeno de los activos varados. Este es un problema, ya que los combustibles fósiles, al igual que todo sector extractivista, tienen costos iniciales, fijos y hundidos muy elevados. De modo que apuestan a que, con el transcurso del tiempo, en unos decenios, obtendrán una ganancia de esa inversión y antes de eso es simplemente un costo. No es difícil imaginar por qué los propietarios de activos de combustibles fósiles son extremadamente reticentes a cambiar de

sistema energético, incluso si tienen oportunidades para lucrar con el nuevo sistema energético. Y habida cuenta de su enorme influencia y conexiones políticas, el sector está muy bien posicionado para coordinar, postergar, negar y hacer todas las cosas que sabemos que ha hecho. El otro problema es que la industria está profundamente vinculada en la materialidad de la vida capitalista, si consideramos a la industria de petroquímicos o del plástico. Es por ello que hay quienes dicen que les cuesta imaginar el fin del petróleo sin imaginar el fin del capitalismo.

Pero hay otros motivos por los cuales resulta difícil cambiar nuestro sistema energético más allá de los intereses de los más poderosos; por ejemplo, los países exportadores de petróleo de bajos y medianos ingresos, como Ecuador. Me sigue sorprendiendo que no haya absolutamente ningún plan o discusión en centros de poder institucional sobre lo que ocurrirá con países cuya base fiscal está completamente vinculada a los ingresos del petróleo y que no pueden proporcionar servicios sociales, infraestructura pública o cuestiones básicas de gobernanza sin esos ingresos. No se puede evitar la difícil realidad de que la transición del petróleo negará una fuente de ingresos fundamental a una serie de Estados pobres y de bajos o medianos ingresos.

Nick: Y eso, por supuesto, también está muy relacionado con Trinidad y Tobago. Entonces, me pregunto, Ozzi, ¿qué piensas sobre los impactos ecológicos y por qué ha sido tan difícil realizar la transición de esta forma de energía?

Ozzi: Thea ha planteado una preocupación fundamental respecto de los pequeños países exportadores de gas y petróleo, como el nuestro. Toda nuestra economía se ha basado en el petróleo y el gas durante decenios y aún representa casi el 40 % de nuestro PIB y el 80 % de nuestras exportaciones. De hecho, el sector de la energía representó un 58,2 % de los ingresos gubernamentales. Sin esos ingresos, afrontamos el riesgo de que colapse el seguro social, es decir, toda

la red de seguridad social nacional. De modo que se vuelve un verdadero desafío a la transición. Ahora mismo estamos luchando por una transición justa progresiva en Trinidad y Tobago, movilizándolo a nuestras bases para que eviten que el Gobierno realice una transición neoliberal. La llaman transición justa, pero no lo es. Es simplemente un manto para ocultar una nueva ola de programas de ajuste estructural. Hemos sufrido la pérdida de miles de empleos y aún no nos han dado los nuevos empleos prometidos. Lo que están haciendo es mercantilizar y privatizar aún más los servicios públicos, como el agua y la electricidad. Y ni siquiera están cambiando las fuentes de energía, dado que están firmando nuevos acuerdos de explotación de gas. También están firmando acuerdos con las mismas empresas multinacionales para proyectos de energía renovable, por ejemplo, Trinidad y Tobago está trabajando con BP en proyectos de energía solar. De modo que, debemos protegernos del imperialismo y del capitalismo verdes.

Tim: El petróleo ha determinado en gran medida nuestros modos de pensamiento económico que, a su vez, determinan la energía y la transición. Hay una relación entre la historia del petróleo, en particular, y las concepciones de crecimiento, en las que se consideraba que la aparente disponibilidad ilimitada de yacimientos petrolíferos justificaba una economía basada en el crecimiento. Podemos verlo hoy en día con la continua expansión del uso de combustibles fósiles, que se prevé que continuará al menos hasta 2030. Y la naturaleza del imperialismo verde significa que la transición también es desigual. En la mayoría de los países industrializados europeos, posiblemente incluso en Estados Unidos, el consumo de combustibles fósiles es menor en la actualidad de lo que era en los años noventa. La expansión constante sucede fundamentalmente en otras partes, lo que refleja el hecho de que a determinados países les resulta caro invertir en parques eólicos marinos y energía solar con fines comerciales. Hay puntos de inflexión, como el hecho de que el costo relativo de la energía renovable sea más barato que las fuentes

de energía basadas en los combustibles fósiles, pero lleva tiempo que estos puntos de inflexión afecten a todo el sistema y ello no está ocurriendo con suficiente rapidez.

Thea: Quisiera añadir a las reflexiones de Tim que, además de los elevados costos de capital de las energías renovables, la ganancia real de estos sectores es baja y aún incierta en comparación con los combustibles fósiles. Ello significa concretamente que el subsidio del Gobierno es muy importante, lo cual se manifiesta como la eliminación del riesgo (asumir el riesgo), descuentos impositivos activos, rebaja de impuestos, compensación de costos de capital, préstamos asequibles, etcétera. La mayoría de los países del sur global no pueden hacer eso y están limitados para realizar inversiones públicas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sus préstamos y sus acreedores. Y los países como Estados Unidos, que tienen los medios, no hacen lo suficiente para llevar a cabo una transición energética. Más allá de si consideramos que los Estados deberían asegurar las ganancias privadas, es una cuestión importante en términos de por qué la transición se ha desacelerado y por qué China y Estados Unidos, por motivos diferentes, se destacan por su capacidad de asegurar todo tipo de transición.

Nick: Además de abordar la exclusión de muchos países de esta transición, ¿cómo podemos abordar también las formas en que la transición puede excluir a los trabajadores o tener impactos negativos en las comunidades, por ejemplo, con la extracción de minerales de transición en el sur global?

Thea: Cuando pensamos en el abastecimiento de insumos minerales para las tecnologías de energía renovable, existen muchos elementos de la tabla periódica que se consideran fundamentales o esenciales, como el cobalto, el litio, las tierras raras, el grafito, entre otros. Y plantean muchas preocupaciones y dilemas para los productores del sur global. En primer lugar, debido a que, en comparación con

el petróleo, es difícil imaginar mantener a un país sobre la base de las ganancias del litio, porque el tamaño del mercado no se compara y los yacimientos están mucho más dispersos. Entonces, la cuestión de la ventaja de los productores, como hemos visto con la OPEP, se vuelve más difícil. También conllevan muchos impactos ecológicos y sociales y explotación laboral. De modo que, si bien no tiene la misma huella de carbono que la industria de combustibles fósiles, la minería conlleva un daño ambiental y social enorme a nivel local y está asociada con una de las peores trayectorias de violaciones de los derechos humanos. El agronegocio y el sector minero se disputan el primer puesto del sector donde mueren más personas o donde se reprime a más trabajadores. Entonces, ampliar las tecnologías para generar energía renovable, dado que son necesarias para paneles solares, baterías de litio, etc., es preocupante desde el punto de vista ecosocial de derechos humanos y gobernanza. Se observa la reproducción de relaciones neocoloniales en cuanto a sus impactos.

De modo que esta es una historia conocida, pero al mismo tiempo es un proceso de relocalización interna, es decir que el Gobierno estadounidense, por ejemplo, está diciendo que no quiere depender de estas cadenas de suministro volátiles y quiere que el litio y el cobalto se extraigan en Estados Unidos. Por un lado, podemos decir que eso es justo para el resto del mundo debido a que Estados Unidos debería pagar el precio social y ecológico de todas sus necesidades extractivas, pero en realidad no está sustituyendo el extractivismo en el sur global, dado que la demanda está creciendo. Además, las minas de Estados Unidos están afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades rurales latinas, es decir, a las mismas poblaciones vulnerables que son las más afectadas en países de ingresos bajos y medios.

La producción de materias primas para energías renovables también provocó una competencia a la baja, dado que los productores de minerales del sur global intentan competir por inversiones con Estados Unidos, a pesar de que el Gobierno estadounidense

compensa los costos de capital y brinda exenciones impositivas a las empresas mineras.

Nick: Ozzi, formas parte de movimientos de trabajadores que están atravesando la transición e intentan construir una transición justa. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?

Ozzi: Como mencioné, en Trinidad y Tobago estamos experimentando una transición injusta. Aún estamos firmando nuevos contratos de producción de petróleo con BHP Billiton, Shell y BP, mientras que los empleos que quedan ya no son decentes. Es como haber retrocedido a los años treinta y cuarenta, cuando los trabajadores no tenían ningún derecho en el sector de la energía.

Nuestro sindicato está trabajando con los Sindicatos por la Democracia Energética para presentar una alternativa que se enmarque en lo que se denomina el “enfoque de la vía pública”. Este enfoque intenta marcar el camino que ampliaría la propiedad pública de la energía y construiría una nueva economía política coherente con las expectativas y aspiraciones de muchas de las personas que trabajamos en sindicatos y movimientos sociales. Ello implicaría la nacionalización absoluta del sector de energía.

La historia ha demostrado que la actual expansión energética es inseparable de la expansión capitalista. Esto es lo que está provocando la crisis climática y el colapso del ecosistema mundial. De modo que todo medio viable y eficaz de limitar la expansión energética y mitigar el impacto climático debe implicar asumir el control de cómo se genera y utiliza la energía. El control de la energía es fundamental, habida cuenta de las realidades técnicas y también desde el punto de vista de la estrategia política. Es así que la lucha por la energía puede brindar un enfoque claro para quienes formamos parte de movimientos para luchar por un cambio sistémico radical.

Nick: Tim y Thea, ¿qué retos debemos enfrentar para lograr un sistema energético más democrático, encabezado por los ciudadanos y los trabajadores? ¿Qué debemos cambiar del sistema energético?

Tim: No tengo nada que añadir a lo que dice Ozzi. Nos ha demostrado muy bien que la energía no solo es una cuestión técnica de brindar una cierta cantidad de gigavatios, sino que es donde se organiza nuestra política y donde se ponen a prueba las cuestiones de justicia y justicia social. Y esa conciencia política no ha estado allí en varias instancias en el pasado y, por ello, su resurgimiento es muy prometedor, habida cuenta de la escala de la transición que debemos atravesar.

Thea: Quisiera volver a algo que mencioné antes, que es la renuencia de los inversores capitalistas a invertir en energía renovable, lo que da lugar a subsidios públicos de infraestructuras privadas. Esto plantea la cuestión de por qué no eliminar al intermediario. Si el bolsillo público ya está subsidiando y aprobando legislación importante como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, para llevar a cabo esta transición, ¿por qué no contemplar la propiedad pública directa de la capacidad de generación eléctrica, la propiedad del tendido y los cables de distribución? En el estado de Nueva York, por ejemplo, he trabajado en una investigación que apoyaba la campaña de la organización Democratic Socialists of America (DSA), que logró que se aprobara legislación mediante la cual se empoderó a una entidad estatal propietaria de la capacidad de generación eléctrica para que comprara más capacidad de energía renovable y ayudara a descarbonizar los edificios públicos. La cuestión de la propiedad es fundamental ahora debido a que es evidente que no podemos depender de la motivación del lucro para descarbonizar lo más rápido posible, como lo exige la ciencia climática.

Una segunda respuesta radica en los sindicatos y la militancia sindical. En Estados Unidos, hace unos años ocurrió algo importante: el sindicato United Mine Workers, que representa a los trabajadores

mineros del carbón, aprobó oficialmente una transición justa. Esto es fundamental debido a que una transición justa requiere organizar a los trabajadores que quieren una transición y organizarse en torno a ella para su beneficio, en lugar de postergar una transición por temor y, en cambio, aliarse con sus jefes. Recientemente, también hubo una huelga importante muy militante y creativa del sindicato de trabajadores del sector automotriz, United Auto Workers, que intentó asegurar que los trabajadores del sector lideraran la transición hacia los vehículos eléctricos, debido a que esa transición puede tener todo tipo de repercusiones para los trabajadores. Hay temores de despidos, de automatización, precarización laboral, etcétera. Pero el sindicato decidió ser protagonista y obtuvo muchísimos contratos que aseguran que las normas que se apliquen a los trabajadores que construyen las baterías y los automóviles eléctricos sean las mismas que se han aplicado al trabajo automotriz tradicional. Este es un ejemplo de lo que puede suceder cuando los sindicatos se organizan no en defensa de empleos e industrias sucias, sino que adoptan una postura de ataque para configurar el tipo de transición a energías renovables que desean. Ello no significa que no siga siendo una lucha asimétrica con las empresas y los jefes, pero creo que finalmente redundará en más poder para los trabajadores.

Nick: Ozzi, para culminar, muchos de los lectores de esta publicación participan en luchas por la energía, en las que se enfrentan a los sistemas de poder arraigados. ¿Qué mensaje quisieras transmitirles?

Ozzi: Recientemente, el Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos (OWTU), junto con otros sindicatos del sur global, lanzó TUED South para demostrar que existe una alternativa legítima de una vía pública al enfoque existente y defectuoso de descarbonización privatizado. Mi mensaje es que jamás debemos dejar de exigir un cambio de sistema. Los reclamos de un cambio de sistema son las únicas respuestas justas para combatir la crisis climática. La transición hacia el capitalismo tuvo un impacto negativo en el

medio ambiente. Por lo tanto, lo que la mayoría de los países necesitan, especialmente en el sur global, es abandonar el capitalismo. Muchas de las intervenciones para reducir emisiones no serán posibles sin medidas firmes y progresivas del sector público. Para lograr una transición justa progresiva se necesitará un sector de servicios públicos que posea los recursos adecuados. De las luchas de todo el mundo hemos aprendido que aún es posible hacer una diferencia, que la sociedad humana puede realizar una transición y reorganizarse para proteger el planeta y al mismo tiempo proteger los medios de subsistencia de quienes lo habitan. Ese es mi mensaje.

¿Quién lucra con la fiebre de la energía verde?

La reducción del riesgo y las relaciones de poder en la financiación de la energía renovable en África



*Steffen Haag, Johanna Tunn, Tobias Kalt,
Franziska Müller y Jenny Simon**

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: MERCEDES CAMPS

* Somos un equipo de investigación de la Universidad de Hamburgo que estudia la economía política mundial de las transiciones energéticas en África. Nuestra labor se centra en las relaciones de poder poscoloniales. El proyecto de investigación H2POLITICS examina los impactos socioecológicos y en el desarrollo de producir hidrógeno verde en el sur global para exportarlo a Alemania a fin de apoyar su transición energética.

La reducción del riesgo es considerada la panacea para obtener financiación con el fin de expandir la energía renovable en el sur global, pero la experiencia de las asociaciones para una transición energética justa en Senegal y Namibia demuestra que los inversores extranjeros están recibiendo protecciones excesivas contra el riesgo, mientras que los Estados y las comunidades marginadas deben soportar todos los costos financieros, sociales, normativos y a largo plazo.

Namibia sueña con la solución económica “mágica” del hidrógeno verde. Oculta en “Sperrgebiet” –una mina de diamantes durante el régimen colonial alemán y ahora el parque nacional Tsau Khaeb– se encuentra un área designada para el megaproyecto de hidrógeno verde Hyphen. Se trata de una empresa conjunta alemana, que tiene planificado producir hidrógeno verde en una zona tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York (Gabor y Sylla, 2023; Haag y Müller, 2019; Kalt y Tunn, 2022), promovida como una asociación entre dos países (Mottley y Hoyer, 21 de julio de 2023; Eberhardt, 2023). En realidad, Hyphen es un proyecto basado en la deuda que podría aumentar el endeudamiento público e ignorar por completo las preocupaciones sociales y ambientales.

El éxito previsto para el proyecto ha echado por tierra todos los riesgos y cargas financieras que surgen de los acuerdos de financiación público-privados que caracterizan el dominio de las finanzas privadas. Debido a sus capacidades fiscales limitadas, los países de bajos ingresos dependen de financiación extranjera pública y privada, lo cual genera una mayor carga de deuda (UN Trade and Development [UNCTAD], 2023). Habida cuenta de la necesidad urgente de financiación para mitigar el clima, a menudo se propone reducir el riesgo como una forma de llevar mercados verdes al sur global.

La reducción del riesgo surgió en la financiación de la energía renovable como la panacea para movilizar los recursos financieros

necesarios para la transformación ecológica, especialmente en el sur global. La reducción del riesgo tiene el objetivo de atraer la inversión privada en infraestructura verde al ofrecer garantías de riesgo públicas, con el fin último de detener el cambio climático en asociación con el capital internacional. Sin embargo, los peligros económicos a los que se exponen los países al aplicar medidas de reducción del riesgo pueden observarse en las asociaciones para una transición energética justa firmadas, por ejemplo, con Indonesia, Senegal, Sudáfrica y Vietnam.

Surgen algunas preguntas fundamentales: ¿la financiación internacional tiene en cuenta las realidades diarias de las personas que viven cerca de centrales de energía renovable?, y ¿qué riesgos se priorizan en estos proyectos de energía renovable: los de las comunidades, el clima o los de la empresa y los inversores financieros?

Proyectos como el de hidrógeno Hyphen en Namibia revelan el modo en que el servicio público de la producción de energía es considerado un activo en el que se puede invertir. Generan ganancias para inversores extranjeros a expensas de crear entornos explotadores y perjudiciales para las comunidades afectadas.

Los mercados financieros mundiales y el poder estructural de la energía renovable en el continente africano

El volumen de capital que busca inversiones rentables en los mercados financieros ha aumentado considerablemente desde los años ochenta (Huffschmid, 2022). La presión de la rentabilidad en el sector productivo en los países industrializados, la redistribución a favor de grupos sociales que poseen riqueza y el uso de sistemas jubilatorios basados en mercados de capital han contribuido a que ello ocurriera. La creciente amplitud para los actores financieros y la creación de nuevas prácticas financieras provocaron un mayor crecimiento del capital financiero.

Recuadro 1. El poder en las finanzas mundiales

Las finanzas mundiales están estructuradas en función de las relaciones de poder. Afectan, por ejemplo, las estructuras y la regulación de los mercados financieros y la distribución desigual de los beneficios y perjuicios financieros. Esto queda de manifiesto en relación con el acceso a fuentes de financiación, la distribución de ganancias y la vulnerabilidad a las crisis.

Dado que la globalización financiera surgió como resultado del colonialismo y el capitalismo estructurado por la era (pos)colonial, las economías africanas siguen ocupando una posición subordinada en las relaciones financieras mundiales. Entre otras cosas, esto afecta la devaluación de los tipos de cambio y el modo en que la inestabilidad financiera obliga a los países a reaccionar a la dinámica de los mercados financieros internacionales. Las crisis de la deuda de los años ochenta obligaron a muchos países a aceptar préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los programas de ajuste estructural conexos. Estos no solo priorizaban el pago de los préstamos del sector privado, sino que además imponían condiciones a los países para que promovieran medidas de liberalización económica y abrieran sus mercados financieros al capital mundial. Como consecuencia de ello, los países están expuestos a relaciones financieras volátiles, en ocasiones denominadas “tsunami de liquidez”.

Véase el artículo del TNI sobre financiarización (Dutta y Thomson, 2018).

Desde los años noventa, se han abierto oportunidades de inversión en nuevos ámbitos como la vivienda o las tecnologías de la información, así como en nuevas partes del mundo. Por consiguiente, muchos países han experimentado tsunamis de liquidez en reiteradas ocasiones,¹ es decir, un flujo temporal de inversión, un cambio en las expectativas de rentabilidad de los accionistas y un retiro más o menos repentino del capital (Alami, 2019). Al entrar y salir cuando cambian las expectativas, la financiación de corto plazo en particular aumenta el riesgo de crisis financieras recurrentes. Esta dinámica es ilustrada por la denominada crisis asiática de finales de los años noventa (Bello, 16 de octubre de 2017) o la burbuja “puntocom” a comienzos de los años dos mil. Tras la crisis financiera mundial de

¹ La expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, utilizó el término “tsunami de liquidez” por primera vez en 2012 cuando criticó los efectos de la política monetaria expansionista del norte global en el sistema financiero brasileño.

2008, el volumen de liquidez excesiva en busca de ganancias ha aumentado, dado que las tasas de interés fortalecieron al tsunami de liquidez.

En la actualidad, la denominada economía verde, sobre todo el sector de la energía renovable en las economías del sur global, es un destino prometedor para la inversión del capital financiero mundial. A pesar de que es necesario realizar una gran inversión en infraestructura, las vías tecnológicas y las ganancias económicas siguen siendo inciertas y las finanzas privadas perciben riesgos de inversión graves. Como era de esperar, las finanzas privadas intentan trasladar estos riesgos posibles a los gobiernos anfitriones en la forma de apoyo financiero. Aunque la infraestructura pública siempre ha implicado una combinación de financiación pública y privada, la reducción del riesgo intenta reorganizar las economías energéticas, lo que engloba un conjunto específico de instrumentos además de la narrativa que los acompaña. Hasta comienzos de los años dos mil, “la reducción del riesgo de las finanzas” se utilizaba en forma ecléctica para referirse a la externalización de empresas, la microfinanciación o las carteras de fondos de jubilación. Tras la crisis financiera, la reducción del riesgo se volvió un concepto más matizado, centrado en la reestructuración macroeconómica, los riesgos de liquidez y la estabilidad financiera. Cuando el discurso macroeconómico comenzó a incorporar la idea de una “recuperación verde”, ello dio lugar a un debate más específico, centrado en las finanzas verdes y los prometedores aunque riesgosos mercados del sur global. A la propuesta del grupo de estudios E3G durante la cumbre del G20 celebrada en Londres (Mabey, 2009) pronto le siguió una profunda investigación conceptual del Deutsche Bank y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio sugería una metodología detallada de reducción del riesgo para políticas de creación de mercados a fin de generar un entorno propicio para las inversiones verdes.

Básicamente, la justificación de la reducción del riesgo es la siguiente: aunque los costos de la energía renovable han disminuido

drásticamente, los riesgos percibidos impiden a inversores en países del sur global financiar infraestructura para la energía renovable. A fin de movilizar los fondos adecuados, se necesitan instrumentos de mitigación de los riesgos para que la economía resulte atractiva para la inversión, por ejemplo, al garantizar un flujo de ganancias estable. Estos instrumentos brindan una red de protección para inversores privados basada en un conjunto de medidas, como la evaluación de los riesgos, el seguro de crédito a la exportación, las garantías de inversión, los pagos de primas, los bancos multilaterales de desarrollo como prestamistas de último recurso, la asistencia técnica y la consultoría política, así como iniciativas de regulación nacional para brindar un contexto de políticas seguro y predecible. La reducción del riesgo fue adoptada rápidamente como una estrategia clave para abordar el desafío de financiar infraestructura sostenible. Unos años después de la primera iniciativa política del PNUD, estas ideas pasaron a formar parte del Programa GET-FiT (Elsner et al., 2021), que financia proyectos de energía renovable en Uganda² y Zambia,³ y en los que se basa el programa de múltiples países Scaling Solar⁴ del Banco Mundial y el programa RES4Africa⁵ de Italia, por nombrar algunos.

La reducción del riesgo ahora es omnipresente en la financiación para el clima, ya que figura en numerosas recomendaciones de políticas del Banco Mundial, el FMI o las Naciones Unidas, a saber: “De miles de millones a billones”, “Reconstruir mejor” y “Maximizar el financiamiento para potenciar el desarrollo”, respectivamente. Los proyectos de infraestructura y de energía renovable de gran escala de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030 se han vuelto activos invertibles para atraer capital internacional con fines de lucro. La macroeconomista Daniela

² getfit-uganda.org

³ getfit-zambia.org

⁴ scalingsolar.org

⁵ res4africa.org

Gabor se refirió a este fenómeno como el “Consenso de Wall Street”, lo que significa que, a diferencia del anterior Consenso de Washington, la movilización de capital financiero privado ahora se ha vuelto una prioridad política y de desarrollo. En última instancia, este es un enfoque a la financiación para el desarrollo enfáticamente basado en el mercado, centrado en los intereses del capital financiero. Como sugiere Gabor, ello culmina en un “Estado de reducción del riesgo” (Gabor, 2021), cuyas funciones más destacadas ya no son el bienestar y la seguridad humana o territorial, sino la generación de oportunidades de inversión atractivas, moderadas por instituciones favorables a los inversores, cuya estructura se asemeja a quimeras gubernamentales o transnacionales. En el sector de la energía, ello puede incluir subastas de energía facilitadas por consultorías privadas y bufetes de abogados destinadas a inversores de Occidente, como demuestra claramente el caso de Zambia (Elsner et al., 2021).

A continuación, nos centramos en proyectos que demuestran diversos niveles de reducción del riesgo: el caso de las asociaciones para una transición energética justa destaca la reducción del riesgo a un nivel abstracto interestatal, mientras que el caso de Senegal subraya las realidades diarias y el de Namibia ilustra el modo en que podemos transformar toda una economía.

La estrategia de reducción del riesgo de las asociaciones para una transición energética justa

En el contexto de las energías renovables en países africanos, las asociaciones para una transición energética justa (ATEJ) han sido elogiadas como mecanismos innovadores de financiación para el clima. Sin embargo, también ilustran el modo en que se reproducen las relaciones de poder y las desigualdades estructurales mediante la financiación de la energía renovable. Estas asociaciones, que fueron negociadas entre países del G7 y del sur global, intentan catalizar una transición de los combustibles fósiles a la energía renovable.

La primera ATEJ, anunciada en la COP26 de cambio climático en 2021 entre el G7 y Sudáfrica, implica una inversión inicial de 8500 millones de dólares para realizar la transición del carbón a la energía renovable. Financia proyectos para mejorar la red eléctrica, la generación de energía, vehículos eléctricos e hidrógeno verde y propone una transición justa centrada en la creación de empleos y la formación en competencias. Una ATEJ con Senegal, país que aspira a producir gas, firmada en junio de 2023, asigna 2700 millones de dólares para generar un 40 % de energía renovable de aquí a 2030.

A pesar del hecho de que los gobiernos en países ricos ahora estén comenzando a reconocer sus responsabilidades climáticas y estén mejorando sus esfuerzos para brindar financiación para el clima, el modelo de financiación de las ATEJ plantea varias inquietudes. En primer lugar, aunque muchos países del sur global han solicitado financiación para el clima, las ATEJ fueron creadas para servir los intereses geopolíticos de los Estados del G7, que intentan fortalecer su influencia política y económica a nivel mundial, entre otras cosas para responder a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Más concretamente, tan solo una pequeña fracción de financiación llega en la forma de donaciones (3,4 % en Sudáfrica y 6 % en Senegal); el resto adquiere la forma de préstamo en divisa fuerte –que debe pagarse, a pesar de tener tasas de interés por debajo del mercado. Ello expone a los países beneficiarios a riesgos de deuda cuando la divisa local se debilita y los pagos de deuda se vuelven más costosos, como es el caso de Sudáfrica, donde desde 2000 el rand ha perdido 200 % su valor frente al dólar de los Estados Unidos.

Además, el modelo de financiación de las asociaciones se basa en una estrategia de reducción del riesgo. Se utilizan fondos públicos para financiar empresas privadas mediante asociaciones público-privadas. En el sector de la electricidad, que representa la mayor parte de la financiación de las ATEJ en Sudáfrica y Senegal, ello significa invertir en infraestructura para la red eléctrica a fin de crear las condiciones para que empresas de energía privadas, denominadas productoras de energía independientes, establezcan nuevos

proyectos. Específicamente, la reducción del riesgo de productoras de energía independientes implica subsidios y garantías gubernamentales para la venta de la energía producida mediante acuerdos para la compra de energía a esas productoras por un precio fijo y durante un tiempo determinado. Ello garantiza un ingreso a largo plazo para el sector privado, mientras que expone a los países anfitriones, como Sudáfrica y Senegal, a riesgos comerciales y exagera su deuda externa, dado que brindan garantías soberanas para la financiación privada.

Centrarse en atraer financiación privada también implica que se asignen fondos insuficientes para medidas de transición justa que no se consideran “financiables”, dado que no generan ganancias directas sobre la inversión –por ejemplo, un sistema de aranceles socialmente sensible, formación en competencias y programas de empleo sensibles al género o la transferencia de tecnología. Las ATEJ no apoyan la fabricación de energía renovable local, que es donde se encuentran la mayoría de los empleos de alta calidad y la creación de valor económico y, por lo tanto, no contribuyen al desarrollo industrial verde soberano, al empleo de largo plazo y a los beneficios para la comunidad –tan solo el 0,6 % de las contribuciones comprometidas a la ATEJ firmada por Sudáfrica se destinan al desarrollo de competencias, la diversificación económica y la inclusión social. Además, debido a que los productores de energía privados no solo necesitan recuperar sus costos operativos, sino que además intentan obtener ganancias, ello podría dar lugar a tarifas de energía más elevadas que incorporen márgenes de ganancia y pagos de intereses, lo cual exagera la pobreza energética. Por último, en las negociaciones de las ATEJ no se han incluido a la sociedad civil ni a las comunidades. Los acuerdos se negocian a puertas cerradas entre el G7, que negocia como bloque, y países individuales, que con frecuencia han expresado preocupación respecto de las condiciones de estos acuerdos, que a menudo permanecen ocultos al público. Los movimientos sociales y los sindicatos han realizado propuestas alternativas de financiación justa para el clima (Global Energy

Justice Workshop Collective, 2023), que se centran en la cancelación de la deuda (Baloyi y Krinsky, 2022), las reparaciones climáticas y las inversiones públicas, en lugar de reducir el riesgo de las inversiones privadas.

Este panorama de financiación parece estar muy alejado de la vida diaria de las personas. Pero la financiación mundial en la forma de préstamos, acciones o cualquier otro instrumento se las ingenian para figurar en proyectos concretos de energía renovable, como Hyphen o el parque eólico Taiba N'Diaye en Senegal, que tienen efectos considerables en la vida de las personas.

Aventuras de inversión en Senegal: el parque eólico Taiba N'Diaye

Chris Antonopoulos, el director ejecutivo de Lekela, hace alarde de que hace falta tener “espíritu aventurero” para construir parques eólicos en África (*Lekela Power*, 2021). Lekela es una empresa de energía renovable con sede en Londres, que construyó el parque eólico Taiba N'Diaye, de 160 MW, en Senegal. Lo que para algunos es una aventura de inversión, para otros implica la destrucción de sus medios de subsistencia.

Este parque eólico es un caso ejemplar de cómo la producción de energía renovable se convierte en un activo y da oportunidades a inversores con fines de lucro que suelen estar radicados en el norte global. Ello es posible mediante un entorno institucional de reducción del riesgo tanto del Gobierno de Senegal, como de las instituciones internacionales de financiación del desarrollo, que crean el entorno seguro y estable para los inversores europeos. El parque eólico es considerado un activo invertible, del cual inversores distantes esperan una ganancia considerable, pero al mismo tiempo es el hogar y lugar de protesta de las comunidades afectadas.

La política energética de Senegal ha estado orientada a la creación de un “entorno de reducción del riesgo”, que permite la

producción de energía privada. En una reciente reforma del sector de la energía, el Gobierno pasó a apoyar la financiación privada al eliminar barreras regulatorias y crear un entorno propicio para los inversores internacionales. La característica principal de la reforma es la desagregación de Senelec, la empresa de electricidad nacional y la compradora de electricidad en proyectos de energía renovable, y el fortalecimiento de actores privados en la producción de energía (Ward, 3 de mayo de 2021). Las productoras de energía independientes realizan ofertas para obtener los derechos de producción, mientras que la planificación energética de largo plazo de los reguladores ofrece a los inversores una base estable para adoptar decisiones de inversión de largo plazo. La liberalización del mercado de electricidad lo abre a la producción de energía privada y la planificación nacional procura volverla atractiva para el capital extranjero.

De acuerdo con esta orientación de las políticas, desde comienzos de los años 2010, el porcentaje de producción de las productoras de energía independientes ha aumentado a la mitad de la capacidad total instalada de Senegal, fundamentalmente mediante la inversión extranjera directa. Alrededor de la mitad de la capacidad de producción de energía solar del país es propiedad de empresas francesas (*Meridiam*, 31 de mayo de 2021). El poder colonial ha vuelto o quizá nunca se retiró.

El parque eólico Taïba N'Diaye se adapta bien a la agenda de políticas energéticas de Senegal. La empresa francesa Sarreol desarrolló el proyecto y más tarde lo vendió a Lekela, que posteriormente lo desarrolló para obtener rentabilidad financiera con un préstamo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, la institución del Gobierno de Estados Unidos que se dedica a la financiación para el desarrollo, y una garantía de inversión del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial. Lekela era propiedad de dos fondos de capital de infraestructura europeos con estructuras de propiedad poco transparentes cuando comenzó la construcción del proyecto y desde entonces fue vendida a otros inversores. En la actualidad, el parque eólico consiste de cuarenta y

seis turbinas eólicas, un número que se espera que pronto se duplique, y afecta a más de diez localidades con una población de alrededor de veinticinco mil habitantes.

La necesidad de los inversores privados de un mayor grado de seguridad genera una constelación de financiación y modelos de negocios que ameritan un examen más detenido. Lekela vende la electricidad producida a la empresa nacional de energía Senelec y utiliza las ganancias para pagar los préstamos a los acreedores y otorgar las ganancias anticipadas a sus accionistas. Por lo tanto, Lekela está obligada a funcionar con fines de lucro.

Para no arriesgar este flujo de efectivo, el modelo de negocios está garantizado mediante una reducción del riesgo fiscal. El Gobierno de Senegal brinda un conjunto de garantías para la compra de electricidad y el Banco Mundial hace lo mismo con los riesgos políticos, de modo de proteger a los inversores contra casi todos los peligros.

En virtud de un denominado Acuerdo de Compra de Electricidad, Senelec está contractualmente obligado a pagar toda la energía producida, incluso si no hubiera demanda o si la red está sobrecargada. Ello garantiza las ganancias de Lekela. Además, Senegal brinda una garantía soberana para cubrir la posibilidad de que Senelec incumpla sus pagos.

Los inversores también pueden recurrir a las garantías de riesgo político que brinda el Banco Mundial, como el seguro contra riesgos políticos o la garantía parcial contra riesgos. Estas garantías pueden utilizarse en casos de impago por Senelec y el Estado, expropiación o guerra y disturbios. Por consiguiente, además de los riesgos del proyecto o tecnológicos, los inversores están cubiertos contra prácticamente toda forma de inseguridad.

La lógica del lucro detrás de la financiación del proyecto y la necesidad de obtener ganancias constantes para servir a los acreedores da lugar a desigualdades al final de la cadena en el parque eólico, es decir, que afecta a las comunidades locales. Estas desigualdades son

incluso más pronunciadas si se compara la narrativa de inversión de Lekela y la disidencia comunitaria.

Los inversores cuentan la historia de los beneficios para el desarrollo de los proyectos de infraestructura a gran escala, como la creación de empleo. Según Lekela, en total 380 personas han sido empleadas durante la construcción, todas de localidades aledañas. Sin embargo, los habitantes locales expresan su clara frustración con respecto a la contratación, dado que los puestos de trabajo son temporales y en su mayoría poco cualificados.

Esto es incluso más problemático debido a que se ha expropiado la tierra comunitaria para construir el parque eólico y se ha privado así a la población de sus medios de subsistencia. Alrededor de 420 productores agrícolas afectados por el parque eólico han recibido indemnización. Es cierto que la indemnización ha sido superior al monto nacional habitual. Si bien esto puede considerarse un gesto noble por parte de Lekela, la cuestión de la tierra representa la división fundamental entre los inversores y la comunidad afectada. La historia de inversión de Lekela proclama una modernización – aunque imaginaria– de tierra agrícola a parque eólico y presupone progreso y desarrollo, pero las conversaciones con los agricultores dan una sensación muy diferente de lo que significa la tierra agrícola, que es sinónimo de vida y es la base de la alimentación y los ingresos. La indemnización puede ayudarlos a sobrellevar sus vidas en el corto plazo, pero no puede compensar la pérdida de su tierra. La cuestión de la tierra trae el colonialismo del pasado al presente. La idea dominante de *terra nullius* justificó el reparto de África durante el colonialismo, en el que se organizó el acaparamiento de tierra para la economía colonial de las plantaciones de forma tal que aún hoy vemos los patrones del extractivismo (Dieng, 29 de abril de 2021).

Desde el punto de vista de los inversores, el parque eólico es un caso exitoso de la modernidad y el desarrollo. Supuestamente ha mejorado las vidas de los habitantes locales, por ejemplo, mediante la construcción de un mercado, un centro informático en la escuela

y paneles solares para los agricultores locales. La historia de inversión oficial es ilustrada con mujeres que bailan para expresar su alegría por las inversiones. Se basa en casi todos los clichés conocidos –exactamente el modo en que Binyavanga Wainaina nos enseñó que no se debe escribir sobre África (Malik, 7 de octubre de 2022; Wainaina, 2 de mayo de 2019).

La historia parece ser una filantropía pura que da lugar al progreso en las localidades aledañas, mientras que los inversores tienen la autoridad moral. Según ellos mismos afirman, el proyecto es “más que un parque eólico”. Lo que la historia de Lekela oculta es que el parque eólico generará ganancias estables a largo plazo al desarrollador europeo, gracias a los instrumentos de reducción de riesgo mencionados anteriormente. Sin embargo, esto hace que el riesgo se transfiera a las comunidades afectadas y a las cuentas del Estado, por lo que añade una carga para el presupuesto estatal y proporciona ganancias de corto plazo a la empresa privada.

Si se considera el parque eólico desde una perspectiva macro, se observa que las inversiones en energías renovables, incluso en un solo parque eólico en Senegal, están cada vez más interconectadas en los circuitos de las finanzas internacionales. Lekela fue vendida recientemente a la empresa operadora Infinity, que es propietaria de muchas productoras de energía independientes en África. Resulta difícil de creer que los propietarios anteriores no obtuvieron muchas ganancias a partir de esta venta, que implica una desconexión entre los propietarios del proyecto y la comunidad. Como mínimo, Lekela ha estado trabajando con las comunidades locales durante varios años. El nuevo propietario no tiene esta relación, lo cual podría socavar toda responsabilidad y rendición de cuentas por los impactos del parque eólico en las comunidades locales (Baker, 2022). Por último, la posible influencia que los instrumentos de reducción de riesgo otorgan a las organizaciones multilaterales resulta problemática a nivel macropolítico. La amenaza de activar una garantía de riesgo es una medida disciplinaria, en el sentido de que si el Gobierno no paga debe cubrir la suma garantizada, ya que el Banco

Mundial posee la facultad de imponer reformas estructurales en el sector de la energía y socavar de ese modo la soberanía del Estado.

La historia de Lekela oculta estas jerarquías estructurales y les resta importancia. Su narrativa incluye tan solo dos funciones: el inversor benevolente europeo y los beneficiarios agradecidos. A pesar de esta narrativa –o precisamente debido a ella–, es importante recordar que el parque eólico Taïba N’Diaye es una inversión que aporta ganancias a inversores ricos y poderosos por la venta de electricidad que la población senegalesa paga con las tarifas eléctricas.

Por lo tanto, es importante destacar que las personas afectadas por el parque eólico formaron un colectivo para defender los derechos de la comuna de Taïba N’Diaye (Taxawu Askan Wi), a fin de hacer frente al desarrollador de proyecto, exigir su participación equitativa de los ingresos y el derecho de que se tenga en cuenta su opinión en las decisiones que las afectan. Debido a la superioridad financiera de Lekela y a su poder para definir la narrativa de inversión, es fundamental ver qué ocurre en los márgenes, de qué modo las personas afrontan dificultades día a día para contrarrestar las desigualdades de poder financiero y lo que esas luchas reflejan sobre la estructura financiera mundial.

Sueños de hidrógeno verde en Namibia

Del noroeste al sur de África, la fiebre de las energías renovables adopta otra forma. Mientras que el parque eólico Taïba N’Diaye se construyó para abastecer a la red eléctrica nacional, la economía emergente del hidrógeno en Namibia está orientada a servir a las economías europeas. Desde 2021, Namibia ha abierto sus puertas a un sinnúmero de inversores, empresas y asistencia técnica, y ha incorporado instituciones de reducción del riesgo para que se ajusten a su meta de convertirse en una “superpotencia de hidrógeno verde” (*Green Hydrogen Organisation*, 2023).

Reducción del riesgo fiscal

Para lograrlo, el Estado namibio ha construido una arquitectura de financiación combinada que se basa en gran medida en un ecosistema internacional público-privado de reducción del riesgo para poner en marcha la incipiente economía del hidrógeno (Gabor y Sylla, 2023). Ello incluye una plataforma de financiación combinada denominada SDG Namibia ONE para ampliar la escala de reducción del riesgo de la estrategia de hidrógeno verde y las iniciativas del sector privado correspondientes. El capital concesional de SDG Namibia ONE está destinado a disminuir el costo total de capital y, por consiguiente, brindar protección fiscal a lo que el país espera que será un flujo de inversores privados, listos para desembolsar su capital y satisfacer las necesidades de inversión. La plataforma, que fue lanzada en la COP27 celebrada en Egipto, ahora es gestionada en el Fondo de Inversión Ambiental de Namibia por dos organizaciones neerlandesas: Climate Fund Managers e Invest International Dutch.

La Plataforma ha recibido fondos para asistencia técnica de Investment International (cuarenta millones de euros) y del Banco Europeo de Inversiones (cinco millones de euros) para adaptar la plataforma a las necesidades de los inversores, y un préstamo adicional en condiciones favorables de quinientos millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. El Gobierno está utilizando este dinero para financiar sus participaciones de capital en el prestigioso proyecto de hidrógeno de gran escala administrado por Hyphen Hydrogen Energy.

Si bien esos enfoques aún son muy recomendados por el Grupo del Banco Mundial (World Bank Group, 2023) y la OCDE (Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2021), se corre el riesgo de que los países se vuelvan más vulnerables a crisis de la deuda y, en definitiva, amplíen el poder y la influencia de los prestamistas financieros. Namibia ya tiene una deuda soberana del 60 %, por lo que estos préstamos se suman a la deuda externa

total del país y ejercen más presión sobre el presupuesto nacional, ya que si uno de los proyectos fracasa, el Estado y los ciudadanos namibios serán quienes tengan la carga de pagar la deuda. Además, tanto los acreedores como los desarrolladores del proyecto son parte de una red europea que intenta capitalizar y utilizar el hidrógeno verde y sus derivados para sus propios fines. Un representante de un banco local que estaba encargado de elaborar las regulaciones de la inversión de Hyphen, lo resumió como sigue: “En realidad, se trata de dinero destinado a pagar los salarios europeos. Existen estos grandes contratos de compraventa de múltiples años, pero entre instituciones europeas”.

Ecosistema de reducción del riesgo

La fiebre del nuevo “petróleo verde” y la creación de un entorno propicio ha puesto en alerta a muchos Gobiernos e inversores. Namibia ha firmado un memorando de entendimiento con Alemania, los Países Bajos y la Unión Europea para la exportación de hidrógeno verde. Otros inversores, como Anglo American, el Puerto de Róterdam, Bélgica y varias empresas japonesas están ejecutando sus propios proyectos relacionados con el hidrógeno.

El proyecto más importante se encuentra en el parque nacional Tsau Khaeb de la Iniciativa de Desarrollo del Corredor Meridional y es administrado por Hyphen –un consorcio entre la empresa de energía alemana ENERTRAG y la empresa de inversiones Nicholas Holding. La empresa de inversión secreta está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal, aunque el brazo operativo es administrado por su empresa subsidiaria Principle Capital, que ha estado involucrada en un controvertido proyecto de biocombustibles en Mozambique (Grobler, Lo y Civillini, 15 de noviembre de 2023). La inversión prevista abarca 9400 millones de dólares, el equivalente al producto interno bruto (PIB) de Namibia en 2020. El plan es construir paneles solares y electrolizadores para producir hidrógeno verde en una zona protegida de 4000 km²,

casi exclusivamente para exportarlo a Europa. El Gobierno namibio prevé la construcción de diez a quince proyectos adicionales de carácter similar en el parque nacional.

Para abordar los riesgos políticos y regulatorios que pueden impedir la inversión de capital extranjero en su industria incipiente, como el acceso “complicado” de empresas extranjeras a la tierra, las fuertes protecciones ambientales o los requisitos de visado, el Gobierno alemán, entre otros, han otorgado un programa de asistencia técnica a Namibia. La asistencia es brindada por las empresas jurídicas multinacionales que elaborarán las políticas y normativas. El fin último es crear un “entorno propicio” que sirva a los intereses de los inversores alemanes y europeos. Por ejemplo, las empresas seleccionadas para los proyectos Hyphen son principalmente de origen alemán o europeo.

Reducción del riesgo normativo

Se están realizando otros ajustes normativos propuestos para adaptarse a la economía del hidrógeno. En la actualidad no existe legislación específica para la producción del hidrógeno verde con fines de exportación, ni un sistema de seguridad adecuado para regular la producción, el almacenamiento, transporte y la utilización del hidrógeno y sus derivados (como el amonio). A fin de elaborar dichas normativas, Namibia está utilizando la costosa asistencia técnica extranjera de estudios jurídicos y consultorías, y las recomendaciones de organizaciones como el Banco Mundial y McKinsey. El dirigente del movimiento social Reposicionamiento Afirmativo Job Amapunda sostiene que Hyphen está trabajando estrechamente con el Gobierno namibio para crear un marco jurídico para su economía de hidrógeno (Beukes, 8 de mayo de 2023) y señaló que un coordinador de proyectos del sector privado está elaborando el futuro marco regulatorio para toda la industria emergente en Namibia, adaptado a sus preferencias, requisitos y necesidades.

Aunque el Gobierno namibio y las partes interesadas europeas celebran los múltiples acuerdos, estrategias y asociaciones que se han establecido en tan solo unos meses, la sociedad civil de Namibia ha señalado el peligro de la dependencia financiera, la degradación ecológica y la exclusión social recurrentes en medio del entusiasmo con el hidrógeno verde.

En cuanto a las reglamentaciones, las enmiendas legislativas para favorecer a los desarrolladores del proyecto y su afán por garantizar un amplio espacio de producción para el hidrógeno verde pueden facilitar el acaparamiento de tierra y agua. En el caso de Hyphen y su trayectoria actual, el proyecto llevará una economía de enclave a la localidad de Lüderitz, que no está para nada preparada. Es decir, una economía orientada a la exportación dominada por capital no local. Mientras que Hyphen anunció la creación de quince mil empleos y tres mil adicionales durante la fase de construcción, similar al caso de Senegal, la mayoría de estos empleos serán temporales y estarán destinados a trabajadores no cualificados.

Aparte del trabajo precario y las condiciones de vida en el lugar, también existen riesgos socioecológicos de que surjan conflictos respecto del agua y la destrucción ecológica. Ellos incluyen el vertido de salmuera de plantas desalinizadoras en el mar o en aguas subterráneas, el uso de reservas limitadas de agua dulce –según ha planificado el proyecto Daures, financiado por el Gobierno alemán–, el uso de parques nacionales para el proyecto Hyphen y el gran impacto de la infraestructura planificada, como puertos y plantas en los ecosistemas terrestres y marinos. Los mercados financieros hacen la vista gorda a estos riesgos socioecológicos, siempre y cuando no pongan en peligro sus inversiones. El resultado es la socialización de los riesgos y la privatización de las ganancias, especialmente para las élites y los inversores internacionales, que perpetúan el endeudamiento del Estado con bancos internacionales y limitan el espacio para la intervención de la sociedad civil.

La sociedad civil ha expresado preocupación sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas con respecto a los procesos

de adquisiciones, acuerdos financieros y opciones normativas. Sin embargo, en lugar de reunirse con la sociedad civil y abordar sus preocupaciones legítimas de forma democrática y transparente, el Gobierno namibio “advirtió a la población local que no interfiera con el proyecto de hidrógeno verde Hyphen Hydrogen Energy” (Matthys, 1 de junio de 2023). Los inversores y políticos alemanes y europeos siguen pintando las asociaciones de hidrógeno verde como acuerdos entre partes iguales. La historia de la participación alemana en el pasado y presente extractivo de Namibia, incluida la ocupación colonial y el genocidio de los hereros y nama no forman parte de estas discusiones. Resulta sorprendente ver con qué rapidez se puede movilizar capital para el beneficio de los países ricos, mientras que aún no se han otorgado reparaciones ni se han pedido disculpas formales por las atrocidades coloniales cometidas por Alemania. Un activista describió la fiebre del hidrógeno verde en Namibia de la siguiente manera: “Queremos que se lo llame por lo que realmente es. Eso es importante. Aunque sigan demoliendo y saliéndose con la suya, se lo debe llamar por su nombre. Esto es imperialismo. Esto es colonialismo”.

La necesidad de modelos de financiación democráticos y socialmente justos

El panorama presentado por estos casos de energía verde es ambivalente. Hay una necesidad urgente de financiación para proyectos de energía renovable. La crisis climática afecta en forma desproporcionada a algunos de los países y las comunidades más vulnerables del mundo. Sin embargo, la forma de financiación actual de la energía renovable puede aumentar esa presión, en lugar de aliviarla. Amenaza los esfuerzos para lograr justicia climática a nivel mundial. Las asociaciones de financiación, como las asociaciones para una transición energética justa, así como proyectos específicos de energía renovable, suelen ser una puerta de entrada para los

intereses del norte global y pueden perpetuar el colonialismo verde. Las naciones ricas, las élites nacionales y las empresas multinacionales se benefician, y los países anfitriones y sus ciudadanos asumen los riesgos financieros y ambientales, mientras que se privatizan las ganancias y el Estado y los usuarios deben soportar los costos de la transición.

Siguiendo los pasos del llamamiento de los años setenta a un “nuevo orden económico internacional”, las iniciativas basadas en una perspectiva del sur global cuestionan cada vez más la arquitectura mundial de la financiación para el clima. La Iniciativa de Bridgetown (Mottley y Hoyer, 21 de julio de 2023), una propuesta de reforma financiera mundial impulsada por la primera ministra de Barbados, Mía Mottley, ha generado una mayor conciencia sobre la deuda climática y de la crisis de la deuda que se avecina. Hay cincuenta y dos países que ya están sobreendeudados o, en el caso de Namibia, que ya afrontan la quiebra. El reclamo de Mottley de derechos especiales de giro para el FMI generó entusiasmo. En la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, celebrada en París en 2023, los dirigentes allí reunidos acordaron reestructurar la arquitectura de la financiación para el desarrollo de modo de que se reorienten los flujos de financiación y se garantice una participación equitativa del capital. Sin embargo, el ímpetu radical de la Iniciativa de Bridgetown fue efectivamente una causa perdida, dado que en la cumbre no se aprobó un programa de alivio de la deuda, sino tan solo un enfoque fragmentado. Se dejó de lado el verdadero impacto de la Iniciativa Bridgetown, que representa una importante oposición a la dinámica neocolonial en la financiación para el clima y un llamamiento para exigir flujos financieros justos.

Para lograr justicia en la financiación para el clima se necesita un debate y práctica constantes entre los movimientos sociales, la sociedad civil, el sector político y el sector privado. Pero a menos que este debate se base firmemente en cuestiones de contenido y aborde las desigualdades de poder, al instar a la justicia se corre el riesgo de caer en el denominado posturo ético. Ello quedó de manifiesto en

las discusiones sobre las asociaciones para una transición energética justa. Como han exigido los sindicatos y la sociedad civil, las negociaciones sobre proyectos de inversión deben ser inclusivas y transparentes, no basadas en acuerdos secretos a puertas cerradas entre países donantes y países beneficiarios. Únicamente si se garantiza esto los actores de la sociedad civil podrán solicitar más financiación basada en donaciones, en lugar de préstamos condicionales.

Los reclamos de justicia en proyectos de energía renovable, como las productoras de energía independientes, plantean preocupaciones adicionales. Se necesita establecer modelos de financiación que transfieran a las comunidades afectadas una suma justa y fija de las ganancias obtenidas por los desarrolladores privados. Las personas cuya tierra es expropiada deberían ser indemnizadas porque a menudo eso es lo único que poseen. A nivel gubernamental, las normas de contenido local deberían exigir a los desarrolladores internacionales que creen valor económico nacional. Estos reclamos no son abstractos o utópicos. Pueden adoptarse fácilmente si hay voluntad política y espacio para hacerlo. Sin embargo, el hecho de que tales demandas estén tan alejadas de la realidad sobre el terreno demuestra que queda mucho por hacer. Es preciso que la sociedad civil y los movimientos en solidaridad con las comunidades directamente afectadas por la energía renovable ejerzan presión sobre la financiación internacional que invierte en esos proyectos.

Bibliografía

Alami, Ilias (2019). *Money Power and Financial Capital in Emerging Markets: Facing the Liquidity Tsunami*. Abingdon: Routledge.

Baloyi, Basani y Krinsky, Jezri (2022). Towards a just energy transition: A Framework for Understanding the Just Energy Transition Partnership on South Africa's Just Transition. *IEJ Policy Brief*, (1). <https://www.iej.org.za/wp-content/uploads/2023/03/IEJ-policy-brief-ClimateFinance1.pdf>

Bello, Walden (16 de octubre de 2017). From Japanese bubble to Chinese time bomb. *Transnational Institute*. <https://www.tni.org/en/article/from-japanese-bubble-to-chinese-time-bomb>

Beukes, Jemina (2023). World Bank gives Namibia green hydrogen road map. *Erongo* 24/7. <https://www.erongo.com.na/energy-ero/world-bank-gives-namibia-green-hydrogen-road-map2023-05-08>

Dieng, Rama S. (29 de abril de 2021). The labor of land. *Africa Is a Country*. <https://africasacountry.com/2022/12/the-labor-of-land>

Dutta, Sahil J. y Thomson, Frances (2018). *Financierización: guía básica*. Ámsterdam: Transnational Institute.

Eberhardt, Pia (2023). *Germany's Great Hydrogen Race*. Brussels: Corporate Europe Observatory.

Elsner, Carsten et al. (2021). Room for money or manoeuvre? How green financialization and de-risking shape Zambia's renewable energy transition. *CASID / ACÉDI*, 43(2), 276-295. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02255189.2021.1973971>

Gabor, Daniela (2021). The Wall Street Consensus. *Development and Change*, 52(3): 429-59. <https://doi.org/10.1111/dech.12645>

Gabor, Daniela y Sylla, Ndongo S. (2023). Derisking developmentalism: a tale of green hydrogen. *Development and Change*, 54(5), 1169-1196. <https://doi.org/10.1111/dech.12779>

Global Energy Justice Workshop Collective (2023). *Change the system, not the climate: What is wrong with the Just Energy Transition*

Partnership (JETP)? Kassel: Global Partnership Network. https://www.uni-kassel.de/forschung/files/Global_Partnership_Network/Downloads/JETP_Pamphlet.pdf

Green Hydrogen Organisation (2023). Namibia. <https://gh2.org/countries/namibia>

Grobler, John; Lo, Joe y Civillini, Matteo (15 de noviembre de 2023). Shades of green hydrogen: EU demand set to transform Namibia. *Shades of green hydrogen: EU demand set to transform Namibia. Climate Change News*. <https://www.climatechangenews.com/2023/11/15/green-hydrogen-namibia-europe-japan-tax-biodiversity-impacts/>

Haag, Steffen y Müller, Franziska (2019). Finanzplatz Afrika. Grüne Finanzflüsse und afrikanische Energietransitionen. En Henning Melber (ed.), *In Deutschland Und Afrika-Anatomie Eines Komplexen Verhältnisses* (pp. 58-73). Frankfurt: Brandes & Apsel.

Huffschmid, Jörg (2022). *Politische Ökonomie der Finanzmärkte*. Hamburg: VSA-Verlag.

Kalt, Tobias y Tunn, Johanna (2022). Shipping the sunshine? A critical research agenda on the global hydrogen transition. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 31(2), 72-76.

Lekela Power (2021). The spirit of an adventurer. <https://lekela.com/articles/the-spirit-of-an-adventurer/>

Mabey, Nick (2009). *Delivering a sustainable low carbon recovery. Proposals for the G20 London Summit*. Londres: E3G.

Malik, Nesrine (7 de octubre de 2022). How to Write About Africa by Binyavanga Wainaina review - a fierce literary talent taken too soon. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/books/2022/oct/07/how-to-write-about-africa-by-binyavanga-wainaina-review-a-fierce-literary-talent-taken-too-soon>

Matthys, Donald (1 de junio de 2023). Geingob blasted for telling Namibians not to interfere with green hydrogen project, *The Namibian*. <https://ww2.namibian.com.na/geingob-blasted-for-telling-namibians-not-to-interfere-with-green-hydrogen-project/>

Meridiam (31 de mayo de 2021). Scaling Solar Kael, Senegal. <https://www.meridiam.com/news/scaling-solar-kael-scaling-solar-kael-senegal-installation-solaire-kael-installation-solaire-kael-senegal/>

Mottley, Mia Amor y Hoyer, Werner (21 de julio de 2023). What It Will Take to Transform Development Finance. *Project Syndicate*. <https://www.project-syndicate.org/commentary/unlocking-development-finance-fourfold-task-by-mia-amor-mottley-and-werner-hoyer-2023-06>

Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2021). *The OECD DAC Blended Finance Guidance*. París. https://www.oecd.org/en/publications/the-oecd-dac-blended-finance-guidance_ded656b4-en.html

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2013). *Derisking Renewable Energy Investment*. Nueva York: United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/publications/derisking-renewable-energy-investment>

UN Trade and Development [UNCTAD] (2023). A world of debt 2023. <https://unctad.org/publication/world-debt-2023>

Wainaina, Binyavanga (2 de mayo de 2019). How to Write About Africa. *Granta*. <https://granta.com/how-to-write-about-africa/>

Ward, Andrew (3 de mayo de 2021). Senegal's journey from blackouts to gas and green energy progress is swift, but universal access to electricity will take time. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/d6432b72-2ea8-11e8-97ec-4bd3494d5f14>

World Bank Group (2023). *The International Finance Corporation's. Blended Finance Operations. Findings from a Cluster of Project. Performance Assessment Reports*. Washington D. C. https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/Evaluation/files/IFC_blen- ded_finance.pdf

Cómo negociar la crisis energética mundial desde la escalera

Lecciones del Líbano



*Ebla Research Collective**

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: ÁLVARO QUEIRUGA

* Este ensayo fue redactado por Dana Abi Ghanem, Zeina Abla y Muzna Al-Masri, y es producto de la investigación realizada por ellas y los investigadores de campo Amr Dukmak, Fatima Fouad el-Saman, Firas Dabbagh, Karim Khansa, Mostafa Soueid, Mounia Chmailtilli, Rand Berjawi y Watfa Najdi.

Es posible que la crisis económica y energética sin precedentes del Líbano haya provocado la proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala y se haya proclamado como un ejemplo de revolución energética descentralizada. Sin embargo, una mirada más atenta revela que también agravó la desigualdad y dividió a las comunidades. En última instancia, la mejor solución a las crisis energéticas radica en movilizar a las comunidades para que se organicen colectivamente contra las políticas que las provocan.

“¿Estado o generador?”. Una pregunta que me acompaña desde hace treinta y un años como ciudadano libanés con (cero) derechos y (muchas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la calle, porque es la señal más segura de que la energía de la empresa pública de electricidad ha vuelto. Ahora una lamparita le ha arrebatado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esa lamparita como a la pequeña esperanza de que mañana habrá más electricidad pública que el día anterior.

Las reflexiones de Sami¹ acerca de su lucha silenciosa con las fuentes híbridas de electricidad que afligen su vida cotidiana expresan las dificultades que experimentan a diario muchas personas en el Líbano.

Desde los años de la guerra civil (1975-1991), los habitantes del país han tenido que coestionar el suministro de electricidad en sus hogares y empresas debido a los cortes de energía diarios y al suministro poco fiable de la empresa estatal *Électricité du Liban* (EDL). Dado que casi el 90 % de la población libanesa reside en zonas urbanas y a falta de un sistema público eficaz, la gente se las arregla como puede (individual y colectivamente) y, en sus edificios o bloques de apartamentos, procura lidiar con los cortes de energía.

¹ Para proteger su confidencialidad, hemos utilizado seudónimos para los investigadores y participantes.

Esta cogestión de los servicios públicos básicos pesa mucho sobre la mayoría de la población y está en gran medida individualizada. Ha llevado a más personas a depender de las redes informales.

Mientras que algunos edificios tienen un generador en copropiedad gestionado por sus residentes, muchos hogares contratan a empresas privadas que operan grandes generadores diésel en los vecindarios. Estos servicios, de los que dependen Sami y la mayoría de los habitantes del país también están estrechamente vinculados a redes políticas en una intrincada red de clientelismo: el resultado es una sociedad abastecida por una energía cara, contaminante y poco fiable.

El Líbano sufre una crisis financiera sin precedentes desde 2019 y, junto con la erosión casi total de los servicios básicos, incluida la electricidad (*Human Rights Watch*, 12 de diciembre de 2022), la vida cotidiana se parece a una carrera de obstáculos: una lucha constante para adaptarse a los desafíos cambiantes y cada vez más arduos. En 2021, el país se sumió en la oscuridad cuando el Gobierno no pudo financiar las importaciones de combustible necesarias para mantener las luces encendidas.

La crisis energética se agravó hasta el punto en que los hogares solo recibían una hora –si acaso– de electricidad suministrada por EDL. La dependencia de los generadores se agudizó, lo que aumentó la dependencia de los combustibles e incrementó los costos para los hogares. Pero la reciente crisis de electricidad no es un acontecimiento aislado: el país siempre ha experimentado lo que podría denominarse una crisis prolongada de dotación de infraestructuras, que afecta principalmente al suministro eléctrico (Abi Ghanem, 2018).

La experiencia de Sami y muchos más se convirtió en un aspecto normal de la vida en el país, donde una infraestructura heterogénea de electricidad procedente de EDL, generadores privados y una gran cantidad de tecnologías eléctricas alimentan los hogares y facilitan la vida cotidiana.

Esta situación es producto de la corrupción estatal. Desde los años noventa, el país ha estado dirigido por un régimen político-financiero que fomenta la búsqueda de rentas (Al-Masri, Abla y Hassan, 2020) y sigue apropiándose de las instituciones estatales para conseguir beneficios financieros y políticos (Leenders, 2012).

El sector eléctrico, en particular, además de ser disfuncional e ineficaz, ha alimentado durante décadas las redes clientelistas (Laughlin, Wood y Ray, 2022) y es un lastre para el presupuesto estatal, lo que contribuye considerablemente a la creciente deuda nacional y al consiguiente colapso financiero (Ahmad et al., 2022). En las altas esferas del poder, la falta de una respuesta adecuada para planificar la recuperación de la crisis más reciente y la ausencia de cambios en el sistema político o en el reparto del poder –que desde el final de la guerra civil se ha fijado según criterios sectarios– han erosionado el sentimiento de unidad y pertenencia de la ciudadanía.

Sin embargo, la situación crítica de muchos hogares nos obliga a profundizar en la compleja red de servicios básicos formales e informales de los que depende la ciudadanía y estudiar cómo se organizan colectivamente a nivel de los edificios. Sabemos que los edificios o bloques de apartamentos son gestionados principalmente por comités encargados del mantenimiento de las zonas comunes y los servicios compartidos.

En el Líbano, debido a la prolongada escasez de energía, estos comités también gestionan la prestación de servicios, como es el caso de los generadores diésel compartidos. ¿Pueden estos comités, locales y presumiblemente representativos, sostener una transición energética que sea justa y sostenible? A la luz de todo esto, nuestra investigación procuró analizar estos micromecanismos a nivel comunitario y consideró los edificios como unidad de análisis y sus comités como una forma de organismo colectivo comunitario que podría aportar alternativas al fallido modelo de gobernanza energética dirigido por el Estado.

Entre mayo y septiembre de 2023 realizamos una investigación etnográfica colaborativa en Beirut y los barrios periféricos. Once

investigadores aportaron perspectivas y puntos de vista de la vida cotidiana de los edificios en los que viven.

Estos edificios estaban situados en distintas partes de la ciudad y abarcaban una diversidad de grupos de ingresos. Nos reunimos periódicamente, leímos las notas de campo de los demás y comentamos los resultados. Sobre todo, intercambiamos las muchas formas en que la lucha constante contra los cortes de electricidad y la búsqueda de soluciones energéticas determinaron nuestras vidas. Desde la perspectiva de la “justicia energética transformadora” (Sovacool et al., 2023), que hace hincapié en la interseccionalidad y las continuidades que existen entre la injusticia energética y otras formas de injusticia, exploramos hasta qué punto la organización colectiva en los edificios puede apoyar la democratización del acceso a la energía y el empoderamiento de las comunidades como participantes, y no como consumidores, en los sistemas energéticos esenciales para la vida cotidiana.

Visto así, estos esfuerzos no se consideran formas románticas de organizaciones económicas solidarias, sino modelos políticamente realistas que revelan cómo la gente intenta que los servicios sean más accesibles, inclusivos y democráticos, a través de comités de edificios o colectivos de residentes.

Concluimos que, a pesar de sus mejores intenciones y de los enormes esfuerzos realizados por estos comités, la gestión de los servicios de electricidad en los edificios distaba mucho de ser un proceso de democratización. La preocupación de los comités en cuanto a la cogestión de la energía resultaba onerosa y compleja, lo que provocaba la falta de empoderamiento y la aparición de prácticas excluyentes que repercutían negativamente en el bienestar de los residentes.

Concentrarse en el nivel de los edificios era clave, ya que se calcula que Beirut cuenta con unas dieciocho mil estructuras residenciales de gran altura, la mayoría con más de seis plantas (Krayem et al., 2021).

Por ley, los comités gestionan edificios residenciales que suelen constar de apartamentos de propiedad privada y zonas comunes (entrada, azotea, escaleras y otros espacios). Como tal, el comité representa los intereses de los propietarios de los apartamentos y tiene el mandato de gestionar todo lo relacionado con el cuidado y el mantenimiento de las zonas comunes y el funcionamiento del edificio, así como de resolver los conflictos ocasionales entre los residentes.

Aunque no todos los edificios tienen comités registrados legalmente, en el caso del suministro de electricidad los residentes recurrían a los comités para buscar soluciones colectivas adecuadas.

Abrirse paso en la oscuridad

La crisis financiera provocó un colapso económico en el Líbano, donde la inflación trepó al 145 % y el aumento del costo de los combustibles fósiles importados hizo que el precio de la electricidad, el gas y el diésel subiera casi un 600 %. Esto provocó la crisis eléctrica con una reducción aun mayor del suministro estatal, así como la sextuplicación del costo de los generadores diésel.

La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costos sociales, económicos y ambientales, lo que exacerbó la desigualdad de ingresos y la pobreza energética. Un 90 % de los hogares acordaron pagar por servicios básicos.

Entre los más pobres, el 20 % carecía de acceso a un generador y los hogares de bajos ingresos pagaban un porcentaje sustancialmente mayor de sus ingresos por el suministro privado de electricidad (*Human Rights Watch*, 9 de marzo de 2023). A la vez, expertos ambientales estimaron que se registró un aumento considerable de las emisiones, lo que magnificó los riesgos para la salud (Karam, 12 de septiembre de 2022). Además, como sucede en otras partes del mundo, estos impactos están condicionados por el género, ya que

las penurias por la escasez del suministro recaen en mayor grado sobre las mujeres (Ahmad, 3 de marzo de 2021).

El costo macroeconómico implicó la profundización de la dependencia del Líbano de las importaciones de diésel, que benefician principalmente a un cártel de importadores de petróleo para alimentar a los generadores privados (Szakola, 14 de enero de 2022), lo que afianza aún más las redes de poder e influencia de los políticos.

En el otro extremo de la crisis se encuentran las estrategias que aplican las personas para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. Las soluciones individuales o colectivas ya son habituales en edificios y hogares. Las denominamos *microarreglos*, de iniciativa privada y pequeña escala, constituyen una combinación de fuentes de energía (generadores de edificios, generadores de vecindarios que venden electricidad, paneles solares, inversores con baterías de litio o ácido). Estos también constituyen también constituye la mayor parte de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional extraoficial para el suministro de energía en este país asolado por la crisis.

Como cada vez más gente recurre a los microarreglos, el país experimentó una proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala, que algunos celebraron como la “revolución de la energía solar” (Raydan, 30 de septiembre de 2022). Según ellos, esta “revolución” incluso permitiría que el Líbano cumpla con el compromiso asumido en 2018 de alcanzar una combinación de 30 % de energías renovables para 2030 (Rasmi, 2 de marzo de 2023). Sin embargo, la fiebre solar del país ha sido principalmente individual y privada, lo que resalta las diferencias de clase en el acceso a la energía solar de calidad, ante los altos costos de los paneles, baterías y equipos inversores necesarios. Además, hay una “crisis de residuos tóxicos en ciernes” (Choucair-Vizoso y El Murr, 11 de octubre de 2022) derivada de las baterías y paneles gastados, sin que existan planes para su gestión.

La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados impulsó un modelo con fines de lucro del mercado de la energía solar, un aspecto negativo de la transición energética que ya se

señaló (Steinfort y Angel, 2023). Esto, junto con la complejidad del suministro energético en el Líbano, plantea la cuestión de la justicia energética. Sin “acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” (*United Nations Environment Programme [UNEP]*, 2017), con repercusiones ambientales e intergeneracionales graves para el bienestar de los residentes (Majzoub, Root y Simet, 9 de marzo de 2023), resulta evidente que el suministro energético en el Líbano y la posible transición a las energías renovables no son justos.

Analistas de la justicia energética lo definen como un “sistema energético mundial que distribuye equitativamente tanto los beneficios como los costos de los servicios energéticos, y que cuenta con un proceso de toma de decisiones representativo e imparcial en materia de energía” (Sovacool et al., 2017). Principalmente, su visión afirma el derecho a una energía asequible y sostenible, cuyo suministro sea transparente y esté sujeto a rendición de cuentas.

Un año antes del peor momento de la crisis, una asamblea de ciudadanos libaneses celebrada en 2020 produjo un “imaginario de interdependencia que busca crear redes integradas comunales como solución colectiva a pequeña escala en un momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles” (Shehabi y Al-Masri, 2022).

Este deseo de una solución liderada localmente e independiente del Estado central se deriva de la desconfianza en la capacidad de este o de sus socios privados para resolver el problema energético que ya lleva decenios, así como de la desconfianza en las opciones renovables y de una perspectiva distópica que preveía, con razón, un mayor deterioro del suministro energético. Destacamos la desconfianza popular en el Estado y sus instituciones como prueba no solo de lo arraigados e históricos que son los problemas de la electricidad en el Líbano, sino también de cómo la población es capaz de reconocer la corrupción en el sector, pero se siente impotente frente a ella.

Vivir en la crisis de electricidad

La crisis eléctrica hizo que los hogares dependieran casi exclusivamente de la electricidad que suministran los generadores diésel. Los generadores son propiedad del edificio y dan servicio a los residentes que pagan por su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un servicio privado de generador diésel vecinal es otra opción que pueden contratar los apartamentos individualmente (a cambio de una cuota mensual) por una baja cantidad de amperios.

Sami escribe cómo su “sueño siempre ha sido la electricidad de EDL”, ya que solo con ella puede consumir más del volumen racionado de apenas cinco o diez amperios que le permite el generador. La crisis destruyó ese sueño y generó una afinidad por el generador diésel al que Sami está abonado, cuyo propietario “está con nosotros, y nada está en contra de nosotros excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica EDL”, según Sami. El sentir de Sami refleja una relación ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político del país. Esa ambivalencia se extiende también a los propietarios de los generadores diésel, que se destacan por su codicia y su falta de rendición de cuentas.

La crisis eléctrica se afianzó como una realidad duradera, que dicta los ritmos diarios de la vida doméstica. “Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes: a qué hora nos levantamos, a qué hora volvemos a casa, el horario de las duchas y las comidas”, escribió Yasmin.

Las tareas cotidianas se organizan en torno al horario del generador y la vida se convirtió en una lucha constante, como “un remolino infinito”, según Sami: las pilas de ropa sucia, las noches de verano en vela sin aire acondicionado, los amperios insuficientes para los aparatos de alto voltaje como los calentadores de agua. Ahora su vida cotidiana también está racionada: “Las luces se apagan a las once de la noche, a la medianoche o incluso a la una de la madrugada... Es hora de irse a la cama, y todo el mundo se va a dormir a la misma hora”.

Los mecanismos para lidiar con la situación y adaptarse a ella alternaron entre las soluciones individuales y la exploración de posibilidades colectivas, que a menudo implican experimentar con nuevas tecnologías. Como el sistema libanés está orientado al mercado, las soluciones nuevas –los *microarreglos*– están al alcance de quienes disponen de los medios económicos.

En cambio, los residentes que dependen únicamente del generador privado vecinal muchas veces se sentían atrapados en una relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es caro, en caso de ser posible.

Algunos se mostraban hostiles hacia estos proveedores, pues se quejaban del creciente costo de vida que provocó la crisis financiera, pero a la vez necesitaban la energía debido a los cortes de luz. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulan la vida de la gente sin freno ni supervisión. Así, adquirieron aún más poder, ya que para muchos el costo de las demás opciones los convertía en la única opción.

Imagen 1. Paneles solares en balcones de Beirut



Fuente: Ebla Research Collective

La crisis la sufren más quienes tienen necesidades sanitarias o asistenciales, como las personas de edad avanzada o con discapacidad

que dependen de un ascensor para llegar a su vivienda, pero que ahora tienen que programar sus salidas según el horario del generador. La opción de subir por las escaleras también es difícil para personas de todas las edades, como señala Yasmin:

Nunca me había percatado de lo que eran doce tramos de escaleras hasta que tuve que subirlos casi todas las noches... Al subir las escaleras, una y otra vez, empecé a sentir como si estuviera fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle sin fin.

Esa sensación de lo interminable –el remolino, el bucle infinito– refleja la exacerbación. El cansancio lo invade todo y pone en el centro los cuerpos de quienes experimentan la crisis. Resaltamos estas sensaciones para apuntar las consecuencias intangibles que tiene la crisis en las personas, dado lo liada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores estatales y no estatales, y la existencia rutinaria aparentemente opresiva pueden tener repercusiones sociales y políticas importantes.

La respuesta ante la crisis no solo agravó las desigualdades socioeconómicas existentes, sino que –debido a cómo fue concebida– reforzó estos desequilibrios de poder. Por ejemplo, el proceso de racionamiento de la energía de los generadores diésel propiedad de los edificios (para gestionar los costos y el desgaste mecánico) reveló necesidades y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género, tamaño y composición de la familia, así como por posición económica y social.

Mientras que las personas encargadas del hogar preferían el suministro durante el día, quienes trabajaban fuera de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares acomodados querían tener más suministro sin importar el costo. Fue preciso llevar a cabo negociaciones y adaptaciones, que a menudo les restaban prioridad a las necesidades de los más débiles o incluso las ignoraban. En la toma de decisiones estuvieron ausentes las voces de las mujeres, a

veces de forma deliberada, debido a cuestiones como el cuidado de los hijos y otras demandas de su tiempo.

Esta dinámica demuestra que, incluso cuando las decisiones son locales, se explotan las diferencias de poder. La intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos para la resolución de problemas perjudicó en este caso a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo una inquietud, incluso en las respuestas locales.

En cambio, los edificios con medios económicos y residentes bien vinculados pudieron asegurarse el diésel con más facilidad y protegerse de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en “una fortaleza que a la vez protege y distingue a sus residentes de lo que hay fuera”.

Sin embargo, las ventajas que disfrutaban los hogares con mayores ingresos incluyen costos que recaen sobre los menos afortunados. En este ejemplo, el ruido del generador que funcionaba las veinticuatro horas del día resultó perjudicial para la salud mental y el bienestar de los habitantes más pobres de los edificios cercanos. Los vínculos personales con partidos políticos y élites influyentes se aprovecharon para conseguir diésel más barato, mientras que en otro edificio, los contactos del líder del comité con un partido político afianzaron su predominio sobre los vecinos.

Vemos claramente cómo las consecuencias de la crisis recaen con mayor dureza en los edificios de ingresos más bajos. Los edificios con ingresos más altos, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general de las zonas comunes, mientras que los de hogares de ingresos medios o bajos empezaron a padecer el deterioro de forma visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut ya no son la entrada vistosa, el portón eléctrico o la fachada reluciente, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que brinda extensas horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.

Los edificios en plena crisis de electricidad

En un edificio, tres de las zonas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son: 1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.; 2) el generador diésel propiedad del edificio, y 3) el uso de zonas comunes para instalar las soluciones energéticas, como designar un espacio para el generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.

Había un elemento temporal en esta crisis, señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos y sacrificar la comodidad y el confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos, y cómo, sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.

Los sentimientos cambiaron y aparecieron comentarios, del estilo de “quienes no hayan pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar”. Se celebraron largas asambleas y discusiones, a menudo antagónicas, que empujaron a la gente a adoptar soluciones individuales, como los sistemas de baterías de litio para sus hogares. Esto mitigó los problemas de quienes podían permitirse esas soluciones, pero redujo el interés por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en una panacea para que la gente se ocupara de sus propias necesidades y mitigara “el dolor de cabeza”.

La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de la factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio o correspondiente a una suscripción aparte de un servicio de generadores vecinal. Cuando los residentes no podían pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo funcionar las veinticuatro horas, algunos comités optaron por limitar su uso solo a quienes podían permitirse.

Mediante un sistema a control remoto, solo podían llamar al ascensor quienes habían pagado. Como la electricidad de la red pública solo está disponible unas horas al día, el ascensor pasó a ser para el uso privado de los residentes más pudientes y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio cotidiano del edificio se convirtió en una expresión de la evolución de la crisis, al generar prácticas excluyentes y distanciamiento entre los vecinos.

Imágenes 2 y 3. Llaveros con control remoto de los ascensores para uso exclusivo de los residentes que hayan pagado por el servicio



Fuente: Ebla Research Collective

El uso de las zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que, en definitiva, no eran tan comunes. Como sucede con los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios suelen verse invadidos, ya sea por la aparición de necesidades de instalaciones y servicios nuevos (por ejemplo, tanques de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.

Ante esta situación y el auge de la energía solar en Beirut y sus barrios periféricos, se plantea la cuestión de si los hogares tienen en

verdad acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, solo tres tenían paneles solares instalados, pero estos pertenecían a los pocos apartamentos que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con sus vecinos, como hecho consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por energía solar (Abdel-Riad, 2022), en nuestra muestra no observamos ningún esfuerzo colectivo por invertir en ella. En un edificio se discutió el tema y el comité supuso que era ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio de la azotea no alcanzaba para alojar los paneles necesarios.

Estos ejemplos revelan que, aunque en algunos edificios hubo comités que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones no siempre eran estratégicas, eficaces ni inclusivas. Aunque los edificios con mayores ingresos podían resolver problemas al adquirir colectivamente generadores más grandes, eso no significa que el aspecto económico fuera el único factor en juego.

La intensidad de la crisis eléctrica, sumada a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos personas pueden dedicar el tiempo y los recursos financieros que exigen estas iniciativas. Otra causa del fracaso es la duración de la crisis (ya en su cuarto año), que hizo que la gente perdiera la paciencia y optara por soluciones individuales. Así, la cooperación ha sufrido altibajos: a veces ha surgido en espacios compartidos y otras ha desaparecido por el estrés y la tensión de vivir en una crisis.

No obstante, los comités de edificio siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación demuestra que son fundamentales para proteger de la decadencia el entorno construido, ya que los edificios descuidados a veces son los “escombros intencionales” que impulsan las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios (Kanafani, 2017).

Habida cuenta de que antes de la crisis los comités de edificios eran eficaces (en su mayoría) en el mantenimiento y la gestión de los servicios de los generadores o en la búsqueda de soluciones para problemas relativamente menores, como el suministro irregular del agua, cabe preguntarse si esta crisis –por su complejidad y sus numerosas repercusiones– es demasiado para que un comité pueda gestionarla por su cuenta.

Esto subraya nuestro llamamiento a una visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Nos preocupa hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que tengan éxito a largo plazo.

Una crisis en curso

La dinámica de los comités de edificio puede captar la forma en que las personas adaptan sus rutinas cotidianas a las restricciones del suministro eléctrico, que negocian con sus vecinos para asegurarse de que el suministro se ajuste a sus necesidades. Los comités pueden ser espacios de búsqueda de microsoluciones colectivas. También encontramos estrategias de resistencia y de mejora vital que desafían la injusticia de la realidad energética, ya que los residentes intentan lograr la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque solo sea temporalmente.

Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente exigiéndoles encontrar soluciones técnicas colectivas con los aspectos distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones, pero también mientras sucumben a las injusticias energéticas globales, estatales y sistémicas.

Demostramos que, incluso con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités de edificio individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Desde la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político y activista.

Veamos el ejemplo de Um-Rami, una abuela de setenta y ocho años que lleva dos décadas encargándose del comité y la contabilidad de su edificio. Lo anota todo en dos cuadernitos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos diez años. También tiene una cajita metálica con el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.

Al final de cada año, calcula los totales y los pasa a la página siguiente. Um-Rami se queja de seguir siendo la responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha intentado ayudarla manteniendo un archivo Excel que tiene dos hojas por año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para las y los residentes. Ella también está cansada, le cuesta hallar el tiempo disponible entre su trabajo, las tareas domésticas y la crianza de sus hijos.

Descargar el peso de la solución a la escasez de energía –un problema nacional que ya lleva décadas, además de una crisis climática mundial– sobre los hombros de residentes urbanos como Um-Rami no es un proceso de democratización ni de empoderamiento. De hecho, incluso entre los miembros más jóvenes o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios que son necesarios para la vida cotidiana de sus residentes, mientras que se enfrentan a una crisis política dinámica, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.

Ante la magnitud de la crisis energética y la corrupción en el Líbano, la reacción empoderante no son las medidas provisorias que los habitantes de Beirut se vieron obligados a adoptar, ni el despliegue de soluciones técnicas a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista ambiental, ni pensar que la respuesta radica en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.

Para aclarar, académicos y activistas de la justicia energética reclaman sistemas energéticos descentralizados y dirigidos por las comunidades (Bell, Daggett y Labuski, 2020) y la devolución del “micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces fueron silenciadas sistemáticamente durante demasiado tiempo” (Sovacool, 2023). Pero sin una acción política paralela que desmantele los sistemas políticos de búsqueda de rentas del sur global y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que se benefician de sistemas energéticos injustos y extractivistas, los reclamos de descentralización y energía comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.

Se espera que las comunidades, como hemos visto en el Líbano y otros lugares del sur global (Seif Eddin, 24 de noviembre de 2023), soporten la carga de satisfacer sus necesidades energéticas con los escombros de unos sistemas energéticos fallidos, pero sin el poder ni los recursos para hacerlo (Hamouchene y Sandwell, 2023).

Así, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos comunitarios no a desplegar soluciones tecnológicas para la crisis energética, sino a ayudar a organizarse colectivamente contra las políticas que la provocaron. Aunque las élites corruptas del Estado lograron sofocar la oposición mediante una política populista, clientelista y sectaria, la movilización contribuyó a impulsar el debate sobre los servicios y las infraestructuras.

Por ejemplo, movilizaciones pasadas, como la campaña #YouStink (Ekdawi, 23 de febrero de 2021), a pesar de su éxito limitado, apuntaban con acierto a la corrupción política que provocó la crisis de los residuos, en lugar de concentrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos sólidos.

Además, para los hogares individuales, el comité de edificios como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda como punto de partida para definir y expresar las necesidades y prioridades a nivel comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares proveedores de servicios informales, como propietarios de generadores y electricistas de la zona, y, allí donde están activas, las autoridades municipales locales.

Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino o que a veces negoció en conjunto tarifas de abono con los proveedores privados del vecindario, mientras que otro comité analizó el incendio de un generador cercano para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.

La función de las empresas de generadores, que suelen ser demonizadas como si fueran mafias porque tienen el monopolio de los servicios del vecindario y fijan los precios, podría gestionarse de otra manera (Abi Ghanem, 2021). Ponemos en cuestión esta denominación banal, dados los sentimientos encontrados de las personas que se desprenden de nuestro estudio. Creemos que hay margen para su participación más allá de la prestación de servicios transaccionales.

Las empresas prestan servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que las personas se esfuerzan por gestionar a nivel de cada edificio. Lo ideal no es, ni mucho menos, seguir dependiendo de los servicios de los generadores en cada vecindario, ante la falta de rendición de cuentas y las consecuencias para la salud ambiental. A pesar de ser entidades privadas, también –al igual que la tienda de comestibles del barrio– integran sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.

Se debería brindar apoyo para que los colectivos de residentes puedan presionar para que mejoren las condiciones del servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que podría apoyar a los residentes son las autoridades

municipales de la zona. En el edificio en el que el municipio asumió un papel activo en la regulación de las empresas privadas de generadores, los residentes se beneficiaron de una gestión menos estresante de sus necesidades energéticas cotidianas.

Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, a fin de lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de organizadores en cada edificio, como lo es Um-Rami, se invertirían mejor en fortalecer los puentes entre los residentes vecinos, movilizarse por un cambio político efectivo y presionar a los proveedores de servicios y a las autoridades locales para que ofrezcan soluciones energéticas más justas.

Años de corrupción y poder incontrolado de la élite gobernante del país hacen que cualquier esfuerzo de apoyo a la transición a una energía más ecológica o para abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano no es un problema técnico que se pueda paliar simplemente mediante proyectos energéticos locales dirigidos por la comunidad.

Estas ideas nos convencen cada vez más de que se trata de una crisis política –provocada por años de descarado aprovechamiento del poder por parte de políticos corruptos con capacidad de influir en la infraestructura energética– y de que una solución política es imperiosa.

Bibliografía

Abdel-Riad, Belqis (2 de julio de 2022). Cooperatives, loans and renting out roofs in cities...and solar farms in rural areas [en árabe]. *Al-Modon*. <https://shorturl.at/aflZ6>

Abi Ghanem, Dana (2018). Energy, the city and everyday life: Living with power outages in post-war Lebanon. *Energy Research & Social Science*, 36, 36-43.

Abi Ghanem, Dana (2021). Insights from an assemblage perspective for a (better) understanding of energy transitions: Facing the challenge of sustainability in Lebanon's energy crisis. En Ankit Kumar, Johanna Höffken y Auke Pols (eds.), *Dilemmas of Energy Transitions in the Global South: balancing urgency and justice* (pp. 18-38). Abingdon: Routledge.

Ahmad, Ali (3 de marzo de 2021). Energy and empowerment in Lebanon: Impact of a reliable energy supply in changing women's lives. *International Growth Centre (IGC)*. <https://www.theigc.org/blogs/gender-equality/energy-and-empowerment-lebanon-impact-reliable-energy-supply-changing-womens>

Ahmad, Ali et al. (2022). From dysfunctional to functional corruption: the politics of decentralized electricity provision in Lebanon. *Energy Research & Social Science*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102399>

Al-Masri, Muzna; Abla, Zeina y Hassan, Rana (2020). *Envisioning and contesting a new Lebanon? Actors, issues and dynamics following the October protests*. Londres: International Alert. <https://www.international-alert.org/app/uploads/2021/08/Lebanon-Context-Analysis-Oct-Feb-EN-2020.pdf>

Bell, Shannon E., Daggett, Cara y Labuski, Christine (2020). Toward feminist energy systems: Why adding women and solar panels is not enough. *Energy Research & Social Science*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101557>

Choucair-Vizoso, Julia y El Murr, Yara (11 de octubre de 2022). 'Privatizing the sun: the dark side of Lebanon's "solar revolution"', *The Public Source*. <https://thepublicsource.org/lebanon-solar-privatization>

Ekdawi, Amy (23 de febrero de 2021). Beirut's "You Stink" Movement: A tongue in cheek slogan to hold officials accountable. *Accountability Research Center*. <https://accountabilityresearch.org/beirut-you-stink-movement-a-tongue-in-cheek-slogan-to-hold-officials-accountable/>

Hamouchene, Hamza y Sandwell, Katie (eds.) (2023). *Dismantling Green Colonialism: energy and climate justice in the Arab region*. Londres: Pluto Press.

Human Rights Watch (12 de diciembre de 2022). Lebanon: Rising poverty, hunger amid economic crisis. <https://www.hrw.org/news/2022/12/12/lebanon-rising-poverty-hunger-amid-economic-crisis>

Human Rights Watch (9 de marzo de 2023). 'Lebanon: Electricity crisis exacerbates poverty, inequality'. New York: Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2023/03/09/lebanon-electricity-crisis-exacerbates-poverty-inequality>

Kanafani, Samar (2017). *Made to Fall Apart: An ethnography of old houses and urban renewal in Beirut* [Tesis de doctorado]. Universidad de Manchester. <https://research.manchester.ac.uk/en/studentTheses/made-to-fall-apart-an-ethnography-of-old-houses-and-urban-renewal>

Karam, Zeina (12 de septiembre de 2022). In parts of Mideast, power generators spew toxic fumes 24/7. *AP News*. <https://apnews.com/article/middle-east-africa-ap-top-news-lebanon-a8448b0d8b-3fb921f8f8fc77b798958d>

Krayem, Alaa et al. (2021). Machine learning for buildings' characterization and power-law recovery of urban metrics. *PLoS ONE*, 16(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246096>

Laughlin, Shaya; Wood, David y Ray, Alex (2022). Fuelling addiction: How importers and politicians keep Lebanon hooked on oil. *Triangle*. <https://www.thinktriangle.net/importers-politicians-lebanon-oil/>

Leenders, Reinoud (2012). *Spoils of Truce: Corruption and state-building in postwar Lebanon*. Ithaca: Cornell University Press.

Majzoub, Aya; Root, Brian y Simet, Lena (9 de marzo de 2023). “Cut Off from Life Itself”: Lebanon’s failure on the right to electricity. *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/report/2023/03/09/cut-life-itself/lebanons-failure-right-electricity>

Rasmi, Adam (2 de marzo de 2023). Why Lebanon is having a surprising solar power boom. *Time*. <https://time.com/6257557/lebanon-solar-power-boom/>

Raydan, Rodayna (30 de septiembre de 2022). How Lebanon’s crisis sparked a solar power revolution. *The New Arab*. <https://www.newarab.com/analysis/how-lebanons-crisis-sparked-solar-power-revolution>

Seif Eddin, Sara (24 de noviembre de 2023). Gaza siege: years of darkness. *Mada Masr*. <https://www.madamasr.com/en/2023/11/24/feature/politics/gaza-siege-years-of-darkness/>

Shehabi, Ala’a y Al-Masri, Muzna (2022). Foregrounding citizen imaginaries: Exploring just energy futures through a citizens’ assembly in Lebanon. *Futures*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102956>

Sovacool, Benjamin K. et al. (2017). New frontiers and conceptual frameworks for energy justice. *Energy Policy*, 105, 677-691. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005>

Sovacool, Benjamin K. et al. (2023). Pluralizing energy justice: Incorporating feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial

perspectives. *Energy Research & Social Science*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102996>

Steinfort, Lavinia y Angel, James (2023). *Energy Transition Mythbusters: Unpacking the 6 policy myths that threaten decarbonisation*. Ámsterdam: Transnational Institute and Trade Union for Energy Democracy. <https://www.tni.org/en/publication/energy-transition-mythbusters>

Szakola, Albin (14 de enero de 2022). “National suicide”: A breakdown of Lebanon’s deepening dependence on diesel fuel for private generators. *L’Orient Today*. <https://today.lorientlejour.com/article/1287555/national-suicide-a-breakdown-of-lebanons-deepening-dependence-on-diesel-fuel-for-private-generators.html>

United Nations Environment Programme [UNEP] (2017). GOAL 7: Affordable and clean energy. <https://www.unep.org/topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-7-affordable>

Encuentros titánicos

La geopolítica en el centro de las transiciones energéticas en Sri Lanka



Gz. MeeNilankco Theiventhran y Kristian Stokke

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: NURIA DEL VISO

Los intentos de Sri Lanka de llevar a cabo una transición en su sistema energético se han visto socavados por la competencia geopolítica, especialmente entre China e India, que han explotado el débil Estado neoliberal del país del sur de Asia y han aumentado el control de su infraestructura energética y su economía.

En 2022, Sri Lanka se enfrentó a una crisis económica sin precedentes, con falta de reservas de divisas y protestas en todo el país agravadas por la falta de electricidad, petróleo y gas. Las personas que hacían cola durante días para llenar sus garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar se convirtieron en la imagen de la crisis energética, que también provocó cortes de electricidad frecuentes que devastaron el sector de los servicios, que representa el 60 % de la economía. El Gobierno de Sri Lanka estaba desesperado por hacer frente a la crisis energética y buscó ayuda exterior, lo que le enredó en las trayectorias emergentes de la geopolítica energética en el sur global, principalmente en relación con China e India.

Cuando Sri Lanka aún se tambaleaba por la crisis, India accedió a apoyar al sector energético mediante préstamos para petróleo y gas, lo que ayudó a resolver el problema inmediato y dio un respiro al Gobierno. A cambio, el conglomerado indio Adani Group se aseguró un contrato no solicitado para proyectos de energía eólica y solar en Mannar y Pooneryn, con inversiones estimadas de quinientos millones de dólares. En junio de 2022, al declarar ante la Comisión Parlamentaria de Empresas Públicas, el presidente de la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) afirmó que el presidente de Sri Lanka le había dicho que el primer ministro indio, Narendra Modi, había insistido en que se adjudicara al Grupo Adani un proyecto de energía eólica en Mannar sin pasar por ningún procedimiento de licitación (Farzan, 11 de junio de 2022).

Además, se concedió a la Indian Oil Corporation (IOC) una participación del 49 % en el desarrollo conjunto del parque de tanques

petrolíferos de Trincomalee, que India persigue desde los años setenta. Gracias a la crisis económica, India consiguió lo que había aspirado a obtener durante más de medio siglo. India también quería construir líneas de transmisión eléctrica transfronterizas para exportar electricidad a Sri Lanka. Este proyecto se inició en los años noventa, pero Sri Lanka lo había retrasado, debido a que era consciente de que comprometería su seguridad energética. La crisis, sin embargo, dio un nuevo impulso a los planes. Asimismo, China aprovechó la crisis para perseguir sus intereses en el sector energético de Sri Lanka, especialmente adquiriendo una refinería de petróleo de 4500 millones de dólares en Port Hambantota, que se está desarrollando como centro energético junto con una instalación de gas natural licuado (GNL).

La crisis económica de Sri Lanka demuestra el papel fundamental que desempeña la energía en cualquier economía y por qué la soberanía y la sostenibilidad energéticas son esenciales para la resiliencia. También muestra cómo las economías neoliberales débiles son vulnerables al papel de los actores externos, principalmente cuando dependen de la ayuda exterior para la financiación, la tecnología y el desarrollo de políticas.

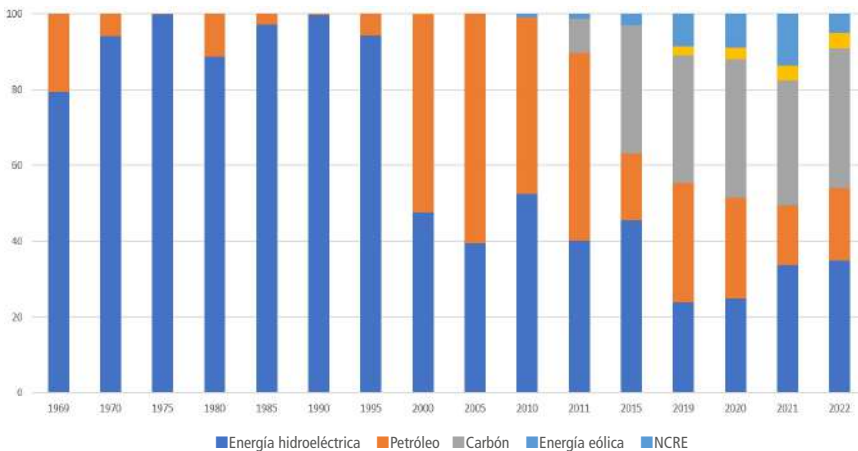
Sri Lanka está abocada y debe someterse a una transición hacia fuentes de energía más respetuosas del medio ambiente. Lamentablemente, como demuestran los ejemplos anteriores, la transición de Sri Lanka se está produciendo en medio de la competencia geopolítica –principalmente China, India, Japón y Estados Unidos–, que intenta poner en marcha diversos proyectos energéticos y de infraestructuras para hacerse con el control territorial del país, de gran importancia estratégica. Los propios intereses nacionales de estas potencias geopolíticas regionales pueden obstaculizar los esfuerzos de Sri Lanka por pasarse a las energías renovables.

La historia de la implicación de China e India en el sistema energético de Sri Lanka

Durante dos décadas, la política energética de Sri Lanka ha estado fuertemente marcada por China e India, que ahora son líderes regionales en infraestructuras, tecnologías y financiación energéticas. La estratégica situación geográfica de Sri Lanka la ha hecho especialmente vulnerable a los intereses geopolíticos y a la competencia.

Como país de renta media-baja del Asia meridional, Sri Lanka ha intentado aumentar su suministro energético para hacer frente a la creciente demanda de energía, la inestabilidad de la producción hidroeléctrica provocada por el cambio climático y la falta de financiación pública, y las reticencias del sector privado que dificultan la puesta en marcha de nuevos proyectos. La combinación energética del país ha cambiado a lo largo de los años y los combustibles fósiles han ido desplazando gradualmente a la hidroelectricidad como principal fuente de energía (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. Combinación de generación eléctrica de Sri Lanka 1969-2022



Compilado por los autores a partir de múltiples informes. Tomado principalmente de los informes anuales del Banco Central de Sri Lanka y los informes anuales del Banco Central Europeo.

Esta situación obligó al país a buscar la participación exterior en el sector energético desde finales de los años noventa. Como ya se ha dicho, tres potencias regionales han llegado a ser especialmente influyentes en la política energética de Sri Lanka: la vecina India, la potencia emergente de China y su antiguo socio en el desarrollo, Japón, cada una de las cuales entró en el sistema energético del país con intereses y competencias específicos.

India es actualmente el segundo importador mundial y el tercer refinador de petróleo crudo, el segundo productor de carbón y el cuarto de energía eólica y solar (Ministry of New and Renewable Energy, 9 de septiembre de 2022; *Gateway House Indian Council on Global Relations*, 3 de agosto de 2023). China es el mayor productor mundial de carbón y el mayor consumidor e importador de energía (*China Power*, 9 de noviembre de 2023; International Energy Agency, 2000). También es un importante productor de tecnología energética y otras materias primas asociadas, por lo que tiene un impacto mundial en los mercados y el comercio energéticos (Cosins-Smith, 7 de septiembre de 2023; *Reuters*, 28 de noviembre de 2023). La industria china de tecnologías verdes reconoce cada vez más el potencial de crecimiento de Asia meridional y se ha convertido en un actor energético de primer orden en la región a través de inversiones en proyectos y como exportador de energía.

Japón ha apoyado al sector energético de Sri Lanka desde principios de la década de 1970 a través de su cooperación con el desarrollo y de la asistencia técnica para mejorar el sistema energético modernizando las redes. En 1995 ofreció construir una central eléctrica de carbón, pero no llegó a materializarse. En 2006, China también ofreció construir una central de carbón, que entró en funcionamiento en 2011. Ese mismo año, se ofreció a India un proyecto de central eléctrica de carbón a través de un acuerdo entre Sri Lanka y la India. El proyecto se enfrentó a la oposición de grupos ecologistas y, finalmente, el movimiento social “Trincomalee Verde” consiguió detener la central de carbón mediante un fallo del Tribunal Supremo en 2016 (véase el recuadro 1).

Recuadro 1. Oposición a las centrales térmicas de carbón

En diciembre de 2006, el Gobierno de Sri Lanka y la empresa india National Thermal Power Corporation (NTPC) firmaron un memorando de entendimiento para construir una central eléctrica de carbón de quinientos megavatios (MW) en Sampoor, en la provincia Oriental. En aquel momento, la zona estaba controlada por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE). En 2008, tras el resurgimiento de la guerra civil, los LTTE fueron eliminados de la zona, que posteriormente fue demarcada como zona de alta seguridad. No se permitió regresar a las personas desalojadas de sus tierras, que se sintieron aún más angustiadas por el anuncio de que se iba a construir allí una central eléctrica de carbón. Un movimiento social local, “Green Trincomalee”, movilizó apoyo en todo el país, alegando preocupaciones medioambientales y sociales. A pesar de las protestas, India siguió construyendo la central hasta que, finalmente, un fallo del Tribunal Supremo paralizó las obras.

Estos compromisos externos en el sector energético de Sri Lanka, que promueven fuentes de energía no renovables, han contribuido a crear un entorno nacional favorable al bloqueo del carbón, incluida la corrupción. La planta de carbón financiada por China es un ejemplo paradigmático, donde las licitaciones de carbón se han visto continuamente envueltas en acusaciones de corrupción.

Múltiples informes han descubierto que se han malversado ingentes cantidades de dinero (*Sunday Times*, 17 de enero de 2016, 24 de julio de 2016, 18 de septiembre de 2022; *Daily Mirror*, 24 de agosto de 2016; Wijedasa, 3 de junio de 2018). Las inversiones en infraestructuras fósiles facilitan el programa de la Junta de Electricidad de Ceilán para seguir dependiendo de los combustibles fósiles, lo que puede retrasar la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono y el despliegue de energías renovables económicamente viables (Theiventhran, 2024). Otro ejemplo reciente de inversiones que refuerzan la dependencia del carbono es la adquisición por parte de China de los derechos para construir una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota. Aunque se afirma que está orientada a la exportación, se prevé que se utilizará para importaciones que profundizarán la dependencia energética de Sri Lanka del petróleo.

El camino de Sri Lanka hacia las energías renovables y sus retos geopolíticos

Sri Lanka se comprometió a reducir las emisiones de carbono en el marco del Acuerdo de París, lo que significa que se enfrenta al reto de

realizar la transición hacia las energías renovables. Esta transición hacia un sistema energético más limpio conllevará cambios fundamentales y sistémicos que afectarán la gobernanza, la política, el comercio y la innovación. Sin embargo, Sri Lanka sigue dependiendo, y cada vez más, de formas de energía no renovables basadas en el carbono y tanto la dinámica de poder nacional como la geopolítica energética de India, China y Japón plantean el riesgo de un aumento de la dependencia del carbono y de la vulnerabilidad energética.

Los planes de Sri Lanka para pasar a la energía limpia son política y socialmente complejos. Desde mediados de los años noventa, la demanda energética del país ha ido en aumento. Al maximizar sus fuentes hidroeléctricas, se ha creado una demanda de nuevas fuentes de energía y el Gobierno ha solicitado ayuda externa para desarrollar nuevas fuentes de energía mediante tecnología, recursos y financiación, lo que ha convertido a las energías renovables en un nuevo campo de batalla para las potencias regionales.

En 2021, por ejemplo, una empresa china ganó la licitación para construir una instalación híbrida de energías renovables en las dos islas del norte de Sri Lanka, muy próximas a India. A India no le gustó que una empresa china ganara la licitación, ya que consideraba que permitir que una empresa china construyera una instalación renovable cerca de su territorio suponía una amenaza para la seguridad nacional. Tras un año de batalla, India consiguió que se anulara la licitación y, finalmente, ofreció un préstamo para construir las instalaciones de energías renovables. Este resultado ilustra que el poder de decisión de Sri Lanka en el sector energético, incluida la necesaria transición a las energías renovables, está profundamente enredado en la geopolítica.

Un responsable de la elaboración de políticas que participó en el proceso lo describió de la siguiente manera:

En los últimos diez años hemos perdido la independencia energética y ahora no tenemos soberanía energética. El liderazgo político indeciso y la fluidez de la formulación de políticas basadas en intereses

han puesto nuestro futuro energético en manos de actores externos. Aunque, como nación, queremos pasar a las energías renovables, no podemos elegir quién las impulsa. La geopolítica desplegada en torno a los proyectos renovables en las islas del norte indica el poder de la geopolítica, los peligros que presenta y el precedente que sienta para el futuro.¹

Si el Estado de Sri Lanka queda al margen, esto es aún más cierto en el caso de las comunidades más afectadas por los proyectos energéticos. En 2022, la empresa india NTPC, en una empresa conjunta con la CEB, acordó construir una central solar de 1300 MW en una zona anteriormente destinada a la central de carbón. Para la población local, desplazada por la guerra, esto significaba que un agente externo les arrebataría sus tierras para impulsar la transición hacia la energía verde, pero sin consultarle ni indemnizarla.

Un activista local dijo:

Las personas desalojadas de sus tierras siguen refugiadas. Siguen sufriendo. Hay que permitirles regresar a su pueblo y a sus tierras. Después de tantas protestas, los gobiernos de India y Sri Lanka siguen sin entender los problemas socioeconómicos y medioambientales. La gente siempre está al final de la protesta en la toma de decisiones y nuestras voces siempre son desoídas.²

Lo que indican estos y otros ejemplos es que la transición a la energía verde se está convirtiendo en un nuevo escenario para la geopolítica, junto a la competencia entre las distintas potencias regionales por las formas tradicionales de energía basadas en el carbono.

¹ Entrevista realizada por Theiventhran en octubre de 2023.

² Entrevistas realizadas por Theiventhran en enero de 2020.

La crisis económica de 2022 aumenta la dependencia exterior

La crisis económica de 2022 ha agravado esta competición geopolítica y ha abierto nuevas vías y oportunidades de participación en el sector energético de Sri Lanka. Un responsable político resumió la dificultad de Sri Lanka afirmando simplemente que “cuando hay hambre no hay pan duro”.

En agosto de 2023 se firmaron seis acuerdos energéticos bilaterales durante la visita presidencial de Sri Lanka a India. Los acuerdos abarcaban una serie de iniciativas, como la propuesta de establecer un oleoducto que conectara ambos países, esfuerzos para mejorar la conectividad bilateral de la red eléctrica, incluido un cable submarino, y esfuerzos de colaboración en el campo de las energías renovables.

Se afirmó que Sri Lanka obtendría ventajas de los eficientes métodos de abastecimiento y procesamiento de petróleo de India, que pueden pagarse en rupias, y mitigaría así la crisis de su balanza de pagos. Al mismo tiempo, el acuerdo aumenta la dependencia de Sri Lanka de India, ya que ahora el país compra productos petrolíferos acabados en lugar de crudo. Hasta la fecha, Sri Lanka compraba crudo y lo refinaba localmente, lo que le reportaba enormes beneficios económicos. El nuevo acuerdo significa que Sri Lanka tendrá que cerrar su refinería, comprar subproductos como el queroseno y adquirir diésel y petróleo refinados a un costo mucho mayor. El acuerdo para conectar las redes eléctricas de ambos países mediante un cable submarino también aumenta potencialmente la dependencia, ya que permite a India vender electricidad a Sri Lanka y exportar la energía producida por los proyectos indios de energías renovables en Sri Lanka.

En mayo de 2023, Sri Lanka se vio obligada a abrir su mercado minorista de combustible, hasta entonces dominado por la empresa estatal Ceylon Petroleum Cooperation (CPC) y la Indian Oil Cooperation (IOC), también estatal. Esto abrió la puerta a China, ya que Sri Lanka aprobó un contrato con la empresa china Sinopec para

obtener una licencia de veinte años para explotar ciento cincuenta estaciones de servicio e invertir en cincuenta nuevas. La licencia le permite importar combustible sin depender de los bancos nacionales de Sri Lanka ni de India. En colaboración con Shell, la australiana United Petroleum y la estadounidense R.M. Parks también han recibido la aprobación del Gobierno para instalar estaciones de servicio en Sri Lanka. Estos acuerdos, realizados en el contexto de la crisis económica, aumentan la dependencia exterior de Sri Lanka y, en general, prolongan su bloqueo de carbono.

Estados Unidos y otros países entran en la lucha

Aunque Estados Unidos es un país relativamente ajeno al sector energético de Sri Lanka en comparación con India, China y Japón, en 2021 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentó un programa energético para Sri Lanka, que es a la vez una estrategia y un mecanismo de financiación. Pretende “transformar su sector energético en un sistema basado en el mercado, seguro, fiable y sostenible, movilizando inversiones para desplegar tecnologías avanzadas, aumentar la flexibilidad y mejorar la competitividad” (*United States Agency for International Development [USAID], 2021*). Se trata, pues, de hacer de la energía un bien de mercado.

Ese mismo año, la empresa energética estadounidense New Fortress Energy (NFE) firmó un acuerdo con el Gobierno de Sri Lanka para construir una terminal de gas natural licuado frente a las costas de Colombo. También permitió a NFE comprar la participación del 40 % del tesoro de Sri Lanka en una central eléctrica de 310 MW, que contribuye de forma significativa a la red eléctrica nacional. Este acuerdo se firmó sin el conocimiento de los principales actores políticos, incluido el Parlamento. Hubo una protesta local masiva por el acuerdo, pero fue en vano.

En palabras de un activista sindical que se unió a la protesta contra los acuerdos:

La audacia de firmar un acuerdo sobre un asunto de importancia nacional a medianoche sin siquiera informar al parlamento pone de relieve la naturaleza de la geopolítica y el poder de los actores geopolíticos en los asuntos locales. El Gobierno cedió a la petición de Estados Unidos mientras hablaba de patriotismo a nivel local. El sector energético de Sri Lanka está siendo diseccionado por influyentes actores externos, donde se ha convertido en agua turbia.

Tras la crisis económica, Sri Lanka también ha explorado la energía nuclear. A principios de 2023, India, Estados Unidos y algunos países europeos habían ofrecido construir centrales nucleares en Sri Lanka. En junio de 2023, el país llegó a un acuerdo con la gigante nuclear rusa Rosatom para construir una planta nuclear que podría funcionar con dos reactores y generar 300 MW. Aunque Rusia es un recién llegado al panorama energético de Sri Lanka, actualmente está construyendo la primera central nuclear de Bangladesh: la central nuclear de Rooppur, en la que India también participa, es el primer proyecto nuclear indo-ruso fuera de la India. Se desconoce el papel de India en la central nuclear propuesta para Sri Lanka.

En medio de la lucha geopolítica, Japón –un socio de larga data en el sector energético de Sri Lanka a través de proyectos desarrollados con asistencia financiera y técnica bilateral, como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)– ha sido dejado de lado. No obstante, el país mantiene su asociación de veinte años con Sri Lanka en materia de política energética, pero se ha unido cada vez más a India en la cooperación trilateral en este ámbito.

Aunque se ha producido una expansión de las energías renovables, no ha sido a expensas del continuo desarrollo de los combustibles fósiles y de la inversión en ellos. En enero de 2021, el Gobierno de Sri Lanka aprobó dos centrales eléctricas de carbón y dos plantas de gas natural licuado, cada una con una capacidad de 300 MW, para un total de 1200 MW. En septiembre de 2021, el presidente de Sri

Lanka declaró que el país daría prioridad a la obtención del 70 % de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, aunque la versión actual del Plan de Expansión de la Generación a Largo Plazo de Sri Lanka (LTGEP), que abarca el periodo 2020-2039, prevé la adición de un 55 % más de capacidad de carbón y petróleo.

La crisis energética de Sri Lanka, desencadenada por la crisis económica, ha renovado las ambiciones del *lobby* del carbón, que lo ha promocionado como una opción barata y ha fomentado su importación. Los agentes externos siguen interesados en nuevas centrales de carbón, a las que presentan como “ecológicas” y de “carbón limpio”.

Sri Lanka también ha explorado proyectos de gas natural licuado (GNL). En 2017, Sri Lanka e India firmaron un memorando de entendimiento en el que una empresa india debía construir una planta de GNL de 500 MW. El memorando se refería a una empresa conjunta en la que participarían entidades de Sri Lanka, India y Japón –pero el proyecto nunca despegó y Sri Lanka lo aplazó a pesar de la presión india. En agosto de 2022, el Gobierno adjudicó un contrato de GNL al consorcio chino-pakistaní Engro tras un competitivo proceso de licitación internacional. En agosto de 2023, el *Sri Lankan Sunday Times* informó (*Reuters*, 18 de mayo de 2016; *Colombo Telegraph*, 13 de septiembre de 2016) que el Gobierno había revocado el proyecto Engro y tenía previsto ofrecérselo a una empresa india, Petronet LNG Ltd. El GNL es un espacio geopolítico altamente competitivo con muchos actores implicados, conscientes del potencial gasístico sin explotar de la cuenca de Mannar, en la costa occidental de Sri Lanka. En enero de 2023, el ministro de Electricidad y Energía solicitó a empresas de Japón, India y NFE que elaboraran una propuesta conjunta para suministrar, construir y explotar una terminal de GNL.

El cuadro 1 ofrece una visión general de los enredos geopolíticos en el sector energético de Sri Lanka, especialmente en la última década.

**Cuadro 1. Cronología de la participación externa
en el sector energético de Sri Lanka**

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US\$)	Estado
2000	Japón	Sojitz Power Station	\$104	Planta de diésel de 172 MW, de propiedad privada.
2006	China	Central de carbón de Norocholai	\$1350	La planta, de 900 MW, se construyó gracias a un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China.
2006	India	Central eléctrica de carbón de Sampoor	\$500	La central, de 500 MW, iba a ser construida y explotada por la National Thermal Power Corporation (India). La sentencia judicial paralizó la construcción por motivos medioambientales tras las protestas (véase el recuadro 1) (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2007	EE. UU., Alemania y otros	Central eléctrica de petróleo de Yugadanavi	\$300	La planta de 300 MW recibió el apoyo de agencias de crédito a la exportación de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia y Austria.
2010	EE. UU.	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka	N/D	USAID financió el estudio de prefactibilidad.
2016	India	Grupo de trabajo conjunto sobre "Cooperación en el sector energético entre India y Sri Lanka"		India puso en marcha un grupo de trabajo conjunto para trabajar en la cooperación energética India-Sri Lanka.
2017	India y Japón	Construcción de una planta de GNL		India, Japón y Sri Lanka firmaron un acuerdo tripartito para incorporar el GNL al mix energético.
2018	China	Planta de GNL en el interior del puerto de Hambantota	\$500	China se adjudicó la construcción de la primera planta de GNL dentro del puerto controlado por China (<i>South China Morning Post</i> , 5 de mayo de 2018).
2021	EE. UU.	Planta de GNL de Yugadanavi	N/D	El Gobierno y la empresa estadounidense New Fortress Energy, que adquiere el 40 % de la central petrolífera de Yugadanavi, firman un acuerdo sobre 300 MW de GNL. Tras fuertes protestas públicas, aún no se ha puesto en marcha (<i>EconomyNext</i> , 23 de septiembre de 2021).
2021	China	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	\$12	El Gobierno de Sri Lanka anuló la licitación concedida a empresas chinas debido a las protestas de India (Chaudhury, 6 de agosto de 2023)

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US\$)	Estado
2022	India	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	\$11	Subvención de la India a condición de que la licitación se adjudique a la empresa india (Chaudhury, 6 de agosto de 2023).
2022	India	Planta solar Sampoor	\$115	Indian National Thermal Power Corporation fue autorizada a construir un parque solar de 135 MW en los terrenos anteriormente asignados a la central de carbón (Srinivasan, 12 de marzo de 2022).
2022	India	Desarrollo de los depósitos de petróleo de Trincomalee	N/D	India desarrollará conjuntamente las instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo y tendrá acceso al puerto estratégico de Trincomalee (Wijedasa, 19 de junio de 2022).
2022	India	Proyecto de energía eólica en Mannar y Pooneryn	\$750	La empresa india Adani Group se adjudicó la licitación a petición del Gobierno indio (Ariyawansa, 6 de agosto de 2023).
2022	China y Pakistán	Suministro de GNL y red de gasoductos	N/D	El consorcio chino-pakistaní Engro ganó la licitación para suministrar GNL a Sri Lanka. India protestó enérgicamente y en agosto de 2023 se canceló (Ariyawansa, 6 de agosto de 2023).
2023	India	Suministro de GNL y red de gasoductos		La licitación se adjudicó a Petronet LNG Ltd of India (Farzan, 15 de agosto de 2023).
2023	India y Omán	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	\$3850	India y Omán se adjudicaron la licitación en 2019, pero el proyecto se estancó. El Gobierno canceló el proyecto en 2023 (Reuters, 27 de noviembre de 2023).
2023	China	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	\$4500	La empresa china Sinopac se adjudica la construcción de una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota en régimen de arrendamiento de noventa y nueve años (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	China, EE. UU. y Australia	Arrendamiento de estaciones de servicio		Se ha autorizado a tres petroleras de China, Estados Unidos y Australia a arrendar 150 estaciones de servicio para que cada una de ellas opere en el mercado local. Indian Oil Corporation ya posee y explota 211 estaciones de servicio en Sri Lanka (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	India	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka		Sri Lanka e India acuerdan construir una interconexión eléctrica transfronteriza (Samant, 9 de agosto de 2023).

En este contexto, es esencial evaluar el impacto de la participación y la financiación externas en las ambiciones de transición energética de Sri Lanka, que se ha fijado como objetivo alcanzar el 70 % de energías renovables en la generación de electricidad de aquí a 2030. Sin embargo, dadas las condiciones económicas imperantes, Sri Lanka no podrá cumplir sus compromisos climáticos. Cuatro razones han frenado especialmente la transición a las energías renovables. En primer lugar, debido a la crisis, los proyectos locales de energías renovables no han despegado. Segundo, la crisis ha acentuado la dependencia de los combustibles fósiles y las nuevas infraestructuras energéticas también se inclinan en esa dirección. Tercero, los proyectos indios de energías renovables van acompañados de transmisión transfronteriza, lo que significa que la energía renovable generada por empresas indias en Sri Lanka puede destinarse principalmente al consumo indio. En cuarto lugar, Sri Lanka ha perdido gradualmente su soberanía energética al privatizar y permitir que las fuerzas del mercado decidan los precios de la energía. Todo ello ha socavado el principio básico de “energía asequible para todos”.

Conclusiones de la experiencia de Sri Lanka

El proceso de transición energética en Sri Lanka se ha caracterizado por un enfoque relativamente moderado e ineficaz que exige acciones más decisivas. Su transición hacia las energías renovables se ha visto empantanada por la pandemia y la crisis económica, cuando la atención volvió a centrarse en garantizar la suficiencia energética en lugar de la transición energética. Las desfavorables condiciones económicas minaron la posibilidad de adopción de energías renovables y facilitaron la continuación de los bloqueos de carbono.

Como muestra el gráfico 1, la transición de Sri Lanka a las energías renovables ha sido lenta, lo que también puede atribuirse a la debilidad de las instituciones y a la incapacidad de integrar las

políticas y los marcos en una política nacional más global, lo que ha permitido depender en exceso de actores externos y del juego de poder geopolítico. La crisis económica ha acentuado el poder de estos intereses geoestratégicos y ha permitido a los actores geopolíticos dictar el futuro energético del país.

La transformación de la economía política de Sri Lanka tras la liberalización ha hecho que el Estado deje de controlar el capital privado, lo que ha debilitado las instituciones estatales y ha limitado las finanzas públicas. Como consecuencia, la dinámica de la relación entre el Estado y el sector privado en Sri Lanka se ha reconfigurado y, de esta manera, ha facilitado el resurgimiento de la influencia geopolítica en el sector energético del país.

Estos factores han dado lugar a un Estado caracterizado por una transición energética fallida, en la que el proceso de descarbonización se disocia cada vez más de las consideraciones de seguridad energética y obstaculiza, así, el avance hacia la justicia social y limita su alcance. El carbón, por ejemplo, sigue recibiendo apoyo a pesar de ser el combustible más contaminante. A pesar de la urgente necesidad de avanzar hacia un mundo poscarbono ante la crisis climática, en Sri Lanka predominan los intereses geopolíticos sobre el clima y el medio ambiente.

La feroz competencia por los proyectos de infraestructuras energéticas en Sri Lanka demuestra que la geopolítica de la energía desempeña un papel cada vez más importante en la configuración de la política energética, las disposiciones y las transiciones en países similares. La influencia de las potencias tradicionales (antiguos dominantes, es decir, los países de la OCDE) está disminuyendo y están surgiendo nuevas potencias para ocupar su lugar. Se había previsto que el desarrollo de fuentes de energía renovables redujera la geopolítica de la energía, creara energía renovable asequible y disponible para los países del sur global y, en última instancia, ayudara a estas naciones a cumplir sus objetivos climáticos. Sin embargo, en Sri Lanka no ha sido así.

Una crítica frecuente a la cooperación norte-sur es que conduce al neocolonialismo porque no se basa en asociaciones equitativas. Esto se debe principalmente a que los países del norte global dan prioridad a la extracción de recursos del sur global, en lugar de centrarse en añadir valor socioeconómico a estos países ricos en recursos. La situación de Sri Lanka demuestra que esta dinámica también se aplica a la cooperación sur-sur. La situación actual se caracteriza por el auge de una forma de neocolonialismo chino, así como por un neocolonialismo impulsado por las aspiraciones indias de hegemonía regional. El enfoque inversor chino, basado en la política de “no injerencia en los asuntos locales”, se ha vuelto atractivo para muchos países del sur global, mientras que el enfoque inversor estadounidense siempre se ha conocido como “con condiciones”.

China e India se están posicionando como líderes del sur global capaces de proporcionar conocimientos, financiación y tecnología para ayudar a otros países en sus transiciones energéticas. Esto tiene su base en un trasfondo histórico de intercambio cultural y en los conceptos de unidad sur-sur y poscolonial, así como en los argumentos de que China e India están subsanando las deficiencias infraestructurales de países como Sri Lanka. Sin embargo, a medida que estos dos países asiáticos amplían su influencia económica y política, es importante señalar que también buscan materias primas, mercados y ventajas geopolíticas fuera de sus propios territorios.

El caso de Sri Lanka ilustra también que actores externos han construido allí sus propias infraestructuras energéticas. India y China han obtenido licencias para construir refinerías de petróleo y varios actores externos poseen y explotan ahora estaciones de servicio. India ha ganado licitaciones para construir y explotar plantas de energías renovables, incluidos planes para exportar electricidad a India. Se trata de una nueva forma de hegemonía. No se trata solo de comerciar con materias primas, poseer industrias o controlar mercados, sino también de infraestructuras físicas mucho más permanentes y consecuentes en términos de soberanía nacional.

Una última conclusión es que las infraestructuras energéticas tienen un poder y una influencia considerables en la economía política y nacional, y proporcionan el espacio tanto para facilitar las ambiciones hegemónicas de los actores geopolíticos como para ejercer un control considerable y actúan así de contrapeso a los actores competidores. La reactivación económica de Sri Lanka se ve socavada aún más por las acciones de los actores externos a corto y largo plazo. Cuando las infraestructuras energéticas son de propiedad local tienen una enorme ventaja financiera a largo plazo, como demuestran las centrales hidroeléctricas de Sri Lanka. Las infraestructuras energéticas emergentes, controladas desde el exterior, erosionarán gradualmente la independencia energética y tomarán el control de la arquitectura energética local. La crisis económica ha puesto en peligro los deseos de los ciudadanos y no ha habido consultas públicas sobre las próximas infraestructuras y políticas energéticas. Es una cuestión de justicia y equidad.

Reflexiones finales

El caso de Sri Lanka va más allá de la concepción convencional de la geopolítica energética, en la que la energía se considera una herramienta para el compromiso y el comercio, ya que ha permitido a los actores geopolíticos hacerse con el control territorial geoestratégico y la influencia sobre toda la isla. Sri Lanka está comprometida y necesita hacer la transición hacia una energía más ecológica, pero el país también es un campo competitivo para las potencias geopolíticas que presionan para conseguir distintos tipos de proyectos energéticos y/o infraestructuras, y para hacerse con el control territorial en la Sri Lanka geoestratégica. Estos actores geopolíticos no solo presionan a favor de las energías no renovables, sino que los enfrentamientos entre titanes regionales también obstaculizan la transición energética de Sri Lanka. La crisis económica es una coyuntura crítica en la (geo)política energética que pone de

manifiesto la vulnerabilidad de Sri Lanka y su limitada influencia frente a las grandes potencias, como demuestran claramente las incursiones de India desde la crisis económica.

Bibliografía

Ariyawansa, Niranjala (6 de agosto de 2023). LNG project: China-Pakistan company out, India in. *Sunday Times*. <https://www.sundaytimes.lk/230806/news/lng-project-china-pakistan-company-out-india-in-527458.html>

Chaudhury, Dipanjan R. (6 de agosto de 2023). Sri Lanka issues tenders choosing India over China for power projects near Jaffna. *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/sri-lanka-issues-tenders-choosing-india-over-china-for-power-projects-near-jaffna/articleshow/102463202.cms?from=mdr>

China Power (9 de noviembre de 2023). How Is China's Energy Footprint Changing? <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/>

Colombo Telegraph (13 de septiembre de 2016). Controversial Coal Power Plant In Sampur Cancelled. <https://www.colombotelegraph.com/index.php/controversial-coal-power-plant-in-sampur-cancelled/>

Cossins-Smith, Annabel (7 de septiembre de 2023). Report: China leads in race for clean technology. *Power Technology*. <https://www.power-technology.com/news/china-leads-clean-technologies-race/?cf-view&cf-click&cfminimized&cf-view>

Daily Mirror (24 de agosto de 2016). Coal Controversy: USD 3mn loss in public funds? https://www.dailymirror.lk/print/breaking_news/Coal-Controversy-USD-mn-loss-in-public-funds-/108-114624

EconomyNext (23 de septiembre de 2021). Sri Lanka's could lose billions through unsolicited New Fortress Energy deal: CEBEU. <https://economynext.com/sri-lankas-could-lose-billions-through-unsolicited-new-fortress-energy-deal-cebeu-86396>

EconomyNext (27 de marzo de 2023). Sri Lanka to lease 450 state-owned fuel stations for Chinese, US, Australian firms with Shell JV. <https://economynext.com/sri-lanka-to-lease-450-state-owned-fuel-stations-forchinese-us-australian-firms-with-shell-jv-116620/>

Farzan, Zulfick (11 de junio de 2022). Modi insisted Sri Lanka Power Project awarded to Adani: CEB Chief reveals to COPE. *New First*. <https://www.newsfirst.lk/2022/06/11/modi-insisted-sri-lanka-power-project-awarded-to-adani-ceb-chief-reveals-to-cope>

Farzan, Zulfick (15 de Agosto de 2023). Sri Lanka scraps Hambantota Oil refinery project agreement. *New First*. <https://www.newsfirst.lk/2023/08/15/sri-lanka-scraps-hambantota-oil-refinery-project-agreement/>

Gateway House Indian Council on Global Relations (3 de agosto de 2023). India-Sri Lanka: Connecting grids. <https://www.gatewayhouse.in/india-sri-lanka-connecting-grids/>

International Energy Agency (2000). *Coal in the Energy Supply of China: Report of the CIAB Asia Committee*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/2e0cfdbe-3496-44d9-8fd2-ef1da28499e9/CoalInTheEnergySupplyofChina.pdf>

Ministry of New and Renewable Energy (9 de septiembre de 2022). Renewable Energy in India. *Press Information*

Bureau, Government of India. <https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151141&ModuleId+=+2®=3&lang=1>

Reuters (18 de mayo de 2016). Sri Lanka to cancel Indian coal plant deal; proposes LNG instead. <https://www.reuters.com/article/sri-lanka-india-coal-idINKCN0Y90R8/>

Reuters (27 de noviembre de 2023). Sri Lanka approves Sinopec's \$4.5 billion refinery proposal. <https://www.reuters.com/business/energy/sri-lanka-approves-sinopecs-45-billion-refinery-proposal-2023-11-27/>

Reuters (28 de noviembre de 2023). China to lead global renewable growth with record installations- Woodmac. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/china-lead-global-renewable-growth-with-record-installations-woodmac-2023-11-28/>

Samant, Shilpa (9 de agosto de 2023). India, Sri Lanka renew bid to link power grids. *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-sri-lanka-renew-bid-to-link-power-grids/articleshow/102546949.cms>

South China Morning Post (5 de mayo de 2018). Sri Lanka gives green light for Chinese LNG plant near Hambantota port. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144808/sri-lanka-gives-green-light-chinese-lng-plant-near>

Srinivasan, Meera (12 de marzo de 2022). NTPC returns to Sri Lanka's Sampur with solar project. *The Hindu*. <https://www.thehindu.com/news/international/ntpc-returns-to-sri-lankas-sampur-with-solar-project/article65217041.ece>

Sunday Times (17 de enero de 2016). Burning questions over huge coal-buying contract. <https://www.sundaytimes.lk/160117/news/burning-questions-over-huge-coal-buying-contract-179098.html>

Sunday Times (24 de julio de 2016). Ministry passes buck on coal tender to Cabinet. <https://www.sundaytimes.lk/160724/news/ministry-passes-buck-on-coal-tender-to-cabinet-202312.html>

Sunday Times (18 de septiembre de 2022). Sri Lanka's Auditor General calls for probe in dubious coal deal. <https://www.sundaytimes.lk/220918/business-times/sri-lankas-auditor-general-calls-for-probe-in-dubious-coal-deal-495842.html>

Theiventhran, Gz. MeeNilankco (2024). Energy as a geopolitical battleground in Sri Lanka. *Asian Geographer*, 41(1), 21-45. <https://doi.org/10.1080/10225706.2022.2098507>

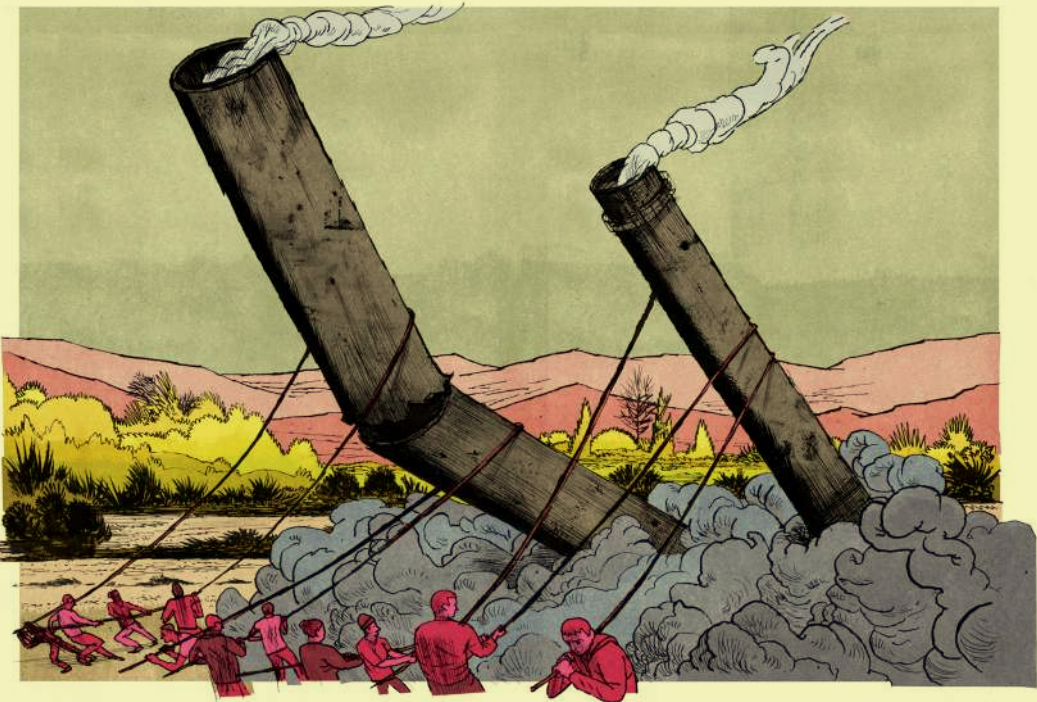
United States Agency for International Development [USAID] (2021). Energy Program. <https://www.usaid.gov/sri-lanka/activities/energy-program>

Wijedasa, Namini (3 de junio de 2018). Explosive report on hazards of Norochcholai coal power plant. *Sunday Times*. <https://www.sundaytimes.lk/180603/news/explosive-report-on-hazards-of-norochcholai-coal-power-plant-296923.html>

Wijedasa, Namini (19 de junio de 2022). Official letters show CEB Chairman was instructed to facilitate Adani projects. *Sunday Times*. <https://www.sundaytimes.lk/220619/news/adani-to-expand-still-further-in-sri-lanka-through-wind-and-solar-power-projects-486419.html>

Un futuro sin combustibles fósiles

Lecciones de la lucha contra las grandes empresas petroleras



Entrevista a Olivier Petitjean y Clémence Dubois

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: MERCEDES CAMPS

Las grandes empresas petroleras han estado en la mira de activistas durante más de veinte años como el principal obstáculo para adoptar medidas eficaces para combatir el cambio climático. El TNI entrevistó a dos importantes activistas e investigadores del clima que participan en la campaña contra la empresa multinacional francesa Total, para que evaluaran las campañas y los planes para el futuro.

Olivier Petitjean es periodista y cofundador del Observatorio de Multinationales,¹ creado en Francia en 2013. Se especializa en empresas y *lobby*. Clémence Dubois es subdirectora de campañas mundiales de 350.org, una red de activismo por el clima. Ambos forman parte de la campaña francesa Stop Total.² El Observatorio de Multinationales y 350.org copublicaron un informe en diciembre de 2023, *TotalEnergies: This is what a total phaseout looks like*, en el que analizan las opciones para recuperar el control que está en manos de las grandes petroleras y cómo los Estados podrían eliminar progresiva y rápidamente los combustibles fósiles en el marco de una “transición justa”, democrática, transparente e inclusiva.

¿Cuánto poder tienen las grandes empresas petroleras hoy en día? ¿Son tan poderosas como hace diez años?

Olivier Petitjean: Sería difícil argumentar que las grandes empresas petroleras han perdido poder en los últimos diez años. Por supuesto que las grandes empresas de gas y petróleo como TotalEnergies son cada vez más cuestionadas (Deneault, 2020), entre otros, por partes del sector financiero, y sufren creciente presión de activistas por el clima. Su “licencia social para operar” se ha erosionado

¹ multinationales.org

² stoptotal.fr

considerablemente. Al menos en algunas partes del mundo es muy probable que sus nuevos proyectos de petróleo y gas afronten fuerte resistencia.

Por otro lado, han seguido creciendo, enriqueciéndose y abriendo nuevas fronteras de gas y petróleo en todo el mundo. En los últimos años, todas las grandes empresas de petróleo y gas han obtenido más ganancias que nunca antes: Exxon, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies obtuvieron casi 200.000 millones de dólares en 2022. Ese año, TotalEnergies inició nada menos que veinte nuevos proyectos de combustibles fósiles, en algunos casos en sitios como Uganda, donde nunca antes se habían extraído esos combustibles. Además, fue clasificada la tercera empresa de gas y petróleo del mundo y la primera en África, y está procurando explotar nuevos yacimientos de petróleo y gas. Sus documentos oficiales afirman que planifican aumentar la producción de combustibles fósiles en un 20 % de aquí a 2030. De modo que la extracción continúa.

Han compensado con creces la aparente pérdida de apoyo de la opinión pública en países de Occidente mediante la construcción de vínculos aún más estrechos con otros gobiernos, especialmente en países productores de petróleo. Lo que es más aterrador es que, además de ello, han logrado ganar más influencia de la que jamás habían tenido en políticas sobre clima a nivel nacional e internacional, como queda de manifiesto en el hecho de que los presidentes de la COP28 [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] celebrada en Dubái en 2023 y la COP29, que se celebrará este año 2024 en Azerbaiyán, son en ambos casos presidentes de empresas petroleras.

Clémence Dubois: El hecho de que las grandes empresas de petróleo y gas aún estén explorando nuevos proyectos habla por sí solo: aún tienen demasiado poder y la búsqueda de enormes inversiones para el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas en los próximos años se cobrará miles de millones de vidas.

No obstante, solemos ser muy autocríticos y a veces nos cuesta ver nuestros logros como movimiento. La dinámica ha evolucionado considerablemente en los últimos diez años. En una época, las grandes empresas petroleras tenían una autoridad indudable, dominaban sin afrontar ningún cuestionamiento. Ahora, las grandes empresas petroleras están siendo objeto de creciente presión donde sea que vayan y la resistencia internacional de la ciudadanía plantea grandes desafíos a sus bastiones tradicionales. Si se toma el ejemplo del proyecto de crudo de Total en África oriental, la financiación del proyecto está demorando años debido a que las instituciones financieras están retirando su apoyo una tras otra como consecuencia de la presión que afrontan, en Kampala, París o Tokio. No es exagerado decir que todas las personas que han participado en este tipo de campañas han contribuido a retrasar a la industria y sabemos que cada granito de arena en el cambio climático hace la diferencia.

¿Cuáles son las principales fuentes de poder de las grandes empresas petroleras y cómo procuran mantenerlas?

Olivier: La fuente de su poder es en parte la misma que la de otras empresas mundiales: dinero, recursos, conexiones estrechas con gobiernos y una gran capacidad para unir fuerzas con el fin de defender sus intereses comunes. Pero tienen mucho más de todo eso que otras empresas.

Su poder también es el resultado de decenios de privatización, liberalización y políticas favorables a las empresas que han privado a los gobiernos de todo control que pudieran tener en el pasado sobre la energía nacional, los mercados y los precios, y de toda capacidad que pudieran haber tenido para llevar a cabo una transición energética directamente, sin depender de grandes empresas. Como consecuencia de ello, muchos gobiernos se han quedado aparentemente sin más alternativa que aceptar el eslogan de las grandes empresas petroleras de que no solo son el problema, sino también la solución, la única solución.

Por último, otra fuente importante de poder es el modo en que los combustibles fósiles están integrados en nuestras economías industriales en su conjunto y en los mercados financieros. Ello significa que otros grupos muy ricos e influyentes están extremadamente dedicados a su prosperidad, o al menos a no abandonar la explotación de gas y petróleo demasiado rápido. Las empresas de petróleo y gas, por ejemplo, representan una porción considerable del valor de mercado de la mayoría de las principales bolsas de valores. Es impensable que los grandes actores financieros, como BlackRock, dejen de invertir en combustibles fósiles, dado que destruiría su propio modelo de negocios.

¿Afectan las políticas predominantes sobre clima a las grandes empresas petroleras? ¿Cómo están respondiendo?

Olivier: En los últimos diez años, las principales empresas petroleras de Occidente –especialmente las europeas, como Total– han disminuido sus críticas a la acción por el clima y han intentado adoptar una actitud en apariencia más progresista. Reconocen públicamente que el cambio climático es un asunto importante y que deberíamos hacer algo al respecto. Pero la cuestión fundamental es qué deberíamos hacer exactamente y quién debería pagar.

Es decir que lo que llamamos “transición energética” debe tener tres elementos: el desarrollo de energía limpia y renovable, la eliminación de los combustibles fósiles y, por último, la reducción de nuestro consumo total de energía y materiales en general. Básicamente las grandes empresas petroleras como TotalEnergies quieren que hablemos únicamente del primer elemento, mientras que añaden en esa canasta “verde” muchas tecnologías que poco tienen que ver con la energía renovable, como la captura y el almacenamiento de carbono o los agrocombustibles o el hidrógeno. Y quieren que los gobiernos inviertan mucho dinero para pagar por todo esto y desean controlar el sector de energías renovables. Además, quieren hablar lo menos posible sobre la eliminación progresiva

de los combustibles fósiles, como hemos observado recientemente cuando se introdujo lenguaje muy débil al respecto en el texto del acuerdo de la COP celebrada en Dubái. Los directores ejecutivos de TotalEnergies, por ejemplo, admiten públicamente que en algún momento se dejarán de utilizar los combustibles fósiles, pero en un futuro lejano. Y el tercer elemento, la reducción del consumo general, apenas se menciona.

Lo que hemos visto en la práctica en los últimos años es precisamente la aplicación de este programa. No se ha avanzado en la eliminación de los combustibles fósiles y apenas hubo algunos avances con respecto al desarrollo de energías renovables, pero ello se está añadiendo a la combinación energética actual, en lugar de sustituir a los combustibles fósiles. Lamentablemente, muchos gobiernos de Occidente han aceptado básicamente la versión de “acción por el clima” promovida por las grandes empresas petroleras y están confiando en que esas empresas se encargarán de llevar a cabo la transición energética –cuyo esfuerzo inevitablemente seguirá siendo insuficiente y tardío, y tendrá un costo enorme para los gobiernos, las comunidades y los consumidores, mientras que las empresas y sus accionistas se quedarán con las ganancias y el mérito.

¿Las grandes empresas petroleras están intentando impedir una transición energética o configurarla para su propio beneficio?

Clémence: Durante cincuenta años, Total y sus pares ocultaron la crisis climática, al distraer la atención de los combustibles fósiles como principal causante del calentamiento global. Se ha documentado exhaustivamente que Total, Exxon y otras empresas mintieron deliberadamente acerca de la crisis climática, su conocimiento de las causas y su responsabilidad en esta. Y ahora son las comunidades las que sufren las consecuencias: quienes hoy sufren los impactos climáticos fueron condenados en una junta directiva hace cincuenta años.

A medida que las temperaturas han aumentado en los últimos años, resulta inútil negar la realidad. En respuesta a ello, Total está

haciendo mayores esfuerzos de comunicación, cambiando su imagen como una “empresa energética responsable”, dando a entender que ha cambiado significativamente de estrategia. Sin embargo, su supuesta participación en la transición energética, al igual que de otras empresas de petróleo y gas, le sirve como cortina de humo para lucrar con la continua explotación de combustibles fósiles. Y quieren que sigamos creyendo sus engaños.

A pesar de su cambio de discurso, Total asigna casi todas sus inversiones a la extracción de más carbono del suelo, en lugar de adoptar energía renovable. La empresa invirtió un sorprendente 75 % de sus inversiones en 2022 en petróleo y gas. En 2030, dos tercios de las inversiones empresariales se destinarán a combustibles fósiles, lo cual impedirá lograr un avance real.

¿Su excusa? Culpar a los consumidores: pasar la responsabilidad a las personas, en lugar de adoptar medidas significativas. Pero no son los únicos, además de sus accionistas, que se benefician de esta inacción. Es por ello que, habida cuenta del aumento de los impactos climáticos, el eslogan #makethempay (que ellas paguen) ha recibido tanto apoyo.

¿Qué lecciones ha aprendido –o debería haber aprendido– el movimiento por la justicia climática de enfrentar a las grandes empresas petroleras durante decenios?

Olivier: Básicamente, que no se puede pretender afrontar la crisis climática sin enfrentar al poder de las empresas. Parte del movimiento por el clima creía que podía cambiar a las grandes empresas petroleras desde adentro, ya sea mediante la participación, la realización de campañas, la denuncia, etcétera. Sin embargo, las grandes empresas petroleras no quieren cambiar y tienen suficiente poder e influencia para evitar o retrasar el cambio o desviar la mayoría de sus efectos a otros. Ellas no iniciarán un “cambio de sistema”, dado que ellas *son* el sistema.

Se han realizado campañas y acciones muy valiosas y eficaces, que siguen siendo muy necesarias y pertinentes, y en muchas ocasiones han logrado victorias para el movimiento por el clima. Persuadir a los inversores a que desinvirtan en los combustibles fósiles o a instituciones culturales a que dejen de estar patrocinadas por grandes petroleras es muy importante, al igual que los juicios sobre el clima entablados contra empresas como Shell, TotalEnergies o ExxonMobil. Ello ha sido fundamental para revocar la “licencia social para funcionar” de estas empresas. Si tomamos el caso de TotalEnergies, la empresa fue obligada a comunicar casi exclusivamente sus inversiones en energía verde y sus compromisos con el clima. Pero, por otro lado, aún existen y siguen siendo poderosas y siguen librando cada batalla legal o de comunicaciones con todos sus recursos. De modo que siempre existe el riesgo de que nuestras victorias sean demasiado pequeñas, demasiado parciales y que puedan revertirse. De hecho, actualmente estamos sufriendo algunas reacciones adversas con respecto a algunas de nuestras victorias anteriores. Es así que diría que lo que faltó fue un intento de combatir el poder de las grandes empresas petroleras desde dentro.

Clémence: El movimiento de desinversión es un buen ejemplo de un enfoque de cambio de sistema y ha sido muy exitoso en los últimos diez años. En lugar de instar a las grandes empresas petroleras a que cambiaran, se centró estratégicamente en erosionar sus pilares de apoyo: su licencia social, el acceso a financiación y la influencia en los gobiernos y las instituciones al pedirles que rompieran vínculos con la industria.

La movilización de base fue la columna vertebral del movimiento, y siempre debemos intentar organizar a grupos diversos y crear nuevas iniciativas locales, que vinculen la justicia social con la justicia climática.

A medida que nuestro movimiento creció, la intensificación de los cuestionamientos provocó que las instituciones desinvirtieran para evitar riesgos a su reputación vinculados con el apoyo a estas

industrias irresponsables. Posteriormente, los objetivos se volvieron cada vez más amplios, lo cual provocó un efecto dominó, como consecuencia del cual grandes entidades financieras, como el Banco Europeo de Inversiones, o instituciones culturales de renombre, como los museos Tate o Louvre, reconsideraron su apoyo tradicional. La campaña de desinversión, a escala mundial, generó un frente unido contra las inversiones en combustibles fósiles.

La labor de incidencia jurídica y política para responsabilizar a las grandes empresas petroleras y la colaboración con otros movimientos de justicia social también han reforzado nuestros esfuerzos estratégicos y, ante todo, han logrado apoyo a las comunidades que luchan contra proyectos sobre el terreno. Nuestra interconexión exige la acción y la solidaridad.

De cara al futuro, deberíamos centrarnos en una visión de largo plazo, reconociendo que para lograr un cambio sistémico se requiere perseverancia, adaptabilidad y solidaridad. Nuestro movimiento debe seguir aprendiendo de los retrocesos y luchar por mantener el ímpetu. En resumen, esta lucha contra las grandes empresas petroleras nos ha enseñado que la mejor forma de resistirlas es organizarse colectivamente mediante una diversidad de tácticas, pero con una visión y entendimiento comunes de cómo logramos el cambio.

¿Y cómo han evolucionado nuestros movimientos para enfrentar a las grandes empresas petroleras? ¿Cuáles son los grandes retos de cara al futuro?

Clémence: Hemos pasado de hacer hincapié únicamente en la responsabilidad de los consumidores a adoptar un enfoque más holístico que tenga en cuenta la dinámica de la oferta y la demanda.

A nivel mundial, hemos alcanzado logros importantes. Se han desinvertido miles de millones de dólares de los combustibles fósiles, se han detenido grandes proyectos de infraestructura y se ha asegurado el compromiso de autoridades locales y naciones enteras para dejar de explotar y utilizar combustibles fósiles. Nuestra

influencia también queda de manifiesto en las discusiones sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles durante las negociaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático, para lo cual obtuvimos el apoyo de más de 130 Estados.

Pero hay tendencias políticas mundiales que amenazan el progreso. Muchos activistas sufren agotamiento, desesperanza y el desafío de recuperar el impulso de las movilizaciones de 2019. Entre 2020 y 2023 se atravesó un periodo de conmoción, que estuvo marcado por el impacto de la COVID-19, los confinamientos y una sensación predominante de impotencia. El auge de la extrema derecha hace peligrar los pocos logros progresistas. Cada año en que no adoptamos las medidas necesarias, se podrían perder millones de vidas. En ese sentido, disminuir la actividad de la industria es un logro impresionante, pero no es suficiente.

Las diferencias de opinión a nivel interno son otro obstáculo. Hay quienes apoyan un enfoque inmediato más agresivo, mientras que otros destacan la necesidad de ampliar y consolidar nuestra base. Mientras que la diversidad en nuestras filas es una fortaleza, también plantea desafíos de colaboración y coordinación. No obstante, crear unidad es fundamental para preparar el terreno a fin de alcanzar puntos de inflexión fundamentales. Debemos reconocer el carácter gradual de nuestros esfuerzos de organización y entender su importancia en allanar el camino para momentos transformadores más amplios.

¿Cuáles son las principales vías para socavar o revocar el poder de las grandes empresas petroleras?

Olivier: Sería bueno pensar que podemos simplemente ignorar a las grandes empresas petroleras y construir un sistema energético diferente desde cero, basado en las energías renovables, independientemente de esas corporaciones, y dejar que lentamente se pudran y desaparezcan. El problema es que siguen invirtiendo en nueva producción de petróleo y gas, están socavando activamente la acción

política que reduciría el consumo de combustibles fósiles y, hoy en día, incluso logran cooptar una gran parte del apoyo político de los gobiernos y financiación para energía “limpia”. Debemos desarmarlas, amordazarlas e impedirles que hagan daño. Por lo que sí, es necesario comenzar a construir un sistema diferente, pero no podemos evitar algún tipo de enfrentamiento directo con el poder y la influencia de las grandes empresas petroleras.

Tradicionalmente, muchas personas en el movimiento por el clima y en la izquierda suponen que la mejor forma de hacerlo es mediante reglamentaciones, es decir, que los gobiernos deberían adoptar medidas y obligarlas a que cambien, a que dejen de producir combustibles fósiles sin elevar los precios ni despedir a sus trabajadores. Podría funcionar en teoría, pero en la práctica esto no sucederá porque los gobiernos no pueden, y a menudo no quieren, introducir reglamentaciones eficaces a empresas tan grandes y hacerlas cumplir. Las grandes empresas petroleras ya son demasiado grandes para eso. Ello no significa que no necesitan ser reguladas, sino que debemos además disminuir su poder y controlarlo. Y el modo tradicional de hacerlo es la nacionalización.

Algo más sobre la regulación: cuando se trata de enfrentar a las grandes empresas tecnológicas no necesitamos solo un nivel de regulación, por ejemplo regular sus emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos una gran variedad de regulaciones sobre diferentes piezas y turbinas de la máquina –que detallamos en nuestro informe *TotalEnergies - This is what a phaseout looks like* (Observatoire des multinationales y 350.org, 2023). Un aspecto muy importante es la regulación del *lobby* en el sentido más amplio, que incluye las puertas giratorias y toda forma de contacto entre funcionarios y representantes de la industria. Si no se regula el *lobby* de manera eficaz, nunca se podrá regular nada en absoluto, debido a que se corre el riesgo de que las empresas se apropien de los procesos de decisión. Si se imponen normas firmes sobre el *lobby* y los conflictos de interés –como las instauradas por la Organización Mundial de la Salud para el tabaco–, hay mayores probabilidades de

lograr que se aplique la regulación de manera eficaz. Es por ello que propuestas, como las de la coalición Fossil Free Politics en Europa, para introducir el mismo tipo de reglas para los combustibles fósiles que las que se aplicaron al tabaco pueden ser una parte clave de la solución, pero deben aplicarse en todos los niveles de influencia, no solamente en las Naciones Unidas y las cumbres sobre clima (COP).

¿Cómo puede llevarse a cabo la nacionalización, habida cuenta de los obstáculos económicos y jurídicos?

Olivier: La nacionalización como acto no es un problema desde el punto de vista jurídico. Puede hacerse a través de un simple acto legislativo. Se ha hecho en el pasado (incluso por gobiernos de derecha favorables al mercado) para rescatar a los bancos, por ejemplo. La cuestión es cuánto costaría y si es éticamente aceptable permitir que los accionistas de las grandes empresas petroleras –que son en su mayoría inversores institucionales, como BlackRock, Vanguard y otros– se queden con miles de millones de euros y dólares que básicamente ganaron por invertir en la destrucción del clima.

Si Francia, por ejemplo, aprobara una ley para nacionalizar TotalEnergies, tendría que desembolsar en teoría alrededor de 150.000 millones de euros para adquirir todas las acciones de la empresa, además de que podría afrontar juicios de indemnización por parte de algunos accionistas o socios que podrían argumentar que fueron privados indebidamente de un posible lucro. Y ello incluso sin tener en cuenta todos los costos de dejar de invertir en combustibles fósiles, el desmantelamiento de instalaciones y el establecimiento de una empresa pos combustibles fósiles que esté al servicio del público.

El valor oficial de mercado de TotalEnergies es 150.000 millones de euros, pero hay muchos motivos para argumentar que ese valor es exagerado, debido a que se basa en el supuesto de explotar todos los valores actuales de combustibles fósiles de la empresa. Ello se debe a que son denominados “activos varados”. Entonces, en

nuestro informe proponemos crear una comisión para evaluar el valor justo de TotalEnergies –que se suele hacer en caso de una nacionalización– pero teniendo en cuenta la naturaleza específica y problemática de esos activos. También exploramos otra opción más radical: una expropiación, en lugar de una nacionalización. Nuevamente, ello se ha hecho en el pasado, pero solamente en circunstancias muy específicas, a menudo vinculadas con un estado de guerra. El argumento sería que debido a sus violaciones anteriores y su actual sabotaje a la acción por el clima que se necesita urgentemente, una empresa como TotalEnergies puede ser expropiada por el Gobierno. Ello no significa que no habrá una indemnización, sino que ya no existiría el pretexto de que se trata de una transacción de mercado “normal”.

En todo caso, incluso 150.000 millones de euros no es un precio demasiado elevado. Los gobiernos de Occidente han demostrado con frecuencia –después de la crisis financiera de 2008 y más recientemente durante la pandemia de COVID-19– que son capaces de hallar decenas de miles de millones de dólares para rescatar al sector empresarial y a los mercados financieros.

¿Cómo sería una nacionalización eficaz y justa de las grandes empresas petroleras? ¿Cómo podríamos asegurar que logre una transición energética justa habida cuenta de la mala gestión de las actuales empresas energéticas estatales?

Olivier: Huelga decir que la propiedad estatal no es una solución en sí misma. Hay numerosas empresas estatales en todo el mundo que son tan peligrosas como las empresas privadas. Una empresa estatal puede ser más influyente en las políticas y prioridades del Gobierno, como quedó demostrado en Francia en el caso de EDF, nuestra empresa de electricidad estatal que está a favor de la energía nuclear. Por este motivo, muchas personas del movimiento climático y ambiental temen a la nacionalización de TotalEnergies.

Diría que algún tipo de reapropiación pública es necesario e inevitable para que una empresa como Total deje de estar controlada por los mercados financieros. Únicamente los Estados cuentan con los recursos y la capacidad suficientes para llevar a cabo una operación política, financiera e industrial de esa magnitud. Pero debe hacerse como parte de un proceso democrático más amplio desde el comienzo, que incluya la participación ciudadana, de partes interesadas y, por supuesto, de los trabajadores. Proponemos comenzar con una convención de ciudadanos y presentar el tipo de gobernanza inclusiva, transparente y participativa del que muchas empresas estatales carecen hoy en día.

Se puede tomar inspiración de los ejemplos del movimiento de remunicipalización (*Transnational Institute, s/f*), aunque sea un nivel de gobernanza más bajo. La nacionalización debe ser en primer lugar y ante todo una democratización de la empresa, tanto a nivel interno como en su relación con el resto de la sociedad. Para nosotros, al final de cuentas, después de que TotalEnergies esté bajo control público y haya desinvertido los proyectos de combustibles fósiles, debe formar parte de un servicio de energía público más amplio o convertirse en una empresa de propiedad ciudadana o una combinación de ambas cosas.

Consideramos que también podría haber una dimensión internacional en este proceso, donde diferentes países lleven a cabo el mismo proceso con sus empresas nacionales de petróleo y gas al mismo tiempo –Shell en los Países Bajos y el Reino Unido, ENI en Italia, etcétera. Ello daría mayor impulso a todo el proceso, además de permitir alguna forma de mutualización de los costos. Las reflexiones que hemos desarrollado acerca del caso específico de TotalEnergies en Francia no son aisladas. Hay otras organizaciones y grupos de estudios que están analizando este proceso en diversos países.

¿Cómo aseguramos que las grandes empresas de energía renovable no sigan el mismo camino que las grandes empresas petroleras?

Olivier: Se podría argumentar que, actualmente, las grandes empresas de energía renovable no solo son como las grandes empresas petroleras, sino que son los mismos actores corporativos. Participamos en un reciente informe coordinado por el Transnational Institute, “Green’ Multinationals Exposed” (14 de noviembre de 2023), en el que se plantea precisamente este argumento.

A medida que las gigantes energéticas consolidadas invierten cada vez más en energía renovable, su negocio se sigue basando en el mismo modelo: orientado al lucro, extractivista (en términos de minerales y tierra), perjudicial para las comunidades y los trabajadores, y neocolonialista, al igual que muchos de los proyectos de energía solar y eólica de gran escala en el sur global o en regiones remotas para beneficiar los intereses del norte.

Hay otra vertiente potente que necesitamos para la transición energética: una que se centre en reducir el consumo, en lugar de simplemente añadir capacidad, en satisfacer las necesidades de las personas, en lugar de las industrias y en construir sistemas de energía democráticos, parcialmente descentralizados. Esa versión de una transición es la única realmente viable. La anterior es un callejón sin salida desde una perspectiva social y climática.

¿Creen que finalmente podremos vencer a las gigantes de petróleo y gas como Total? Como activistas por el clima, ¿en qué deberíamos centrar nuestros esfuerzos?

Clémence: Vencer a las gigantes como Total no es fácil, pero para reavivar la llama del cambio de sistema, el movimiento debe enfrentar directamente este sentimiento de impotencia.

El reciente auge del activismo por el clima, observado por ejemplo en la campaña Just Stop Oil,³ destaca el deseo de adoptar medidas de inmediato. Y con la aterradora multiplicación de la crisis, es hora de centrarse en cambios que realmente importan a las

³ juststopoil.org

personas. Cambiar de estrategia significa apoyar soluciones y contar historias que destaquen que es posible emprender un camino positivo, lo cual es aún más importante si queremos impedir el avance de los movimientos de extrema derecha en el mundo. Debemos enfocarnos en hacer bien las cosas, ayudar a las comunidades sin perjudicarlas, mientras responsabilizamos a quienes están en el poder.

Cuando casi promediamos esta década crucial para combatir el calentamiento global, las decisiones que adoptemos de aquí a 2025 son fundamentales. Un plan claro para 2025, con una meta de 1,5 °C, debe apuntar a un futuro de energías renovables. Aumentar la producción de energías renovables significa que debemos seguir abordando las cuestiones financieras. Necesitamos invertir alrededor de 1,5 billones de dólares al año de aquí a 2030.

En 350.org estamos haciendo un esfuerzo conjunto con nuestros seguidores, les ofrecemos apoyo y orientación. Juntos, estamos construyendo los cimientos de la democracia energética y una revolución de energías renovables justa y equitativa. Nuestra comunidad, creada mediante campañas eficaces y contribuciones constantes, es una fuerza poderosa para un futuro sin combustibles fósiles.

Bibliografía

Deneault, Alain (2020). Corporations as Private Sovereign Powers: The case of Total. *TNI Longreads*. <https://longreads.tni.org/stateofpower/corporations-as-private-sovereign-powers>

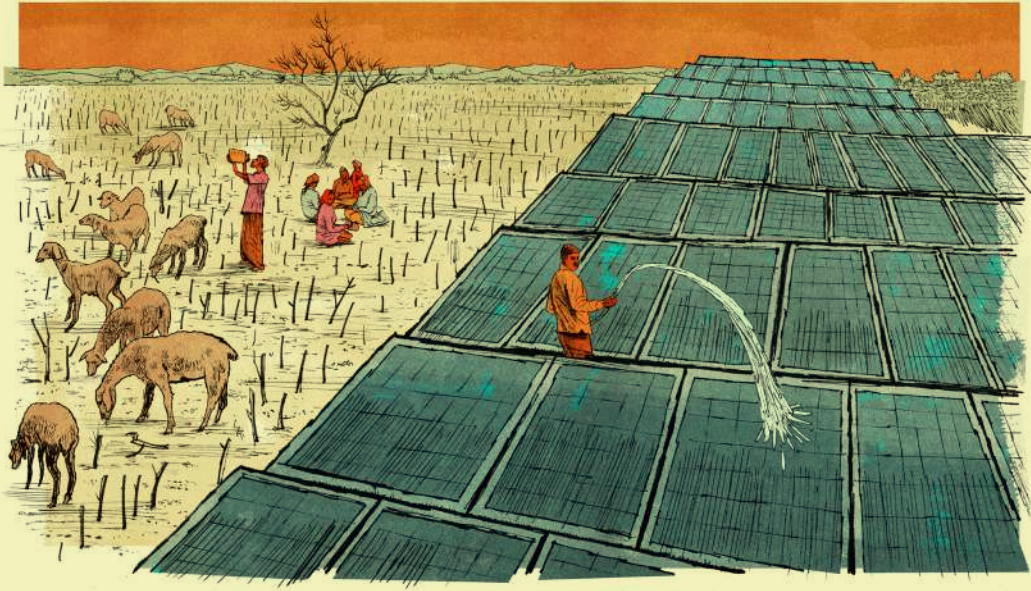
Observatoire des multinationales y 350.org (2023). *TotalEnergies: This is what a total phaseout looks like*. Francia.

Transnational Institute (s/f). Remunicipalisation. <https://www.tni.org/en/topic/remunicipalisation>

Transnational Institute (14 de noviembre de 2023). “Green” Multinationals Exposed: How the energy transition is being hijacked by corporate interests. <https://www.tni.org/en/publication/green-multinationals-exposed>

Descarbonizar la electricidad

Los costos de las energías renovables impulsadas por el sector privado y las oportunidades de alternativas en Australia, Alemania y la India



James Goodman y el grupo de investigación Decarbonising Electricity:
Gareth Bryant, Linda Connor, Devleena Ghosh, Jon Marshall,
Tom Morton, Katja Mueller, Stuart Rosewarne, Riikka
Heikkinen, Lisa Lumsden, Mareike Pampus y Priya Pillai*

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: NURIA DEL VISO

* El primer proyecto del grupo se centró en la oposición a las minas de carbón nuevas y ampliadas en Lusacia (Alemania), el estado indio de Chhattisgarh y Nueva Gales del Sur (NSW) (Australia), y dio lugar a la publicación de *Beyond the Coal Rush* (Cambridge University Press, 2020). El segundo proyecto se centra en la transición regional a las energías renovables en Lusacia, el estado indio de Karnataka y Australia Meridional, y se publicó con el título *Decarbonising Electricity*. El sitio web del proyecto es: www.decarbenergy.net

Las empresas privadas de energías renovables se anuncian como salvadoras del planeta, pero tanto en el norte como en el sur el modelo del sector privado está concentrando el poder empresarial, socavando la descarbonización y despojando a los pueblos de sus tierras y su poder. Sin embargo, la transición energética también abre nuevas posibilidades, con resistencias y movilizaciones que apuntan hacia una vía de control social de las energías renovables. Las regiones subnacionales ofrecen grandes promesas y muchas lecciones para la descarbonización de la electricidad, pero hasta ahora han dependido –y se prevé que sigan dependiendo– en gran medida del despliegue de energías renovables de propiedad privada a gran escala. En nuestro examen de las repercusiones sobre el terreno de este modelo privado en Alemania, la India y Australia las pruebas son claras: la dependencia de las energías renovables privadas agrava las desigualdades y amenaza la legitimidad democrática de la descarbonización. Sin embargo, también puede abrir oportunidades a medida que la transición impone nuevas agendas e impulsa demandas de beneficios locales, propiedad social y energía distribuida. Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la llegada de las energías renovables plantea cuestiones críticas en relación con la responsabilidad, la agencia y la capacidad, y cómo podríamos desarrollar un sistema que combine la justicia social con la acción por el clima.

Aunque el contexto del desarrollo de las energías renovables en Alemania, la India y Australia es distinto, existen sorprendentes paralelismos. Hay factores comunes en cuanto al entusiasmo, la oposición, el diálogo y la regulación. También hay tecnologías comunes que permiten la construcción de aerogeneradores más grandes y parques solares más extensos, junto con el almacenamiento de energía para superar la intermitencia. Hay nuevas opciones para la energía agrosolar y nuevas formas de energía renovable “distribuida”,

que permiten la agregación de energía solar en los tejados. Existe incluso un sector de exportación de energías renovables, con electricidad transportable en forma de hidrógeno o amoníaco.

El aspecto más destacado de la emergente cadena mundial de suministro de energías renovables es la lógica del poder empresarial y el extractivismo. En los tres casos encontramos un neoliberalismo “verde” en ascenso. La energía renovable a gran escala de propiedad privada se ha convertido en la norma. La estructura jerárquica de la producción de energía, en la que los grandes generadores envían la energía a la red y luego al consumidor, se mantiene en gran medida. Los operadores energéticos privados minimizan sus propios costos mediante instalaciones a gran escala y tratan de captar el excedente de energía renovable barata. Con parques eólicos y solares cada vez más grandes, la cuestión crítica es la de la propiedad de la tierra y su impacto en los medios de subsistencia.

La tierra es fundamental para la subsistencia en la India. En el estado de Karnataka, en el sur del país, en un pueblo rodeado por uno de los parques solares más grandes del mundo, un aldeano resume el impacto: “Para las personas sin tierra no hay ningún beneficio. Más bien han perdido su medio de vida, ya que nadie les llama para trabajar”. La planta solar paga un alquiler a los terratenientes, pero desplaza al resto de la población:

Un pueblo no es solo para los grandes terratenientes. Hay todo tipo de gente, propietarios de ganado, los jornaleros, los pequeños agricultores, etcétera. El Gobierno debería apoyar a los aldeanos. Pero la situación es terrible: los sin tierra se ven obligados a emigrar y trabajar fuera.

Del mismo modo, en el estado de Brandeburgo, al este de Alemania, los propietarios de tierras obtienen algunos ingresos, pero la mayoría no ve ningún beneficio en los parques eólicos locales. Como comentó un alcalde local: “Hay algunos habitantes que se oponen activamente, otros que simplemente se resignan a lo que está ocurriendo. Hay unos pocos que están a favor, normalmente los que se

benefician de alguna manera”. Los parques eólicos también aumentan la desigualdad: “Si alquilan sus tierras para un parque eólico, obtienen recompensas económicas muy sustanciales, pero la comunidad en su conjunto no saca mucho provecho de ello”.

La dimisión es habitual. En Port Augusta (Australia Meridional), un defensor de las energías renovables que trabajaba en la central térmica de carbón local afirma que “la gente es muy escéptica y reacia a hablar a favor de nuevos proyectos, y mucho menos a hacer algo para que se lleven a cabo”. Esto es un problema para avanzar en la transición energética: “Es difícil conseguir un apoyo público abierto”.

En los tres emplazamientos de grandes proyectos privados de energías renovables encontramos quejas comunes sobre los medios de subsistencia, la propiedad y la desigualdad frente a los proyectos energéticos empresariales a gran escala. La oposición obliga a plantear nuevos modelos, inicialmente a través de la demanda de más beneficios regionales, pero que rápidamente se extienden a la propiedad social y a la necesidad de formas más distribuidas de energía renovable. Las nuevas fuentes de poder social se vinculan con el cambio tecnológico, por ejemplo, en relación con la energía agrosolar y las formas de almacenamiento de energía doméstica y comunitaria, liberando un nuevo potencial para la descarbonización.

Las energías renovables neoliberales refuerzan los monopolios privados

La lucha por detener la quema de combustibles fósiles para producir electricidad es fundamental para la política climática mundial. En todo el mundo, la mayoría de los países están planeando pasar a las energías renovables, como una “victoria” tanto para la economía como para el clima. Las energías renovables baratas, el último “regalo” de la naturaleza a la sociedad industrial, sientan las bases de una nueva ola de crecimiento “verde”. La Agencia Internacional de

Energías Renovables (IRENA) prevé que en 2050 el 75 % de la electricidad mundial procederá de fuentes renovables, frente al 16 % actual, y calcula que el 95 % será de propiedad privada.

El nuevo modelo de desarrollo está dominado por empresas energéticas mundiales y fondos de inversión que construyen plantas eólicas y solares a gran escala, y captan así el flujo de ingresos de las energías renovables. A pesar de los cuellos de botella en la cadena de suministro, los inversores están eufóricos con las energías renovables, tanto para los minerales “críticos”, aguas arriba, como para el hidrógeno y el amoníaco “verdes”, aguas abajo. Los gobiernos nacionales y regionales compiten por atraer la financiación “verde”, que busca una participación en las nuevas industrias emergentes.

Cortejar al gran capital conlleva grandes anuncios, pero oculta el alcance total del apoyo público y el desembolso financiero. Las empresas de energías renovables dependen de la regulación gubernamental para facilitar nuevas conexiones a la red, imponer la compra de electricidad de fuentes renovables y garantizar los flujos de ingresos que sustentan los beneficios. Los inversores privados construyen y explotan los parques eólicos y solares a gran escala, y generan electricidad a un precio acordado. Los acuerdos de suministro, denominados “Contratos de Compra de Energía” (CCE), pueden durar décadas, y constituyen un puerto seguro para los inversores que buscan rentas. A menudo, las autoridades públicas invitan al sector privado a suministrar bloques de energía renovable y adjudican los CCE al proveedor más barato. Así, fuerzan los precios a la baja. Estas “subastas inversas” requieren enormes economías de escala y empresas de servicios públicos más grandes que nunca, expulsan a los operadores más pequeños, incluidos los generadores comunitarios y sin ánimo de lucro, y desincentivan el reparto de beneficios.

Todo esto tiene un costo. Las energías renovables a gran escala provocan nuevos desplazamientos y la concentración empresarial genera nuevas desigualdades. Los terratenientes situados en lugares favorables son los que más se benefician y afianzan su poder, los medios de vida agrícolas se ven desplazados, las ecologías se

transforman. Confiar en la inversión privada en energías renovables alimenta la concentración empresarial y la masificación energética. En Alemania se ha pasado rápidamente de la energía eólica cooperativa y municipal a la energía eólica empresarial a gran escala. En la India se ha producido un cambio similar, de pequeñas empresas de energía eólica a entidades corporativas cada vez mayores, de modo que en 2022 muy pocas empresas indias presentaban ofertas de licitación por los CCE nacionales. En Australia Meridional encontramos una marcada bifurcación entre la energía solar de los hogares y el creciente apalancamiento de los grandes proyectos liderados por empresas.

Con estas limitaciones, las energías renovables neoliberales ocultan el verdadero potencial de las energías renovables. A menudo se ha señalado que la energía renovable es ampliable, desde un dispositivo portátil hasta la instalación a escala de servicios públicos. Las infraestructuras y la financiación públicas podrían destinarse a un beneficio más amplio. Hay capacidad y agencia para las energías renovables distribuidas, para las transformaciones energéticas y para nuevas formas de participación y democratización de la energía. Sin embargo, la opinión generalizada, de IRENA hacia abajo, es que solo las energías renovables privadas a gran escala pueden hacer frente a la crisis climática. Que garanticen la “legitimidad social” es otra cuestión y un componente crucial para alcanzar los objetivos de las energías renovables.

Las energías renovables neoliberales socavan la descarbonización

La transición energética neoliberal –basada en la búsqueda de rentas y la monopolización de los rendimientos del capital– puede socavar la descarbonización. La financiación de las energías renovables es una clase de activo intercambiable con otros activos no renovables. No se caracteriza por la necesidad de reducir las emisiones. Al contrario, los intereses de esta inversión privada a menudo pueden

entrar en conflicto directo con la abundancia de energía renovable necesaria para la estabilidad climática. Las empresas confían en la escasez, pero con el descenso a largo plazo de los costos de las energías renovables y la electricidad diurna prácticamente ilimitada, se enfrentan a un problema para mantener los flujos de beneficios.

La energía eólica y solar intermitente produce energía excedentaria. En épocas de exceso, los precios caen a cero (y por debajo). Para proteger a los inversores y mantener los precios, a menudo se desconectan las energías renovables. Este “recorte” o “derrame” es habitual: algunos días en Australia se derrama hasta el 20 % de la energía renovable. La contradicción es desconcertante: la abundancia de energía renovable se convierte en un problema que hay que limitar, no en una virtud que hay que potenciar.

Con ello, las formas más distribuidas de energía renovable se convierten en una amenaza para la cuota de mercado de las empresas. La creciente prevalencia de las energías renovables domésticas en Australia –proporcionalmente la mayor del mundo–, por ejemplo, socava los beneficios de los generadores a escala de servicios públicos. En lugar de apoyar la energía distribuida, la política se orienta hacia las grandes empresas de servicios públicos. En 2023 Australia anunció un precio mínimo subvencionado para los generadores, explícitamente para reducir aún más el riesgo de inversión.

Por último, está el reto de que más industria, alimentada con electricidad renovable barata, acelera el crecimiento económico. A mayor producción, mayores emisiones. Para IRENA, las energías renovables garantizarán las reducciones de emisiones necesarias, pero solo si también disminuye la demanda energética. El aumento anual del 1,1 % en el consumo de energía, paralelo al crecimiento económico, tiene que convertirse en un descenso anual del 0,2 %. Para IRENA, el crecimiento debe desvincularse del consumo de energía: una tarea difícil cuando la energía es tan barata. La experiencia sugiere la trayectoria contraria: que la energía barata alimenta la demanda energética.

Tres casos

Nuestra investigación se ha centrado en los estados de Karnataka (India), Brandemburgo (Alemania) y Australia Meridional: todos ellos son regiones pioneras en energías renovables, aunque muy diferentes en cuanto a su historia y su ubicación en la economía mundial.

En los tres contextos, las promesas iniciales han dado paso a un compromiso activo con el modelo empresarial imperante de desarrollo de energías renovables a gran escala. Los activistas, las organizaciones comunitarias y los grupos de interés han desarrollado una serie de tácticas, estrategias y objetivos políticos para rebatir el modelo privado y las políticas estatales de reducción de riesgos que lo sustentan. En respuesta, gobiernos y empresas han ajustado la normativa y ofrecido concesiones en un panorama dinámico, contestado y en constante evolución.

Karnataka

Karnataka es ahora uno de los estados líderes en energías renovables de la India, a tal punto que, en mayo de 2023 el 54 % de la capacidad instalada procedía de la energía eólica y solar; frente al 31 %, de carbón; el 12 %, de energía hidroeléctrica, y el 3 %, de energía nuclear. La energía eólica a pequeña escala predominó hasta mediados de los años 2000, cuando Karnataka se convirtió en un estado líder en energía solar a escala comercial. Prácticamente toda su energía renovable es de propiedad privada, lo que contrasta con el carbón y la energía hidroeléctrica “heredados”, que son principalmente de propiedad estatal. Predominan las grandes empresas: diez de ellas poseen el 58 % de la capacidad solar y el 30 % de la eólica.

Karnataka ha aplicado una política proactiva en materia de energías renovables desde finales de los años noventa. El Estado pretendía atraer la inversión privada y reducir los costos energéticos de las deficitarias empresas estatales de distribución de electricidad (que

subvencionan los precios, sobre todo en las zonas rurales). El Estado tiene condiciones favorables para la energía solar y eólica, y era importador neto de energía de carbón, que ahora ha cambiado por energías renovables. Los promotores de energías renovables licitan contratos de suministro a largo plazo con las empresas distribuidoras mediante subastas inversas supervisadas por la agencia estatal de energías renovables, la Karnataka Renewable Energy Development Limited (KREDL).

La KREDL desempeña un papel clave de mediación entre promotores privados, propietarios de tierras, empresas de distribución y redes de transmisión. Sus ingresos proceden de una tasa a los promotores de proyectos y promete conseguir todas las autorizaciones en un plazo de sesenta días. También ha creado agencias conjuntas de “finés especiales” con el Gobierno federal, como la Karnataka Solar Power Development Corporation Limited (KSPDCL), que estableció el proyecto solar Pavagada, de 2 GW, el mayor del mundo cuando fue terminado en 2019. KREDL planea ahora duplicar con creces el tamaño de la planta de Pavagada, hasta 5 GW, y está construyendo otra central híbrida eólica-solar-batería de 5 GW en Shimoga, al norte de Karnataka.

El ejemplo de Pavagada resume las tensiones y posibilidades del desarrollo de las energías renovables en la India. El parque se extiende a lo largo de 4856 hectáreas y abarca cinco localidades con una población de diez mil habitantes. La zona es árida y propensa a la sequía, con niveles elevados de pobreza, sobre todo entre las mujeres y las comunidades tribales y de castas desfavorecidas, y ha sido escenario de luchas por los derechos sobre la tierra y su redistribución. La tenencia de la tierra sigue estando muy estratificada, con algunos grandes terratenientes y muchos minifundios, mientras que aproximadamente la mitad de la población carece de tierras.

El KSPDCL reunió tierras de 1422 propietarios diferentes mediante la firma de contratos de arrendamiento de veintiocho años a un precio fijo con incrementos establecidos para todo ese período. Las autoridades estatales subastaron varios PPA de veinticinco años

para los promotores y el precio disminuyó constantemente hasta menos de la mitad del precio medio de la electricidad generada a partir del carbón. Hubo cierto apoyo del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, y el parque atrajo grandes empresas privadas de energías renovables como Tata, Fortum, Adani, ReNew y Softbank.

El modelo de arrendamiento de tierras de Pavagada contrasta con otros enfoques de adquisición de tierras que esencialmente expulsan a la gente de la tierra y crean un espacio aparentemente vacío para las energías renovables. La coexistencia con los terratenientes ofrece un mejor enfoque, pero plantea nuevas cuestiones. El arrendamiento beneficia a los terratenientes pero agudiza la desigualdad. Como nos dijo un sin tierra: “La gente que tiene más tierras se hace más rica. Nosotros estamos donde estamos, sin tierra”.

Los arrendamientos se negociaron durante una sequía y los terratenientes se sintieron presionados a aceptar: “Vinieron, nos lo pidieron, teníamos hambre, se lo dimos”. Los ingresos por arrendamiento de los pequeños agricultores no son suficientes para vivir y la seguridad alimentaria se ha resentido. Como dijo un agricultor: “Si cultiváramos lentejas durante un año, las utilizaríamos para el consumo familiar durante dos años... Ahora, para cualquier pequeña cosa, dependemos del mercado”.

Pero los sin tierra son los principales perdedores. Históricamente han dependido del trabajo agrícola estacional y de la cría de animales a pequeña escala, que se han visto desplazados por el parque solar. Uno de los sin tierra entrevistados dijo: “Antes de la energía solar, nuestras ovejas vivían muy bien. Después de la energía solar hay dificultades... No hay espacio para pastar”.

La pérdida de medios de subsistencia no se compensa con el empleo en la planta. Hay algunos empleos locales en seguridad, limpieza y corte de césped, pero no son suficientes. Esto ha afectado especialmente a las mujeres de las comunidades tribales y de casta baja, que han perdido fuentes de autonomía financiera. Como dijo una mujer: “Tenemos que depender de los ingresos de nuestros

esposos y ellos nos controlan aún más”. Se les prometió mejor educación, formación y empleo: “No queremos que nuestros hijos lleven una vida como la nuestra. Queremos darles una educación mejor para que puedan salir adelante”.

Las autoridades afirman que han aprendido la lección y que la ampliación de Pavagada y la propuesta de una central híbrida de 5 GW suponen una nueva fase en la planificación de las energías renovables. En Pavagada se observa un mayor compromiso con la financiación de las escuelas locales y las infraestructuras sociales (Subramanian, 26 de abril de 2023). Sin embargo, los programas de formación y los puestos de trabajo prometidos aún no se han materializado, aunque existen propuestas de uso mixto y de energía agro-solar para permitir la coexistencia de la agricultura con las plantas solares. La colaboración prevista con la población local sigue sin desarrollarse.

La central híbrida propuesta tendrá que coexistir con la agricultura local, ya que el norte de Karnataka es más fértil y la tierra está más repartida: el movimiento de reforma agraria tuvo éxito en esta parte del Estado y hay menos gente sin tierra. La propuesta de un modelo “híbrido” más variado, que combine energía eólica, agro-solar y capacidad de baterías, en lugar de una extensión uniforme de paneles solares, ofrece potencialmente más espacio para la agricultura. También existen posibilidades de cogestión, que podrían basarse en los consejos de los pueblos (panchayats), que tienen una gran capacidad de gobernanza local.

Brandenburgo

Al igual que Karnataka, Brandenburgo apuesta decididamente por las energías renovables. En 2023 obtendrá el 70 % de su electricidad a partir de estas energías, principalmente energía eólica. Su Estrategia Energética 2022 preveía un 100 % de energías renovables para 2030. Para ello ha propuesto un cambio hacia la energía solar:

la generación de energía eólica se duplicará, de 8 GW a 15 GW, mientras que la energía solar se cuadruplicará, de 4 GW a 18 GW.

La fiebre por la energía solar ya está en marcha. A principios de 2023, un estudio del Gobierno descubrió un gran potencial para la energía solar en tejados (29 GW), en terrenos degradados o de escaso valor (33 GW) y también para estacionamientos, energía hidráulica y agrosolar (hasta 270 GW). En agosto de 2023, el Estado anunció una “ofensiva de expansión de la energía solar” (Bhambhani, 15 de septiembre de 2023) centrada en iniciativas locales de planificación del uso del suelo y en la energía solar distribuida dirigida por municipios, incluido un impuesto local a la energía solar destinado a las comunidades afectadas, así como subvenciones y formación para ampliar la mano de obra local.

La ofensiva solar marca la última fase de la trayectoria de las energías renovables en Brandeburgo. A partir de los años noventa, las energías renovables en Alemania se centraron sobre todo en iniciativas cooperativas y municipales de energía eólica, especialmente en el oeste del país. En Brandeburgo, sin embargo, los parques eólicos privados a mayor escala eran más comunes y esto se convirtió en la norma en todo el país después de que la Ley Federal de Energías Renovables de 2017 exigiera licitaciones competitivas para todos los contratos de suministro de energía y favoreciera, de esta manera, a los operadores privados más grandes.

A esto le siguió una caída en las aprobaciones de proyectos de energía eólica, ya que las instalaciones propuestas enfrentaron cada vez más oposición local. Como constató el grupo federal Energía del futuro en 2021, los problemas en las zonas rurales eran “considerables”. La movilización de la población local contra los grandes parques eólicos de propiedad corporativa retrasó y anuló proyectos. Hay escasez de emplazamientos disponibles, ya que la normativa sobre el uso del suelo define la proximidad permitida a las zonas residenciales, y la disponibilidad de terrenos forestales, por ejemplo, es limitada.

La energía eólica puede coexistir con otras formas de uso del suelo rural, pero el desencanto es cada vez mayor, sobre todo a medida que las turbinas son más grandes. Si nos centramos en la región meridional de Teltow-Fläming, comprobamos que la aceptación local estaba disminuyendo, ya que “poco a poco, uno empieza a sentirse rodeado”. La población era poco consciente de lo que se avecinaba. En palabras de un residente: “Nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo cuando las torres aparecieron de repente”.

En 1997 el Estado dio prioridad a la energía eólica en la ordenación del territorio y, en 2003, la legislación federal exigió la designación de “zonas de aptitud eólica”. Con ello, los cinco organismos regionales de planificación de Brandeburgo elaboraron mapas de uso del suelo para la energía eólica. Los críticos locales de la energía eólica habían sido elegidos para los consejos locales y con una serie de partes interesadas de sindicatos, grupos ambientalistas y la comunidad habían vuelto a regular efectivamente las asignaciones de energía eólica. Como resultado, la energía eólica se limita ahora a un 2 % de la superficie, concentrándose en zonas concretas.

El proceso de planificación dio lugar a un compromiso local más activo y a una mayor oposición de la planificación regional. Esto puede interpretarse como un proceso democratizador, en el que la toma de decisiones a nivel regional y estatal sobre la energía y la industrialización “verde” se politizó y sometió a un mayor escrutinio. Irónicamente, la llegada de la energía eólica corporativa a gran escala instigaba la participación local, articulada a través de estructuras de gobernanza local. Es importante destacar que el proceso se basó en el diálogo y no en la oposición frontal: el grupo Country Life, por ejemplo, favoreció la “armonía” con la energía eólica, buscando obtener beneficios de esta.

La distribución de los beneficios es una cuestión clave. Prácticamente los 350 parques eólicos que funcionan en el Estado son de propiedad privada; solo diez son de propiedad local. La desigualdad en la propiedad genera desigualdad financiera. Los terratenientes se benefician. Como declaró un residente: “Puedo obtener treinta mil

euros al año por arrendar una hectárea de tierra, para algunas personas eso significa que ya no tendrían que trabajar”. Los municipios asumen el costo. Para compensarlo, a partir de 2019 el Gobierno estatal exigió a las empresas eólicas el pago de una tasa de diez mil euros anuales a los ayuntamientos; esta medida se reforzó en 2021 con una subvención federal comunitaria de 0,2 euros por kWh.

Nuestra investigación concluyó que las empresas también estaban respondiendo a las presiones, con esfuerzos más sofisticados para anticipar y prevenir la oposición. Las empresas iniciaban las consultas en la fase de concepción, en lugar de esperar hasta el final del proceso de planificación, como permite la legislación urbanística, y ofrecían mayores beneficios a la comunidad. Una empresa había estado consultando sobre el uso de terrenos forestales para un parque eólico, ofreciendo un modelo de “20:80”, con una financiación comunitaria fijada en cuatro veces el costo de alquiler del terreno.

La energía eólica ha precipitado nuevas formas de gobernanza energética y en estas se basa la actual introducción de la energía solar. Los paneles solares suponen una amenaza para el uso preexistente del suelo, lo que explica que el Estado se centre actualmente en los tejados, los estacionamientos y las superficies de agua sin utilizar, así como en los terrenos infrautilizados. El Gobierno estatal se esfuerza por paliar las repercusiones en la agricultura mediante la ordenación del territorio y cada vez hay más interés por la energía agrosolar, que puede coexistir con la agricultura. Es probable que haya alguna pérdida de tierras agrícolas, aunque se calcula que alrededor del 15 % de la agricultura se destina a biocombustibles y la sustitución por energía solar sería más eficiente.

Los ingresos de la energía solar son hasta diez veces superiores a los de los cultivos: encontramos arrendadores a los que se les ofrecen contratos de treinta años a 2500 euros por hectárea, frente a cuatrocientos euros por hectárea de la agricultura. Los peligros son evidentes para los agricultores arrendatarios, que pueden ser desalojados cuando sus arrendadores opten por la energía solar. Esto

supone una gran amenaza, ya que el 73 % de las tierras agrícolas del estado son arrendadas.

La energía solar, al igual que la eólica, presenta economías de escala: se calcula que el tamaño mínimo viable de un parque solar es de cincuenta hectáreas. Ya se está produciendo una ampliación. En 2021, el mayor parque solar del estado y de Alemania era de 164 hectáreas en Werneuchen, cerca de Berlín. Un año más tarde se aprobaron cincuenta y cinco proyectos solares en el estado federado, con una superficie de 2800 hectáreas. Las autoridades de Teltow-Fläming habían recibido la propuesta de un promotor de un parque solar de mil hectáreas. En palabras de un promotor: “No hay límites de tamaño, al menos legales”. Esta salvedad es importante, ya que las respuestas normativas serán decisivas para determinar el resultado.

Sin duda, los recientes compromisos del Gobierno estatal en materia de energía solar sugieren que las posibilidades de reparto de beneficios están ganando terreno. Se está pasando de considerar que la “aceptación social” de las energías renovables impone una limitación a su instalación, a verla como un medio para permitir una mayor aceptación. Las propuestas estatales de energía solar hacen hincapié en las iniciativas distribuidas y municipales para el espacio no utilizado destinado a paneles solares. También hay una mayor aceptación de la ejecución y planificación a nivel local, incluidos los ingresos locales y la recualificación.

La energía solar entraña nuevos peligros, pero podría decirse que ofrece un nuevo potencial de suministro distribuido y de propiedad social. La actual respuesta estatal refleja las varias décadas de movilización, compromiso e innovación institucional en torno a la energía eólica. La oposición ha permitido una mayor participación en la gobernanza energética: el proceso de “guerra estratégica” en torno a las energías renovables, como lo describió un residente, va a continuar en un nuevo terreno.

Australia Meridional

Al igual que Brandeburgo, Australia Meridional también aspira a alcanzar el 100 % de electricidad renovable en 2033. En 2023, las energías renovables no hidráulicas suministrarán cerca del 66 % de la electricidad del estado, el 24 % procedente de la energía solar y el 44 % de la eólica (Energy & Mining, 2022). El crecimiento ha sido rápido: en 2000 las energías renovables solo cubrían el 1 % de las necesidades eléctricas del estado.

En 2002 el Gobierno estatal había previsto un 26 % de energía eólica y solar combinadas (McGreevy y Baum, 12 de marzo de 2021), para lo cual puso en marcha un esfuerzo coordinado de inversores, emplazamientos y contratos de suministro. Desde el principio la atención se centró en el golfo de Spencer y en el llamado “Triángulo de Hierro”, formado por Port Pirie (con una fundición de plomo), Whyalla (con una planta siderúrgica) y Port Augusta (con una central eléctrica de carbón, cerrada en 2016). El golfo tiene un gran potencial para la energía eólica y solar y está bien conectado a las líneas de transmisión. También cuenta con una mano de obra industrial (aunque con marcadas desventajas socioeconómicas), factores todos ellos que lo hacen atractivo para los inversores en energías renovables.

Como en Karnataka y Brandeburgo, las energías renovables en Australia Meridional han pasado por varias etapas. Hubo entusiasmo inicial, sobre todo en Port Augusta, donde se consideraba que ofrecía una “transición justa” para dejar de depender del carbón. La central eléctrica local había sido un importante empleador y, cuando su propietario privado, Alinta, anunció el cierre en 2015 (*ABC News*, 10 de junio de 2015), una campaña local exigió una nueva central termosolar a gran escala para sustituirla.

Alinta cerró la central antes de tiempo, en 2016, sin transición directa a las energías renovables. Sin embargo, la campaña tuvo efectos más amplios, ya que la región se convirtió en foco de atención para los inversores en energías renovables. Esto llevó a la construcción

de varios grandes parques eólicos privados, como el de Lincoln Gap, con 101 turbinas en veinte mil hectáreas, y el Parque Renovable de Port Augusta, con cincuenta turbinas en cinco mil hectáreas. La energía solar de gran tamaño es menos común, aunque hay un parque solar de ochocientas hectáreas cerca de Port Augusta, propiedad de la Bungala Aboriginal Corporation, y una planta termosolar de veinte hectáreas, Sundrop, dedicada a la desalinización y calefacción para tomates de invernadero.

Tras una oleada inicial de inversiones, la normativa estatal se volvió más estricta en 2019, con reglas sobre impactos acumulativos, proximidad a municipios y sobre el acceso a “zonas de alto valor medioambiental, paisajístico o cultural” (State Planning Commission, 2019). También hubo medidas sobre notificación pública, desmantelamiento, estabilidad de la red, niveles de ruido y corredores de fauna y, con ello, un aumento de la altura permitida para las turbinas de 150 a 240 metros. Estas medidas coincidieron con un descenso de las solicitudes, en parte por el anuncio de un interconector de 900 km con Nueva Gales del Sur, cuya finalización está prevista para 2025, lo que pareció atraer las propuestas hacia el oeste del estado.

Una tercera fase del desarrollo de las energías renovables ha llegado a la región, cada vez más centrada en los usos “derivados”, sobre todo del hidrógeno “verde” procedente de energías renovables, tanto para la exportación como para su uso “en tierra”, como en la planta siderúrgica de Whyalla. El Plan de Empleos del Hidrógeno del Gobierno estatal, anunciado en 2023, se considera ahora generador de una nueva ola de interés por las energías renovables en la región.

La planificación de las energías renovables en Australia Meridional se ha centralizado en el Panel de Evaluación de la Comisión Estatal, que organiza consultas y audiencias públicas. Las empresas intentan definir sus proyectos como “proyectos de la Corona” de importancia estatal (*PlanSA*, 2024), lo que impide apelar toda decisión final del ministro; de ese modo, tienen acceso a un “servicio previo a

la autorización” acelerado con un departamento patrocinador, que identifica las “infraestructuras estatales esenciales”.

El proceso de planificación estatal soslaya a las autoridades locales, aunque estas podrían permitir una mayor participación e implicación de la comunidad. Los ayuntamientos colaboran en el grupo Spencer Gulf Cities, que recientemente ha promocionado la zona como “centro neurálgico” de las energías renovables (*Spencer Gulf Cities*, 13 de septiembre de 2022). Su papel formal es limitado y ni siquiera reciben ingresos fiscales de las energías renovables, ya que la electricidad está exenta de las tasas locales. Los ayuntamientos elaboraron un informe en 2018 para cuestionar esta exención (AEC, 2018), pero el Gobierno estatal se ha negado a abordarlo.

La cuestión fiscal, que hace que los contribuyentes locales subvencionen a las grandes empresas mundiales de energías renovables, ha suscitado el descontento. La preocupación se centra en la falta de beneficios locales, sobre todo en términos de empleo. Los contratistas traen su propia mano de obra y solo recurren al mercado laboral local para trabajadores poco cualificados, contratados de forma eventual. No existe un plan local de mano de obra y el trabajo es intermitente, aunque algunas agencias de empleo locales establecen contratos recurrentes.

Como reflejo de décadas de desventaja regional, la región cuenta con muy pocas empresas capaces de aceptar trabajo en la industria. La política estatal hace poco por colmar las lagunas de cualificación. Los planificadores se basan en la afirmación de que las industrias consumidoras de materias primas generarán puestos de trabajo, en lugar del sector de las energías renovables. Mientras tanto, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo llegan de forma indirecta, en los sectores de la salud, el transporte, el comercio minorista y la hostelería.

Como en Karnataka y Brandeburgo, los principales beneficiarios son los terratenientes anfitriones. Las tierras son áridas y la energía eólica tiene un impacto mínimo en los ingresos de las explotaciones. Cada turbina puede reportar unos ingresos anuales de alquiler

de hasta veinticinco mil dólares australianos durante unos treinta años; el 40% del estado pertenece a arrendamientos de pastoreo, tierras apropiadas a los pueblos indígenas locales y concedidas a los colonos por las autoridades coloniales. Estos terratenientes son ahora los que más se benefician de las energías renovables, lo que reafirma la desposesión colonial y agrava la desigualdad.

Sin embargo, la situación está cambiando, dado que se han reconocido los derechos sobre la tierra. El Gobierno federal se vio obligado a reconocer el título de propiedad aborigen con el caso Mabo de 1992 y la legislación federal de 1994 permitió a los pueblos aborígenes reclamar la titularidad de las tierras. Tras veintiocho años de lucha, los pueblos nukunu y barngarla obtuvieron el Título Nativo en la región a partir de 2016. Se han devuelto algunas “tierras de la Corona” de propiedad estatal y los propietarios tradicionales han obtenido algunos derechos de negociación sobre las tierras estatales arrendadas cada vez que se produce algún cambio en los acuerdos de tenencia, como en el caso de las energías renovables.

Hasta la fecha, las empresas de energías renovables han sido responsables de una serie de acuerdos de “consentimiento” *ad hoc* y muy divisivos. Como afirmó un titular de un título aborigen: “Todavía no he tenido ninguna buena experiencia con las energías renovables, solo mucha indignidad y dolor”. Una excepción es el parque solar de Bungala, que obtuvo un contrato de arrendamiento para emplear a trabajadores y contratistas aborígenes.

Con el resultado del Título Nativo, los Propietarios Tradicionales de Barngarla (BDAC, por sus siglas en inglés) firmaron en 2022 un acuerdo pionero sobre el uso de la tierra, y se aseguraron de este modo la copropiedad y los ingresos por arrendamiento de un gran parque solar en tierras de la Corona. Las empresas mineras suelen pagar cánones a los propietarios tradicionales, pero la copropiedad es prácticamente desconocida, salvo en una gama cada vez mayor de proyectos de energías renovables.

El resultado de Barngarla se considera un gran avance. La participación en el capital significa que

el BDAC no solo es el terrateniente y propietario de la totalidad del proyecto, sino que también tendrá una participación en el mismo, lo que nos convierte –a los pueblos de las Primeras Naciones de la zona– en copropietarios de una de las mayores centrales de energía renovable del Estado .

Con ello, podría decirse que se abre una nueva fase de copropiedad en el desarrollo de las energías renovables.

Dado que el 40 % de la energía renovable a nivel nacional se ubicará en tierras indígenas, la copropiedad ha crecido. En 2023 había una docena de proyectos de energías renovables de propiedad conjunta con grupos indígenas locales (Baker, 3 de noviembre de 2023); el National Native Title Council (21 de abril de 2023) declaró que esto requería una “reconceptualización del papel de las Primeras Naciones en el desarrollo”. No hay razón para que este modelo de propiedad social no se extienda a otras poblaciones u organizaciones locales y se redefina la energía renovable para el desarrollo regional.

Posibilidades

La propiedad de la tierra es la cuestión clave para el desarrollo de las energías renovables a gran escala. Los inversores en energías renovables buscan un espacio vacío para acumular, ejemplificado en el mar de paneles solares, de horizonte a horizonte, en el parque solar de Pavagada. El comisario australiano de Infraestructuras Energéticas nos dijo que los inversores en energías renovables prefieren “grandes extensiones de terreno y un número reducido de propietarios, sin vecinos, sin ciudades ni otros asentamientos”. De este modo, hacen operativas las desigualdades existentes en materia de tierras, desde el mito australiano de la *terra nullius* hasta los fracasos de la reforma agraria en la India.

Frente a la creación de una nueva élite terrateniente basada en las energías renovables, y la desigualdad que esto conlleva, hemos encontrado a la población local que presiona para lograr una asociación más democrática. Las narrativas de las energías renovables regionales revelan un claro imperativo de democratizar el proceso de transición para aprovechar todo su potencial de transformación social. Los componentes clave serían el reparto de los ingresos, la copropiedad de las instalaciones energéticas y la cogestión de la tierra, la mejora del empleo y un diseño de la energía solar que coexista con la agricultura. En palabras de un agricultor indio: “La producción de energía continuará; las estructuras no pueden desmantelarse. Por lo tanto, deberían darnos una asociación”.

La población local sostiene que la energía renovable debe tratarse como un proyecto de desarrollo regional, no simplemente como un proyecto energético. No debe desplazar los medios de subsistencia existentes y debe ofrecer beneficios locales considerables. El enorme superávit financiero obtenido de las energías renovables beneficia principalmente a las empresas de electricidad: la población local reconoce que esto es una gran injusticia y exige un cambio de modelo. Cuando visitamos parques eólicos y solares, a menudo nos dijeron que se trataba de un trabajo en curso. El director de Pava-gada dijo que la planta era una “universidad” en la que se ponían a prueba nuevas ideas.

Este “trabajo en curso” está siendo forzado en nuevas direcciones. La oposición ha creado nuevas demandas de regulación, un mayor compromiso con el desarrollo regional y nuevas iniciativas de descarbonización. Al mismo tiempo, la energía distribuida persiste. Las energías renovables ya han establecido un nuevo sector energético doméstico y comunitario, un “procomún” energético basado en la autonomía energética.

Siempre existe la posibilidad de que haya retrasos. La transición energética es inevitable, pero su calendario es controvertido. La dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo considerable, sobre todo en el caso de la electricidad. Se necesita un fuerte respaldo

público para superar estas presiones: el desplazamiento, la privación de derechos y el desencanto solo pueden ralentizar la transición. La propiedad social y la regulación participativa siguen siendo débiles, pero pueden ser la base del apoyo público.

La llegada de las energías renovables “socializa” el cambio climático y climatiza la energía. Desempeña un papel clave en el avance de los imaginarios sociales emergentes en la búsqueda de la agencia climática y la ética necesaria de la vida afectada por el clima. Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la coyuntura actual ofrece múltiples posibilidades (aún inimaginables).

La oposición obliga a una participación democrática más fuerte y apunta a una transición basada en la propiedad común, más allá del poder empresarial. El imperativo es claro: el control social de las energías renovables es ahora una base para la estabilidad climática, al mismo nivel que cualquier “patrimonio común” de la humanidad.

Bibliografía

ABC News (10 de junio de 2015). Alinta Energy to close power stations at Port Augusta and coal mine at Leigh Creek. <https://www.abc.net.au/news/2015-06-11/power-stations-port-augusta-alinta-energy/6537814>

AEC (2018). *Rating equity for commercial and/or industrial land uses outside towns in South Australia*. <https://nylga.sa.gov.au/wp-content/uploads/2018/11/Final-Report-Rating-Equity-for-Commercial-Industrial-Land-Uses-Outside-Towns-in-SA-1.pdf>

Baker, Russell (3 de noviembre de 2023). First Nations co-investment is a win-win for asset owners. *Investment Magazine*. <https://www.investmentmagazine.com.au/2023/11/first-nations-co-investment-is-a-win-win-for-asset-owners/>

Bhambhani, Anu (15 de septiembre de 2023). German State Launches Solar Expansion Offensive. *Taiyang News*. <https://taiyangnews.info/markets/german-state-launches-solar-expansion-offensive>

Energy & Mining (2022). Leading the green economy. *Government of South Australia*. <https://www.energymining.sa.gov.au/industry/hydrogen-and-renewable-energy/leading-the-green-economy>

McGreevy, Michael y Baum, Fran (12 de marzo de 2021). South Australia has become a renewable energy powerhouse. How did they do it? *Race to resilience*. <https://climatechampions.unfccc.int/south-australia-has-become-a-renewable-energy-powerhouse-how-did-they-do-it/>

National Native Title Council (21 de abril de 2023). There is no net zero economy without first nations policy change. https://nntc.com.au/media_releases/there-is-no-net-zero-economy-without-first-nations-policy-change/

PlanSA (2024). Crown development and essential infrastructure. https://plan.sa.gov.au/development_applications/state_development/crown-development

Spencer Gulf Cities (13 de septiembre de 2022). Regional Partnership Priorities Launch. <https://upperspencergulf.com.au/2022/09/regional-partnership-priorities-launch/>

State Planning Commission (2019). *Discussion paper on proposed changes to renewable energy policy in the planning and design code*. Adelaide: Government of South Australia.

Subramanian, Meera (26 de abril de 2023). India's quest to build the world's largest solar farms. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/news/dept-of-energy/indias-quest-to-build-the-worlds-largest-solar-farms>

Empresas petroleras administradas por el Estado y la transición energética

El caso de Ecopetrol en Colombia



Daniel Chávez y Lala Peñaranda

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: MERCEDES CAMPS

En la reunión del Foro Económico Mundial (FEM) de 2024, en Davos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró el compromiso de no aprobar nuevos contratos de exploración de combustibles fósiles. “Colombia [...] ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla”, dijo el presidente a una élite empresarial y política (Monsalve, 19 de enero de 2024). Un año antes, su mensaje durante su primera reunión del FEM fue aún más contundente:

Nos acercamos al punto de no retorno, y el punto de no retorno significa la extinción de la vida. O la humanidad se extingue con el capitalismo o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. ¿Por qué no cambiar la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción por el clima de modo de liberar los recursos presupuestarios para llevar a cabo la adaptación y mitigación? ¿Por qué no devaluar la deuda mundial, lo cual también significa un cambio en el sistema de poder? (Torrado, 18 de enero de 2023).

“Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión”, declaró Petro, resumiendo los retos que afrontan los países del sur global endeudados y dependientes de las exportaciones, en el contexto de una crisis climática que tendrá un impacto desproporcionado en los Estados productores de petróleo.

La transformación de la industria de combustibles fósiles de Colombia es uno de los principales aspectos de los planes ambiciosos de transición energética del Gobierno liderado por un exguerrillero y una feminista, antirracista y activista ambiental –el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, respectivamente–, pero los obstáculos que deben superar son muchos, diversos y complejos.

El ritmo y la magnitud de la transición energética han sido objeto de acalorados debates en el nuevo Gobierno colombiano y en el discurso público. Poco después de la asunción del Gobierno en agosto de 2022, otros funcionarios anunciaron la intención de transformar drásticamente y rápidamente el sector de los hidrocarburos. La entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, una académica con trayectoria en el movimiento ambiental, afirmó en el Foro Económico Mundial que Colombia se alejaría rápidamente de los combustibles fósiles:

Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático (Taylor, 20 de enero de 2023).

En marzo de 2023, el entonces director ejecutivo de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, advirtió que los cambios para lograr una transición energética debían ser medidos y graduales. Felipe Bayón dijo al *Financial Times*: “No hay ninguna sustitución que se pueda lograr simplemente al apretar un interruptor para apagar una cosa y encender otra” (Daniels, 21 de marzo de 2023). Añadió que “llevará mucho tiempo, esfuerzo y dinero asegurar que otras industrias ocupen su lugar”. En el mismo sentido, también había dicho en Davos que Ecopetrol tenía una estrategia gradual de veinte años: “El país necesitará la explotación de hidrocarburos que realiza la compañía. Ecopetrol puede ser el 10 % del presupuesto de Colombia. El país sigue necesitando los fondos a través de dividendos, regalías e impuestos” (Reynoso, 27 de enero de 2023).

El compromiso de detener los proyectos de petróleo y gas había sido parte de la campaña electoral de Petro y Márquez, pero no todos los miembros de su gabinete estaban de acuerdo. José Antonio Ocampo –el primer ministro de Hacienda del Gobierno progresista y reconocido economista y ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)– había

advertido que el Gobierno de Petro analizaría los 180 contratos existentes antes de decidir qué hacer a continuación. “Toda transición energética que reduzca las exportaciones tendría que ser gradual y priorizar la autosuficiencia del gas” (Daniels, 20 de noviembre de 2022), declaró Ocampo al *Financial Times*.

El presente capítulo se centra en Colombia como un caso de estudio pertinente para una agenda de investigación más amplia. Aborda el papel del Estado en la transición energética en relación con el sistema económico y financiero mundial, así como la importancia de las empresas nacionales de petróleo y gas en los debates actuales sobre soberanía energética en el contexto del cambio climático. La primera sección analiza la importancia actual de la producción de hidrocarburos y las perspectivas de las empresas de gestión estatal en América Latina y el mundo. El capítulo luego pasa a analizar los problemas y las tensiones en torno a las discusiones sobre la transformación de Ecopetrol y culmina en una síntesis de las discusiones de política y en materia de políticas que se están dando en Colombia y que podrían ser importantes para la investigación y las campañas futuras en otros países de América Latina y el mundo.

La pertinencia y la transformación de las empresas petroleras administradas por el Estado

En los meses anteriores a la COP sobre cambio climático de 2022, el semanario político y empresarial *The Economist* (25 de julio de 2022) publicó un artículo titulado: “State-run oil giants will make or break the energy transition”. Las empresas nacionales de petróleo y gas poseen en conjunto el 66 % del petróleo y el 58 % del gas del mundo (International Energy Agency [IEA], 2020) y proporcionan alrededor del 40 % del capital invertido en estos sectores (Manley y Heller, 2021). El título aludía al historial deficiente de descarbonización de las empresas estatales. No obstante, *The Economist* reconoció que Ecopetrol contrarrestó esta tendencia y que la empresa

colombiana “participa en proyectos de energía eólica y solar, y recientemente adquirió una empresa de transmisión de electricidad”.

La resiliencia y el enorme poder económico y político de la industria de petróleo y gas han sido el foco de muchas publicaciones periodísticas y académicas recientes. Un artículo de la revista *Nature* demuestra cómo el gasto en clima sigue siendo insuficiente, mientras que nueve de las mayores empresas petroleras obtuvieron ganancias por 457.000 millones de dólares en 2022 (Sanderson, 15 de mayo de 2023), el equivalente a una sexta parte de la inversión anual necesaria para cumplir los compromisos climáticos de los gobiernos. Tres de estas nueve empresas son de propiedad o control estatal (Aramco, de Arabia Saudita; Equinor, de Noruega, y PetroChina, de China) y seis son principalmente propiedad de accionistas privados (ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, TotalEnergies y ConocoPhillips).

Ecopetrol y otras empresas públicas operan en un contexto regional en el cual la producción de hidrocarburos atraviesa transformaciones rápidas y profundas. Según evaluaciones recientes, la extracción de petróleo y gas en América Latina y el Caribe ha experimentado cambios “tectónicos” y “probablemente irreversibles” en los últimos diez años (Cárdenas y Rivera Rivota, 21 de febrero de 2023). La producción cayó de 10,4 millones de barriles de petróleo al día (mb/d) en 2010 a 7,8 millones en 2022; el porcentaje de la región en el mercado mundial cayó de 12 % a 9 % en el mismo período, y los dos países tradicionalmente exportadores de hidrocarburos, México y Venezuela, muestran señales de declive en sus industrias petroleras (bp, 2022). Brasil se ha reposicionado como el octavo mayor productor de petróleo del mundo. Guyana, un país pequeño y poco poblado, actualmente desafía la supremacía de los productores tradicionales de la región y se ha convertido en una de las economías de crecimiento más rápido del mundo. Argentina, Colombia y Ecuador afrontan un estancamiento o disminución de su producción petrolera.

Como se mencionará en más detalle a continuación, la propiedad mayoritaria del Estado de las acciones de Ecopetrol es un factor

determinante en las perspectivas de transformación de la empresa colombiana. En la región resurgió el fantasma de la privatización de la industria del petróleo y la energía cuando el presidente recientemente electo de Argentina, Javier Milei, un libertario de ultraderecha, propuso la privatización de cuarenta y un empresas públicas, incluidas centrales de energía nuclear, la agencia de infraestructura energética e YPF, la empresa nacional de petróleo. En enero de 2024, ante una fuerte oposición social y política, Milei se vio obligado a dar marcha atrás en sus planes de privatización del petróleo y el gas (Kennedy, 22 de enero de 2024).

Independientemente de su estructura de propiedad, las empresas de petróleo y gas determinan en gran medida las emisiones mundiales y el acceso a la energía. Por su parte, las empresas privadas son menos responsables que las empresas nacionales de petróleo y gas, y resultan mucho más difíciles de transformar. Las empresas transnacionales privadas que están activas en el sector del petróleo y el gas han sido propulsadas por un sistema complejo de subsidios gubernamentales nacionales e internacionales que asegura la privatización de los beneficios de la producción de gas y petróleo, mientras socializa sus costos económicos, ambientales y sociales. Como han sostenido dos activistas y académicos:

La propiedad pública en sí misma no garantiza que reemplazaremos por completo el gas y el petróleo con energía renovable a tiempo para impedir los peores impactos de la crisis climática [...], pero no promovemos la propiedad pública porque se trate de una solución mágica, sino que la promovemos porque es nuestra única oportunidad. Las matemáticas de las ganancias son tan claras como las del clima: las empresas existen para generar lucro y enriquecer a sus accionistas, y para ello deben crear su producto. El activismo de los accionistas solo puede enlentecer o atenuar el ritmo en el cual las empresas persiguen este mandato básico. “Las soluciones basadas en el mercado” en este caso son una contradicción: el mercado es el problema (Bozuwa y Tái-wò, 7 de junio de 2021).

Los mismos analistas afirman que la propiedad pública posibilitaría “desmantelar una industria recalcitrante a tiempo para impedir el desastre climático” y ofrecería “una oportunidad para construir algo mejor en su lugar”. Desde un punto de vista similar y en oposición a la afirmación de que las empresas nacionales de gas y petróleo naturalmente impiden la transición energética justa, un creciente número de sindicatos, organizaciones ambientalistas y centros de investigación señalan que la causa profunda de la tendencia mundial de expansión energética es la consecución de crecimiento infinito y acumulación capitalista, y no la transición (Sweeney, Chavez y Treat, 2022). En cambio, el enfoque público alternativo identifica a empresas estatales o controladas por el Estado como actores estratégicos en limitar el cambio climático y evitar sus peores impactos (Trade Unions for Energy Democracy [TUED], 2023).

La reinención de Ecopetrol como empresa de energía

En los años veinte, la empresa estadounidense Tropical Oil Company (Troco) obtuvo el derecho de explotar petróleo en Colombia tras asumir el control de la mal reputada Concesión de Mares. La empresa privada dominaba la exploración, producción, refinación, transporte, distribución nacional y exportación de petróleo en el país durante la primera mitad del siglo xx. Tras decenios de debates políticos y luchas sindicalistas para exigir la nacionalización del sector de los hidrocarburos, la reversión de la Concesión de Mares al Estado colombiano dio lugar a la fundación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol (*Ecopetrol*, 30 de abril de 2020).

En 1961, Ecopetrol adquirió la refinería de Barrancabermeja y, trece años más tarde, compró la refinería Cartagena (actualmente la primera y segunda refinerías del país, respectivamente). En 1970, Ecopetrol adoptó su primer estatuto orgánico, que ratificó su carácter de empresa completamente estatal vinculada al Ministerio de

Minas y Energía. A partir de septiembre de 1983 Ecopetrol aumentó la escala de su producción de petróleo tras el descubrimiento de Caño Limón, un yacimiento con reservas estimadas en 1100 millones de barriles.

En 1986, Colombia se convirtió nuevamente en exportadora de petróleo y amplió su autosuficiencia en los años noventa, tras el descubrimiento de los yacimientos Cusiana y Cupiagua.

La producción de petróleo en Colombia alcanzó su punto máximo en 2014, con 1040 kb/d¹ y durante los últimos diez años ha descendido a pesar de nuevos y prometedores descubrimientos cerca de la costa (Cárdenas y Rivera Rivota, 21 de febrero de 2023), que llevará mucho tiempo desarrollar. A pesar de la disminución de la producción, el petróleo, el gas y la minería representan más de la mitad de las exportaciones del país. Ecopetrol es la cuarta empresa petrolera más grande de América Latina y la principal exportadora de Colombia. Representa alrededor del 30 % de las exportaciones del país y brinda una fuente vital de ganancias de divisas extranjeras a una economía afectada por constantes déficits fiscales y por cuenta corriente. Los planes de inversión de la empresa en 2024 oscilan entre los 5700 millones y los 6700 millones de dólares, aumentando la producción a 730 kb/d y operando 360 pozos de desarrollo y quince pozos exploratorios.

La importancia de Ecopetrol en la economía colombiana

La verdadera importancia de Ecopetrol y el perfil general de Colombia como país dependiente del extractivismo queda en evidencia a partir de sus datos de exportación. Más de la mitad de las ventas extranjeras del país están en manos de dieciséis empresas, la mayoría de las cuales operan en los sectores de hidrocarburos y minería (Sánchez, 24 de junio de 2023). Las diez principales empresas están encabezadas por Ecopetrol, seguidas de las empresas mineras

¹ kb/d se utiliza como abreviatura de miles de barriles por día.

Drummond y Carbones del Cerrejón (ambas productoras de carbón). Seis de las siete restantes operan en las industrias extractivas: Cerrejón Zona Norte (carbón), Trafigura Petroleum (petróleo), Frontera Energy (petróleo), Reficar (petroquímicos), Cerro Matoso (níquel) y Terpel (petroquímicos). A pesar de la reputación de Colombia como un país productor de café, la Federación Nacional de Cafeteros ocupa el octavo lugar.

Ecopetrol representa alrededor del 65 % del petróleo del país y el 80 % de su producción de gas; el 60 % de los barriles de petróleo extraídos son producidos por la empresa estatal, y las refinerías de Reficar y Barrancabermeja son abastecidas por la empresa nacional de gas y petróleo. Habida cuenta de su importancia en la economía nacional –alrededor de cien mil puestos de trabajo dependen de Ecopetrol– y de que la empresa representa más del 6 % del PIB, el principal sindicato de trabajadores petroleros ha expresado preocupación sobre las perspectivas a largo plazo de la industria si se registra una disminución de la producción de gas y petróleo:

Resulta imperativo mantener la producción de petróleo y gas para garantizar el suministro a refinerías para producir diésel y gasolina para el mercado nacional. Reducir considerablemente las inversiones en la producción y exploración pondría en peligro la continuidad de Ecopetrol, aumentaría el riesgo de escasez y socavaría la seguridad energética nacional. El país cuenta actualmente con reservas de petróleo por 7,1 años y reservas de gas por 7,5 años. Por lo tanto, cualquier disminución de las inversiones para sostener la producción acortaría este lapso de tiempo (Unión Sindical Obrera [USO], 23 de octubre de 2023).

¿Una transición fuera del petróleo?

Las aparentes contradicciones en el discurso de los funcionarios gubernamentales de Colombia, los directivos de Ecopetrol y los sindicalistas con respecto a la velocidad y la ambición de la

descarbonización reflejan la complejidad de la transición propuesta. Los sindicatos colombianos tienen una larga tradición de debate interno y la coalición actual del Gobierno abarca diversos partidos políticos, por lo que necesitan tiempo para llegar a una posición relativamente coherente. No obstante, las fuerzas progresistas colombianas parecen estar de acuerdo en el modo de alejarse de los combustibles fósiles, que puede resumirse con los siguientes puntos. 1) se mantendrán los contratos de exploración vigentes; 2) continuará la explotación de los yacimientos comprobados; 3) no se otorgarán nuevos contratos de exploración; 4) Ecopetrol diversificará su cartera para incluir tecnologías de bajas emisiones y fuentes de energía renovable. Y más recientemente, 5) Colombia podría necesitar importar de Venezuela, un país vecino, para asegurar su suficiencia energética durante la transición.

Los planes del Gobierno de transformar Ecopetrol en una empresa que abandone la extracción de hidrocarburos han suscitado la preocupación de los trabajadores petroleros. La Unión Sindical Obrera (USO) tiene una cultura interna rica y dinámica de debate político en sus diversas corrientes ideológicas y varía de posiciones y enfoques con respecto a la transición energética justa. Los afiliados a la USO votaron abrumadoramente a Petro y Francia, y se organizaron para garantizar su victoria. A pesar de ello, los sindicalistas han expresado preocupación sobre el ritmo de la transición propuesta y la cancelación de nuevos contratos de exploración, al afirmar que Ecopetrol podría correr el riesgo de desinversión y el país podría quedar expuesto a la dependencia energética. En una declaración de octubre de 2023, el sindicato comentó sobre los recortes propuestos por Ecopetrol:

Las recientes decisiones de las Vicepresidencias Ejecutivas [...] de Ecopetrol, de recortar el presupuesto de inversión [...] ponen en riesgo la continuidad del negocio principal. [...] Esta decisión además tiene una fuerte incidencia en las finanzas públicas porque Ecopetrol aporta en promedio \$20 billones anuales para el financiamiento del

Estado entre dividendos, impuestos y regalías que paga a la nación. [...] Así las cosas, en el año 2026 estaremos produciendo 472 mil barriles diarios que solamente permitirá mantener las cargas de las dos refinерías y no tendremos ingresos por exportaciones. La reducción de las inversiones de Ecopetrol traerá como consecuencia la contracción del sector petrolero en general dado que otras compañías del sector tienen como insumo principal para sus presupuestos el valor de las inversiones que ejecuta Ecopetrol. Si esta declina, cae la inversión en el sector causando un efecto dominó (USO, 23 de octubre de 2023).

En respuesta a las preocupaciones del sindicato y las críticas de los círculos políticos y empresariales, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha reiterado que el futuro de la empresa no se verá afectado por los planes de transición energética anunciados por el Gobierno. “Nunca hemos dicho que vamos a terminar el negocio tradicional” (Griffin, 24 de octubre de 2023), afirmó Roa en un reciente foro de negocios. “La industria del petróleo y gas en Colombia no desaparecerá”, añadió, y explicó que invertir fondos derivados de la extracción de combustibles fósiles sería clave para financiar la transición hacia la energía renovable. El actual ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dio una respuesta similar en una entrevista a un periódico español, en la que se le preguntó si el ministerio aprobaría más contratos para la exploración de petróleo y carbón:

Tenemos una política de desarrollar la exploración energética en clave de transición energética. No es que no vayamos a hacer más, sino que estamos dando pasos a nuevos contratos de explotación de geotermia, hidrógeno blanco y otro tipo de energéticos. Vamos a ir desarrollando nuevos contratos en clave de transición. Desde el primer día que llegué lo mencioné: la transición es con los hidrocarburos. [...] Vamos a tener un tiempo en el que vamos a necesitarlos, incluso en los horizontes 2040, 2050. Si no hay sustitutos para la industria petroquímica vamos a seguir requiriendo hidrocarburos. La idea es que la dependencia vaya disminuyendo (Quesada, 26 de septiembre de 2023).

El reto de diversificar Ecopetrol

Dos años antes de que Petro y Francia asumieran el gobierno, Ecopetrol ya había publicitado un plan de descarbonización para alcanzar emisiones de gases de efecto invernadero cero neto para 2050, que incluía medidas concretas para abandonar el uso de petróleo y gas. El tiempo se acaba: Colombia solo tiene suministros de hidrocarburos por 7,5 años más. Si Ecopetrol u otras empresas que operan en el país no desarrollan un nuevo yacimiento antes de ese periodo, el país tendrá que importar petróleo para satisfacer sus necesidades. Según las proyecciones de oferta y demanda de energía para 2050, Colombia seguirá necesitando gas, gasolina y diésel, por lo que si Ecopetrol no puede satisfacer las demandas del mercado interno, deberá importar de los países del golfo Pérsico o de otras partes del mundo donde se sigan extrayendo combustibles fósiles.

Más del 40 % de los gastos que Ecopetrol tiene planificados para 2024 están relacionados con la transición energética (*Reuters*, 1 de diciembre de 2023). Los planes de negocios de la empresa destacan el objetivo de diversificar las actividades para ampliar el sector de la energía (*Ecopetrol*, 2022), al expandirse a ámbitos diferentes de los hidrocarburos. Los gastos de capital previstos (CAPEX), que son un buen indicador del verdadero compromiso con la diversificación, incluyen inversiones concretas en ISA, una empresa colombiana activa en la transmisión de electricidad, carreteras y telecomunicaciones en América Latina, que Ecopetrol adquirió en agosto de 2021, y por la cual pagó 3580 millones de dólares por el 51,4 % de las acciones (*Reuters*, 11 de agosto de 2021). Según analistas financieros:

La decisión de comprar acciones de ISA se dio en un momento en que los planes estratégicos oficiales de Ecopetrol no incluían los CAPEX de diversificar la producción energética, más allá de la producción de petróleo y el gas. La compra fue una respuesta a las oportunidades de mercado específicas fuera del petróleo y del gas, donde se evalúan las nuevas oportunidades de negocios caso a caso. Al adoptar esta medida, Ecopetrol demostró su fuerte liderazgo como empresa nacional

de petróleo y gas de América Latina en cuanto a las estrategias para diversificar sus actividades principales (Strambo y Arond, 23 de noviembre de 2023).

El papel más amplio de Ecopetrol en el sector de la energía sería crucial, dado que aunque se lleven a cabo planes más ambiciosos para la descarbonización de la generación de energía, el país probablemente seguirá dependiendo de los combustibles fósiles durante decenios para satisfacer la demanda de electricidad. Un académico de la Universidad Javeriana sostiene que:

Para que Colombia logre electrificar, cumpliendo las metas de una transición energética justa, debe llevar una capacidad instalada de 120 gigavatios. El país está llegando en este momento a 20 gigavatios de capacidad instalada. Por eso la estrategia de reducir de manera relevante la participación de los fósiles en la matriz no se puede hacer de un momento a otro. Los fósiles deben apalancar esa transición (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Un estudio reciente sobre los retos de la transición en Colombia concluye que la demanda total de electricidad en 2021 fue de 67 TWh (teravatios hora) (Thema y Roa García, 2023). Si todos los combustibles fósiles fueran reemplazados por electricidad de aquí a 2036, el consumo de electricidad aumentaría otros 160 TWh. En un escenario en el que el sector del transporte se abastece exclusivamente de biocombustibles, la demanda de electricidad sería 73 TWh inferior, pero la producción de biocombustible a esa escala no es para nada realista y puede tener costos sociales y ambientales negativos.

El Gobierno colombiano ha publicitado la “Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa” (*Ministerio de Minas y Energía, 2023*). Este documento sistematiza un proceso nacional de consulta ciudadana en el cual se acordó que la transformación del sistema energético de Colombia debería basarse en cuatro principios: equidad; gradualidad, soberanía y confiabilidad; participación social vinculante,

y una transición intensiva en conocimientos. En febrero de 2022, Ecopetrol presentó su visión estratégica para 2040 y sus objetivos operativos y financieros para 2022-2024. El plan de largo plazo, “Estrategia 2040: Energía que transforma”, está destinado a responder de manera amplia a los retos actuales ambientales, sociales y de gobernanza (Ecopetrol, 2022). Un año y medio más tarde, la empresa actualizó ese plan y proclamó su objetivo de convertirse en “líder en América de la diversificación de energía”, invirtiendo en “hidrocarburos, soluciones de bajas emisiones y transmisión, carreteras y telecomunicaciones”. Además, reiteró su voluntad de contribuir a una transición energética justa y su “compromiso con la seguridad energética, el medio ambiente y la contribución a la sociedad”.

En noviembre de 2022, Ecopetrol confirmó la suspensión de sus proyectos de fracturación hidráulica y la cancelación de los acuerdos con Exxon Mobil. Tras años de intensos debates internos, los miembros de la USO llegaron a un acuerdo en una votación de la Asamblea Nacional de Delegados celebrada en 2019 (con setenta y siete votos a favor, cinco en contra y veintidós abstenciones) para rechazar el uso de la fracturación hidráulica y exigir que el Gobierno acelerara la transición de Ecopetrol para convertirse en una empresa de energía centrada en las energías renovables. La suspensión de la fracturación hidráulica ha sido una promesa de campaña de la coalición de izquierda Pacto Histórico y una demanda principal de los activistas sociales y ambientales durante el paro nacional: una serie de protestas que sacudieron a Colombia en la primera mitad de 2021 y que incluyeron manifestaciones callejeras multitudinarias contra la violencia policial, la corrupción y los recortes a los servicios de salud y otros servicios públicos propuestos por el entonces presidente de derecha Iván Duque.

En el contexto de su Estrategia 2040, la empresa tiene un plan ambicioso de producir hidrógeno “verde”, amoníaco “verde” y metanol, que se prevé generará ganancias de entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares de aquí a 2040. En septiembre de 2023, el presidente de Ecopetrol anunció que de aquí a 2030 incorporarían

alrededor de 1900 megavatios de fuentes de energía renovable no convencional y para 2050 de 3 a 5 nuevos gigavatios de energía renovable. Esa es la meta y aspiración de Ecopetrol en la transición energética (Campos y Acosta, 12 de septiembre de 2023).

No obstante, para que Ecopetrol pueda ampliarse al sector de la electricidad, deberá cambiar de marco jurídico. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2025 aprobado a comienzos del actual Gobierno establece las bases para que Ecopetrol se convierta en una empresa de energía integral, mediante la derogación de artículos clave de legislación anterior a través de los cuales se obligaba a la desagregación de la empresa y se evitaba el funcionamiento de empresas de energía de integración vertical.

Los retos de la democratización

La referencia a Ecopetrol como empresa *administrada por el Estado*, pero que *no es propiedad del Estado*, en el título del presente capítulo, no es fortuita. Durante cuarenta años, diversos Gobiernos han intentado privatizar y debilitar a Ecopetrol y a otras empresas públicas, en detrimento del desarrollo económico y social y la soberanía nacional. Las políticas de saqueo se volvieron más intensas en los años noventa, con varias olas de liberalización económica que agravaron las desigualdades sociales y la continuación del conflicto armado, pero las luchas de los trabajadores impidieron la privatización de Ecopetrol (Escobar, 3 de agosto de 2020).

Desde mediados de los años sesenta, Colombia ha atravesado una denominada “guerra asimétrica de baja intensidad”, en la cual las fuerzas armadas del país, las guerrillas de izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha y el crimen organizado estuvieron directamente involucrados, y el Gobierno de Estados Unidos y grandes empresas colombianas y transnacionales participaron en forma más o menos encubierta. En ese contexto, el distanciamiento de las políticas de Ecopetrol de las necesidades sociales de las clases trabajadoras provocó la militarización de la empresa y su control se

disputó entre diferentes sectores de la clase dominante colombiana. Los vínculos entre la empresa y las actividades paramilitares de extrema derecha, incluido el asesinato de sindicalistas y activistas locales, han sido denunciados en diversas partes de Colombia (Becerra Ostos, 2009), en particular en la municipalidad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, donde se encuentra el mayor centro de refinación y producción de petroquímicos del país (Bonilla Mora, 24 de noviembre de 2023).

Los conflictos internos por el control de Ecopetrol provocaron una serie de cambios en la propiedad y gestión de la empresa en los últimos treinta años. Antes de 2000, Ecopetrol era una empresa industrial y comercial del Estado. En junio de 2003, el Gobierno de derecha de Álvaro Uribe decidió convertirla en una empresa que cotiza en la bolsa: hasta 2007, cuando se convirtió en una empresa de economía mixta y pasó a llamarse Grupo Empresarial Ecopetrol. La modificación de la estructura de propiedad y gestión de la empresa también significó un cambio regulatorio: Ecopetrol dejó de ejercer sus funciones como organismo del Estado que administraba el sector petrolero, una función que fue transferida a la nueva Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, estos cambios implicaron que Ecopetrol pasó de ser una empresa pública de propiedad y administración exclusivamente estatales a ser una empresa privada controlada por el Estado. En enero de 2023, un economista colombiano caracterizó la privatización de Ecopetrol de la siguiente manera:

Ecopetrol y las entidades de Bogotá están privatizadas en los hechos, sin que se hayan vendido las acciones que allí poseen el Gobierno nacional y el distrito capital. Es la mejor forma de privatizar; [...] como presidentes de las juntas directivas se nombran a privados. [...] los privados manejan empresas estatales sin aportar un solo peso, y las administran según sus criterios personales y los intereses que representan [...] siguiendo las normas de OCDE, [...] lo que llaman la gobernanza corporativa significa para esta institución superneoliberal que el Estado no la maneje sino privados (Otero, 31 de enero de 2023).

Durante algunos años se ha suscitado una discusión recurrente sobre la reforma de los estatutos de la empresa. El Estado colombiano controla el 88 % de las acciones y, por lo tanto, tiene la facultad de presentar una lista de candidatos para los nueve miembros de su junta directiva a través del Ministerio de Hacienda. Habida cuenta de que Ecopetrol está registrada en la bolsa de valores de Nueva York, tales nombramientos deben cumplir los criterios estrictos establecidos por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Poco después de haber asumido, el Gobierno de Petro contempló una opción, criticada en círculos empresariales y políticos, que consistía en añadir un puesto para un representante sindical en la junta directiva de Ecopetrol. Contar con un representante del sindicato en la junta directiva de Ecopetrol ha sido una demanda de la USO durante mucho tiempo. El presidente del sindicato, César Loza, dijo al periódico *El País* de Madrid a finales de 2023:

Ya hay una asamblea extraordinaria convocada por el accionista mayoritario para hacer unas modificaciones a la junta para que haya una mayor participación de mujeres y, probablemente, para que se dé la llegada del compañero Edwin Palma, viceministro de Trabajo [y sindicalista y ex presidente de la USO] (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Si bien la inclusión de Palma sería bienvenida, los afiliados de la USO que entrevistamos subrayaron que Palma es un funcionario del Gobierno actual, por lo que esta medida no cumpliría su reclamo de incluir a un miembro activo del sindicato en la junta directiva de Ecopetrol.

Conclusión

La transición energética de Colombia tiene varias características singulares. El presidente del país es un exguerrillero y ambientalista que fundamenta sus posiciones en la ciencia del cambio climático y señala las limitaciones del capitalismo para cumplir las metas

climáticas. La empresa nacional de petróleo ha comenzado a llevar a cabo una transformación drástica de sus operaciones y misión, con un pie en la bolsa de valores de Nueva York y otro firmemente anclado en el camino hacia una transición justa. Los sindicatos y las organizaciones ambientalistas están deseando tener un mayor poder de decisión en la transición. Sus propuestas y reclamos coinciden en algunos aspectos y divergen en otros.

Al igual que la mayoría de las empresas nacionales de petróleo y gas, Ecopetrol afronta enormes desafíos, habida cuenta de su papel central en brindar recursos vitales que el Gobierno necesita para financiar los servicios públicos y una transición justa, lograr seguridad energética y mantener o generar cientos de miles de empleos. El compromiso para transformar y diversificar operaciones para que Ecopetrol pueda convertirse en una empresa de energía integrada no tiene precedentes en el mundo. No obstante, el adjetivo “justa” que antecede a la caracterización de la transición anunciada en la Estrategia 2024 de la empresa no refleja de manera cabal su alcance y contenido. El compromiso se refleja principalmente en los planes anunciados de ampliar el acceso a servicios de energía como prioridad de la empresa subsidiaria ISA. Los documentos oficiales no especifican exactamente cómo se integrará la transformación de Ecopetrol en el marco de la “Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa” del Ministerio de Minas y Energía, especialmente en cuanto a la distribución de los costos y beneficios de la transición energética y los efectos en los trabajadores y las comunidades locales.

Fuera de Colombia, el camino que Ecopetrol debería emprender parece evidente y fácil de seguir: acelerar su transición para abandonar los combustibles fósiles, diversificar las fuentes de energía y beneficiarse “de mayor resiliencia y menor vulnerabilidad a las presiones externas e internas, como la volatilidad del precio del petróleo y el gas, las interrupciones en el suministro, los desastres ambientales y la presión de los inversores” (Strambo y Arond, 23 de noviembre de 2023). No obstante, nuestras entrevistas con representantes

de órganos gubernamentales, sindicatos, organizaciones ambientalistas y centros de investigación en Colombia demuestran que el camino es mucho más pedregoso, estrecho y empinado de lo que parece, por varios motivos.

Las empresas nacionales de gas y petróleo son fundamentales en la transición energética debido a que son algunas de las mayores productoras de petróleo del mundo y en ocasiones las empresas más grandes a nivel nacional. Investigadores, sindicalistas y organizaciones ambientalistas deben profundizar y ampliar sus intercambios sobre el papel del Estado y el significado y las perspectivas futuras de la vía pública en el sector energético.

A Colombia le quedan muy pocos años de suficiencia energética y depende de los combustibles fósiles para sus exportaciones y presupuesto público. Este es uno de los principales retos a las ambiciones de descarbonización del país. La capacidad actual de electrificación dista mucho de satisfacer las necesidades futuras. La transición energética requiere voluntad política además de recursos financieros. Colombia ha demostrado tener la capacidad de generar energía solar, eólica, marina y geotérmica (Vega Araújo y Muñoz Cabré, 2023), pero sin recursos la transición energética no es viable. Los aproximadamente 8000 millones de dólares que Ecopetrol contribuye cada año a las arcas del Estado no pueden pasarse por alto (Corficolombiana, 2023).

A pesar de las tensiones y el discurso oficial contradictorio sobre la dirección actual de la transición energética, se han logrado avances importantes, como el compromiso de detener nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, el comienzo de la diversificación de la cartera de Ecopetrol, la decisión de poner fin a la fracturación hidráulica y los crecientes debates sobre la democratización de la junta directiva de Ecopetrol.

Una mayor democratización implicará lidiar con el legado del conflicto armado de Colombia y los antiguos vínculos entre la extrema derecha y Ecopetrol y la represión autoritaria, dirigida en forma desproporcionada contra trabajadores petroleros.

La experiencia colombiana demuestra de qué modo puede llevarse a cabo una transición energética justa a nivel nacional si existe articulación entre los planes nacionales y las estrategias mundiales. Para los países del sur global, la descarbonización del sistema energético es un desafío enorme. En América Latina es posible transformar la matriz energética si existe voluntad política fundada en empresas de energía de propiedad estatal que impulsen la transición, como es el caso de Uruguay, que ha emprendido una rápida y considerable transición hacia la generación de energía renovable en los últimos diez años (Meadows, 27 de diciembre de 2023). También sería posible concebir planes para exportar otro tipo de combustibles –por ejemplo, hidrógeno verde, como propone Ecopetrol (Roa Barragán, 16 de enero de 2024)–, pero solamente si las potenciales fuentes de energía renovable y su demanda son de magnitud considerable. En todo caso, la reestructuración de la industria petrolera es muy compleja y depende de que se lleve a cabo una transformación considerable de las estructuras y relaciones financieras y del comercio internacional. El presidente de Colombia propuso en Davos canjear deuda externa por el compromiso de dejar el petróleo en el suelo. En ese sentido, cabe recordar que una propuesta similar realizada por el país vecino, Ecuador, durante el Gobierno de Rafael Correa no suscitó la reacción esperada de la “comunidad internacional” y se utilizó para justificar una expansión polémica de la exploración petrolera (Laastad, 2023).

Los hidrocarburos han determinado durante mucho tiempo las estructuras económica, política y social de Colombia y han generado crecimiento económico en el último decenio, representando alrededor de la mitad de sus ganancias de exportación. En este contexto, Gustavo Petro ha reposicionado la justicia climática en el centro de su agenda política, junto con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Más allá del resultado del debate actual sobre el futuro de los combustibles fósiles en Colombia, este tendrá un efecto profundo en la razón de ser de Ecopetrol y en la identidad del país.

Es imposible concebir una transformación de la extracción de petróleo o la diversificación de Ecopetrol y de otras empresas nacionales de petróleo y gas del mundo sin que los trabajadores asuman un papel importante en la transición, basado en las experiencias y los conocimientos desarrollados durante más de un siglo. En este contexto, los trabajadores de la USO han declarado explícitamente su aspiración de que Ecopetrol lidere la transición para abandonar los combustibles fósiles (*Semana*, 29 de mayo de 2023). Han reafirmado su interés en recapacitarse y utilizar las competencias que han adquirido en las plataformas petroleras para construir y operar centrales de energía renovable. Pero también advierten que los planes del Gobierno deben evitar una crisis de suministro y asegurar el flujo de ingresos que el país no puede rechazar de la noche a la mañana, especialmente cuando ya está claro que las reservas de gas y petróleo se agotarán en menos de diez años.

El Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está intentado demostrar al mundo que es posible gestionar el declive y la reestructuración de las empresas petroleras para el beneficio social. Colombia ha propuesto un “Plan Marshall” mundial para combatir el cambio climático (*Reuters*, 22 de junio de 2023) y ha señalado que gravar las transacciones financieras podría ser una forma de obtener algunos de los recursos que se necesitan urgentemente. Los canjes de deuda por la acción climática, como propuso Petro en Davos –y como había sugerido anteriormente el Pacto Social Del Sur (Pacto Ecosocial del Sur, 16 de junio de 2020) y se había discutido en las dos últimas COP sobre cambio climático después de que la primera ministra de Barbados presentara la Iniciativa Bridgetown para reestructurar la arquitectura financiera mundial (Feminist Action Nexus, 2023)– podrían ayudar a los países dependientes del petróleo a desarrollar fuentes de energía menos destructivas y seguir financiando políticas y programas sociales. En este contexto, hay una necesidad urgente de ampliar y profundizar la discusión sobre cómo reivindicar y transformar a Ecopetrol y a otras empresas nacionales de petróleo y gas en diferentes regiones del mundo.

Bibliografía

Becerra Ostos, Silvia J. (2009). Paramilitarismo y neoliberalismo en Barrancabermeja: el caso de la privatización de Ecopetrol 1980-2000. *Ciencia Política*, 4(7), 125-149.

Bonilla Mora, Alejandra (24 de noviembre de 2023). Ecopetrol y los paramilitares: exfuncionario salpica a directivos de Barrancabermeja. *Cambio*. <https://cambiocolombia.com/poder/exclusivo-ecopetrol-y-los-paramilitares-exfuncionario-salpica-directivos-de-barrancabermeja>

Bozuwa, Johanna y Táíwò, Olúfẹ́' mi O (7 de junio de 2021). It's time to nationalize Shell. Private oil companies are no longer fit for purpose. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/07/its-time-to-nationalize-shell-private-oil-companies-are-no-longer-fit-for-purpose>

bp (2022). *bp Statistical Review of World Energy 2022*. Londres. <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf>

Campos, Rodrigo y Acosta, Luis J. (2023). Ecopetrol aims to be energy self-sufficient through renewables. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/ecopetrol-aims-be-energy-self-sufficient-through-renewables-ceo-2023-09-12/>

Cárdenas, Mauricio y Rivera Rivota, Diego (21 de febrero de 2023). Latin America's Enduring New Oil Landscape. *Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA (CGEP)*. <https://www.energypolicy.columbia.edu/latin-americas-enduring-new-oil-landscape/>

Corficolombiana (2023). *Expected transfers from Ecopetrol to the Nation in 2024*. Bogotá. <https://investigaciones.corficolombiana.com/documents/38211/0/Equity%20Research%20Special%20>

Report%2026122023%20def.pdf/90d2b3b1-31a8-47af-2d50-7ba47f6e1ec8

Daniels, Joe (20 de noviembre de 2022). Colombia signals rethink on pledge to curb oil and gas exploration. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/80119e85-8e80-48cd-9740-1594d0bd8d87>

Daniels, Joe (21 de marzo de 2023). Colombia's energy transition should be gradual, warns Ecopetrol chief. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/2e1f2da9-ea5e-4a69-b063-ecab877afe87>

Ecopetrol (30 de abril de 2020). Our history. <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/en/Ourcompany/about-us/Our%20History>

Ecopetrol (2022). Strategy 2040: Energy that Transforms. <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/strategy2040>

Escobar, Alexander (3 de agosto de 2020). Entrevista con Fabio Díaz, trabajador de Ecopetrol: La lucha contra la privatización de Ecopetrol. *Rebelión*. <https://rebellion.org/la-lucha-contra-la-privatizacion-de-ecopetrol/>

Feminist Action Nexus (2023). *Unpacking the Bridgetown Initiative: A Systemic Feminist Analysis & Critique*. https://wedo.org/wp-content/uploads/2023/06/ActionNexus_BridgetownBrief_EN_June2023.pdf

Griffin, Oliver (24 de octubre de 2023). Ecopetrol CEO says oil industry's future not threatened by energy transition. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/ecopetrol-ceo-says-oil-industrys-future-not-threatened-by-energy-transition-2023-10-24/>

International Energy Agency [IEA] (2020). *The Oil and Gas Industry in Energy Transitions: Insights from IEA analysis*. París. https://iea.blob.core.windows.net/assets/4315f4ed-5cb2-4264-b0ee-2054fd34c118/The_Oil_and_Gas_Industry_in_Energy_Transitions.pdf

Kennedy, Charles (22 de enero de 2024). Milei Forced to Backtrack on Argentina State Oil Co. Privatization. *OilPrice.com*. <https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Milei-Forced-To-Backtrack-on-Argentina-State-Oil-Co-Privatization.html>

Laastad, Sinneva (2023). Leaving oil in the ground: Ecuador's Yasuní-ITT initiative and spatial strategies for supply-side climate solutions. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 56(1), 172-189. <https://doi.org/10.1177/0308518X231184876>

Manley, David y Heller, Patrick R. P. (2021). *Risky Bet National Oil Companies in the Energy Transition*. Nueva York: National Resource Governance Institute (NRGI).

Meadows, Sam (27 de diciembre de 2023). Uruguay's green power revolution: rapid shift to wind shows the world how it's done. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2023/dec/27/uruguays-green-power-revolution-rapid-shift-to-wind-shows-the-world-how-its-done>

Ministerio de Minas y Energía (2024). La Transición Energética Justa (TEJ) es una oportunidad para Colombia. <https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/documentos-de-la-hoja-de-ruta-de-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-justa/>

Monsalve, María Mónica (19 de enero de 2024). Salir o no salir del gas: esa es la cuestión para Colombia. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2024-01-19/salir-o-no-salir-del-gas-esa-es-la-cuestion-para-colombia.html>

Otero, Diego (31 de enero de 2023). La privatización de Ecopetrol y otras entidades. *Más Colombia*. <https://mascolombia.com/la-privatizacion-de-ecopetrol-y-otras-entidades/>

Pacto Ecosocial del Sur (16 de junio de 2020). For a Social, Ecological, Economic and Intercultural Pact for Latin America. *openDe-*

mocracy. <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/social-ecological-economic-intercultural-pact-latin-america/>

Quesada, Juan Diego (26 de septiembre de 2023). Omar Andrés Camacho: Soy un ministro punk. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2023-09-26/omar-andres-camacho-soy-un-ministro-punk.html>

Reuters (11 de agosto de 2021). Colombia's Ecopetrol to buy government stake in ISA for \$3.58 billion. <https://www.reuters.com/article/idUSKBN2FD023/>

Reuters (22 de junio de 2023). Colombian president calls for global 'Marshall Plan' to fight climate change. <https://www.reuters.com/article/idUSL8N38E2SN/>

Reuters (1 de diciembre de 2023). Colombia's Ecopetrol to invest up to \$6.7 billion in 2024. <https://www.reuters.com/markets/commodities/colombias-ecopetrol-invest-up-67-bln-2024-2023-12-01/>

Reynoso, Lucas (27 de enero de 2023). Ecopetrol anuncia la salida de Felipe Bayón. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2023-01-27/ecopetrol-anuncia-la-salida-de-felipe-bayon.html>

Roa Barragán, Ricardo (16 de enero de 2024). White hydrogen can be a game-changer in Colombia's green transition. Here's why. *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/white-hydrogen-and-its-role-within-the-energy-transition/>

Sánchez, Camilo (24 de junio de 2023). Más de la mitad de las exportaciones de Colombia está en manos de 16 empresas. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2023-06-24/mas-de-la-mitad-de-las-exportaciones-de-colombia-esta-en-manos-de-16-empresas.html>

Sánchez, Camilo (3 de diciembre de 2023). Los titubeos de Petro sobre el futuro de los hidrocarburos llegan hasta Dubái. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2023-12-03/los-titubeos-de-petro-sobre-el-futuro-de-los-hidrocarburos-llegan-hasta-dubai.html>

Sanderson, Katharine (15 de mayo de 2023). How oil companies' soaring profits compare with green-energy investments. *Nature*. <https://www.nature.com/articles/d41586-023-01599-5>

Semana (29 de mayo de 2023). Las advertencias de la Unión Sindical Obrera frente a la transición energética y su dependencia de la exploración petrolera. <https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/las-advertencias-de-la-union-sindical-obrera-frente-a-la-transicion-energetica-y-su-dependencia-de-la-exploracion-petrolera/202325/>

Strambo, Claudia y Arond, Elisa (23 de noviembre de 2023). A “transition” from fossil fuels to fossil fuels? *SEI Perspectives*. <https://www.sei.org/perspectives/transition-fossil-fuels-ecopetrol-diversify/>

Sweeney, Sean; Chavez, Daniel y Treat, John (2022). *Energy transition or energy expansion?* Amsterdam: Transnational Institute (TNI) and Trade Unions for Energy Democracy (TUED). <https://www.tni.org/en/publication/energy-transition-or-energy-expansion>

Taylor, Luke (20 de enero de 2023). Colombia announces halt on fossil fuel exploration for a greener economy. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2023/jan/20/colombia-stop-new-oil-gas-exploration-davos>

The Economist (25 de julio de 2022). State-run oil giants will make or break the energy transition. <https://www.economist.com/business/2022/07/25/state-run-oil-giants-will-make-or-break-the-energy-transition>

Thema, Johannes y Roa García, María Cecilia (2023). *La transición energética en Colombia*. Wuppertal, Bogotá: Wuppertal Institute. https://wupperinst.org/fileadmin/redaktion/downloads/publications/Transicion_Energetica_Colombia.pdf

Torrado, Santiago (18 de enero de 2023). Petro reta a la élite económica de Davos con su propuesta de canjear deuda por servicios ambientales. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2023-01-18/petro-reta-a-la-elite-economica-de-davos-son-su-propuesta-de-canjear-deuda-por-servicios-ambientales.html>

Trade Unions for Energy Democracy [TUED] (2023). *Towards a Public Pathway Approach to a Just Energy Transition for the Global South*. Nueva York. <https://www.tuedglobal.org/working-papers/second-draft-towards-a-public-pathway-approach-to-a-just-energy-transition-for-the-global-south>

Unión Sindical Obrera [USO] (23 de octubre de 2023). El futuro de Ecopetrol está en riesgo por desinversiones en exploración y producción. <https://www.uso.org.co/2023/10/23/el-futuro-de-ecopetrol-esta-en-riesgo-por-desinversiones-en-exploracion-y-produccion/>

Vega Araújo, José y Muñoz Cabré, Miquel (2023). Solar and wind power in Colombia: 2022 policy overview. *SEI Brief*. <https://www.sei.org/publications/solar-wind-power-colombia-2022/>

Revolucionando un mundo en crisis

Transformaciones socioecológicas
y energías comunitarias



*Tatiana Roa Avendaño
y Eliana Carolina Carrillo Rodríguez*

Las transformaciones de la energía deben ir más allá del cambio tecnológico para repensar nuestro modelo energético a fin de que este refuerce el control comunitario, minimice el gasto, aumente el acceso a alimentos sanos y agua limpia, y regenere nuestro medio ambiente. En toda América Latina, muchas comunidades están construyendo alternativas energéticas que allanan el camino para una verdadera transformación.

Así como cambia el mundo,
Cosechar agua y energía...
Será lo más importante.
Pa' mantener la autonomía (Salazar, 2023)

La energía suele analizarse en términos de sistemas o tecnología: monopolios de energía privados, redes estatales, el uso de energías renovables en lugar de combustibles fósiles. Sin embargo, se suele pasar por alto la fuente de energía más importante: la que brinda energía a las comunidades para visualizar y llevar a cabo nuevos sistemas que no solo proporcionan energía a los hogares, sino que además construyen comunidades saludables. Esta energía comunitaria ya está siendo desarrollada por numerosas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas comunitarias, que suelen combinar conocimientos y tecnologías ancestrales y modernos, han colocado una vez más al sol, el viento y el agua al servicio de las personas. Al hacerlo, cuestionan el discurso dominante sobre la transición energética.

En nuestra labor como activistas e investigadoras, hemos comenzado a documentar estas experiencias en una Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa.¹

¹ transicionenergeticajusta.org

Estos ejemplos no solo abarcan la producción de energía eléctrica, sino que también intentan construir o consolidar la producción alimentaria o la gestión del agua controladas por las comunidades, sobre la base de relaciones recíprocas con la naturaleza y las personas, en lugar de relaciones extractivistas. Estas son esencialmente propuestas para una transición energética justa. La exhibición, que comenzó en 2020, ha logrado reunir más de cien experiencias comunitarias que ilustran los esfuerzos de varios pueblos y comunidades para enfrentar el modelo energético que ha privatizado la energía, la ha concentrado en manos de unas pocas empresas transnacionales y ha distanciado a la población de la toma de decisiones en asuntos fundamentales sobre la misma.

En el contexto actual, el debate sobre la transición energética ha cobrado relevancia debido a las crisis climática, alimentaria, económica, de biodiversidad, de democracia y de agua, consideradas por algunas personas como crisis civilizatoria. Estas crisis son en gran medida resultado de un sistema económico que ha maximizado sus ganancias y su crecimiento dependiendo de la quema de combustibles fósiles. Los resultados de este enfoque han dejado en claro sus devastadoras consecuencias sobre los territorios. Sin embargo, las propuestas de transición energética a menudo se centran en enfoques corporativos, que profundizan las desigualdades y dinámicas coloniales entre el norte y el sur global, donde este último provee de materias primas al primero, a expensas de devastar sus territorios y vulnerar los derechos de los pueblos y comunidades. La promoción de energías renovables a través de grandes megaproyectos y la explotación de minerales requeridos para la transición y la producción de hidrógeno se encuentran en el epicentro de los debates actuales y mantienen la división internacional del trabajo.

Ante este escenario, surge la necesidad de explorar alternativas dentro de las transiciones socioecológicas, que van más allá del ámbito energético y buscan replantear nuestras relaciones con la naturaleza. Aquí es donde entran en juego las experiencias mencionadas, que han acuñado el término de “energías comunitarias”.

Estas emergen como propuestas esenciales y radicales, y desafían el modelo extractivista al proponer una perspectiva más inclusiva, justa y sustentable. Estas iniciativas representan un replanteamiento fundamental de nuestra relación con la energía, y abordan no solo la electricidad, sino también aspectos cotidianos: la energía de nuestro cuerpo y músculos, el sol, el viento y el agua. Ampliar el espectro de cómo entendemos la energía nos lleva a considerarla de manera integral, como un derecho y un bien común.

A lo largo de este ensayo, exploramos algunos aspectos en torno a las energías comunitarias en América Latina y el Caribe, centrándonos especialmente en Colombia, con el propósito de analizar su potencial para enfrentar los desafíos contemporáneos y proponer soluciones efectivas. De esta forma, durante el texto examinamos ejemplos concretos de algunas de estas iniciativas y destacamos su capacidad para integrar diversas fuentes de energía, promover la soberanía alimentaria y fortalecer a las comunidades locales. También reflexionamos sobre el papel crucial de las mujeres en la construcción y el mantenimiento de estas propuestas, así como los obstáculos y retos que enfrentan en su camino hacia un mundo más justo y sostenible.

Energías comunitarias: ¿en dónde surge el concepto y en qué consisten?

La gestación de alternativas energéticas desde una perspectiva comunitaria se inscribe en una historia que abarca varias décadas. Desde finales del siglo xx, diversas comunidades se han visto confrontadas por proyectos extractivos y de infraestructura, como las megarrepresas, que continuamente amenazan con destruir sus formas de vida y territorios. Por ejemplo, en Santander, la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, de la canadiense Isagen, erigido sobre el río del mismo nombre, resultó en la destrucción de formas de vida ribereña. El muro impidió la migración de los peces

reofílicos, como el bocachico, que constituían la base de la economía local. Además, los caudales del río ahora dependen del pulso energético, y las comunidades sufren con frecuencia inundaciones que destruyen sus cultivos y ponen en riesgo su vida. Las mujeres fueron unas de las más perjudicadas, al perder las actividades de venta del pescado y las actividades de turismo local, mientras que las jóvenes experimentaron el abuso y la violencia, incluyendo la violencia sexual, durante la fase de construcción del proyecto.

Lo que sucedió en el Sogamoso no es un caso aislado, en otros ríos también se vieron afectadas comunidades y territorios que siguen sin ser reconocidas como desplazadas del desarrollo y, en muchos casos, no han recibido ninguna reparación. La crítica al modelo energético, especialmente en lo referente a las megahidroeléctricas, impulsó a Censat Agua Viva y a varios procesos de resistencia a las represas en Colombia no solo a enfrentar el poder de las grandes empresas energéticas, sino también a reflexionar sobre la relación con la energía y a crear soluciones para alcanzar la autosuficiencia y autonomía energética. De esta manera, gradualmente, un grupo de organizaciones se unió para impulsar un proceso organizativo² y formativo que fortaleciera las capacidades en torno a temas energéticos.

El propósito era abordar el debate energético, construir alternativas y enfrentar la crisis climática y socioambiental. Las propuestas que emergieron buscaban establecer nuevas relaciones con la naturaleza, la energía y las tecnologías asociadas a esta. Las ideas generadas en este proceso tienen raíces que se extienden más allá del actual modelo capitalista y están conectadas con prácticas ancestrales y saberes tradicionales presentes en diversos territorios. Este proceso se consolidó con la creación de la Escuela de Técnicas y

² Organizativamente, este proceso dio lugar inicialmente a la red nacional de pueblos afectados por hidroeléctricas, que posteriormente se transformó en el Movimiento Nacional de Afectados por Represas, Ríos Vivos.

Técnicos en Energías Comunitarias, los debates allí planteados fueron dando forma al concepto de “energías comunitarias”.

Este concepto abarca un conjunto de saberes, prácticas y procesos de cambio relacionados con la producción y el consumo de energía y alimentos. Las energías comunitarias promueven una transformación en las relaciones de poder inherente al sistema energético, replanteando las relaciones con la naturaleza y todas las formas de vida, centrándose en el autoabastecimiento y la autonomía local y generando nuevas prácticas y usos de la energía que evitan el derroche y el despilfarro. Además, promueven la descentralización de la generación de energía, abordan problemas como la escasez y la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y fertilidad del suelo. También contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y son esenciales para garantizar el acceso universal a la energía.

Cada una de estas propuestas surge de una realidad local, responde a necesidades específicas y enfatiza que las transiciones socioecológicas son factibles y ya están en marcha. Estas transiciones se construyen a través de diversos procesos sociales que promueven la autonomía y una vida digna, al tiempo que defienden los cuerpos y territorios.³

La Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa

Algunas de las propuestas que conceptualizamos como energías comunitarias pueden ser consultadas en la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa. Esta iniciativa ha sido coorganizada con varias organizaciones año tras año desde el 2020. La finalidad de esta exhibición es destacar y visibilizar

³ Para obtener una caracterización más detallada, recomendamos consultar Censat Agua Viva et al. (2023).

las iniciativas y prácticas relacionadas con energías alternativas desarrolladas por organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, en América Latina y el Caribe. Los ejemplos que presentamos en el texto hacen parte de dicha exhibición virtual.

Recuadro 1

Objetivos de la exhibición

1. Visibilizar experiencias que han logrado resistir y enfrentar desafíos energéticos a nivel local, y alentar la autonomía en materia energética.
2. Fomentar la colaboración y la articulación social entre comunidades de distintas regiones mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.
3. Contribuir con soluciones prácticas, concretas y reales para la creación de opciones justas de transición energética a nivel local, e incentivar así a las comunidades a adoptar alternativas en sus respectivos territorios.
4. Enriquecer el debate sobre la transición energética desde la perspectiva de la justicia ambiental.
5. Proporcionar contenido que pueda ser utilizado por individuos que trabajan en diversos ámbitos, como investigadores, tomadores de decisiones y miembros de la comunidad, para sus esfuerzos de promoción, formación o comunicación.

Recuadro 2

A corte de finales de 2023 la exhibición cuenta con:

- 119 experiencias reconocidas como alternativas de autonomía energética
- 21.083 familias involucradas
- 122.226 personas beneficiadas

A finales de 2023, la exhibición había reconocido 119 experiencias alternativas a la autonomía energética, de las que se beneficiaban 21.083 familias y 122.226 personas. La exhibición reconoce una amplia diversidad de experiencias. Por un lado, se incluyen iniciativas que trabajan en torno a la autogestión energética comunitaria empleando tecnologías como biodigestores, bicimáquinas, ruedas Pelton, paneles solares, entre otras. Asimismo, se destacan

experiencias que relacionan la energía, la justicia hídrica y la soberanía alimentaria (que incluyen asuntos como los mercados campesinos, la agroecología, los viveros y huertas familiares y comunitarias, entre otras manifestaciones). Además, la exhibición abarca experiencias relacionadas con la reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos, para la producción de energía y alimento, pero también otros usos, como la elaboración de artesanías. De igual forma, algunas propuestas incluyen los ecobarrios, la autogestión de la salud a través de la transformación de plantas medicinales en productos para el cuidado, la recuperación y preservación de semillas y platos tradicionales, así como la recolección de aguas lluvia, entre otras prácticas.

Retos y desafíos de las energías comunitarias

En el trabajo conjunto con las experiencias de energías comunitarias, tanto en la Escuela de Técnicas y Técnicos como en la Exhibición Virtual, hemos identificado ciertos desafíos compartidos. Uno de los principales retos que enfrentan estas experiencias radica en la minimización de su potencial. Con frecuencia, se argumenta que no es posible sustentar toda la matriz energética de un país con energías comunitarias, lo que nos lleva a considerar varios problemas en este contexto.

En primer lugar, la transición energética no puede limitarse a un debate sobre el cambio de la matriz energética basado en diferentes tecnologías. Como mencionamos anteriormente, existe una discusión prioritaria que debe abordarse, relacionada con preguntas que consideramos fundamentales: ¿cómo concebimos la energía?, ¿para qué propósitos?, ¿para quiénes se produce energía? Si cambiamos el enfoque de esta discusión, tal vez podremos comprender otros aspectos cruciales, como la necesidad de una transformación cultural en la cual la energía deje de ser considerada como una mercancía y pase a ser vista como derecho y un bien común, que sostiene los

entramados de la vida, sus cuidados y lo que varios pueblos y comunidades plantean como el “buen vivir”, el “*Sumak Kawsay*” o el “vivir sabroso”. Esto debe ser abordado de manera contextual en cada uno de los territorios y comunidades.

Por ejemplo, en el departamento de Quiché, en Guatemala, la experiencia “Luz comunitaria de la zona reina en defensa del territorio” es una propuesta de turbinas comunitarias mediante las cuales varias comunidades mayas promueven la autonomía energética. Estas turbinas comunitarias surgieron en comunidades desplazadas durante el conflicto armado en los años 1980. La primera iniciativa enfrentó numerosas dificultades, ya que iba en contra del modelo hidroeléctrico empresarial que despoja a las comunidades de sus territorios y bienes naturales. Sin embargo, la idea de luz comunitaria se propagó a otras comunidades y logró articular a más de sesenta de ellas, que adoptaron esta iniciativa con el apoyo del Colectivo Ecologista Madreselva. Las turbinas generan beneficios significativos para la comunidad, con cuotas accesibles gestionadas por autoridades locales. Además de esto, se implementaron programas de protección de bosques comunitarios y prácticas agroecológicas para la siembra. Jóvenes capacitados se encargan del mantenimiento de la infraestructura, mientras que el colectivo continúa asesorando proyectos, promoviendo la autonomía y la vida digna frente a modelos extractivos.

Esto nos conduce a un tema central, que es la cuestión de la escala. Este modelo extractivista y la misma geopolítica nos han llevado a la necesidad de creer que si algo no abarca la totalidad, carece de utilidad, y aquí yace una gran trampa significativa que obstaculiza la capacidad de abordar problemas de manera contextual, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y sus necesidades. Sin embargo, las energías comunitarias desafían esta perspectiva, ya que surgen desde lo local sin necesariamente confinarse o aislarse en un solo lugar, sino que se expresan de diversas formas en diferentes territorios, articulando sus esfuerzos y capacidades con otras

experiencias. En tal sentido, es importante destacar que lo comunitario no implica necesariamente aislamiento.

Otro ejemplo concreto ha sido el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía. Gran parte de los conflictos en áreas rurales y urbanas están relacionados con la gestión de residuos orgánicos. En muchas ciudades, los vertederos o botaderos están saturados y algunos incluso han colapsado y causado graves afectaciones a las poblaciones circundantes. La propuesta de utilizar los residuos para la producción de energía y fertilizantes es, sin duda, una respuesta no solo a este problema, sino también a la deforestación, que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia. La iniciativa de la Red Colombiana de Energía de la Biomasa (Redbiocol), que también forma parte de la Red Biolac, consiste en emplear estos residuos mediante biodigestores, reducir así la presión sobre los bosques y las selvas, generar su propia energía, disminuir los costos asociados al suministro de energía y a los fertilizantes, y desafiar el sistema energético y agroalimentario que condena a las familias a una gran dependencia de insumos y costos energéticos elevados. La generación de gas a través de los residuos ha permitido potenciar las economías locales, añadiendo mayor valor a sus productos y fomentando la autonomía energética. Esta, que suele ser considerada una tecnología exclusiva para espacios rurales, ha sido también implementada en ámbitos urbanos como universidades, instituciones públicas e incluso conjuntos residenciales.

En este contexto, enfatizar en la construcción de autonomías comunitarias no implica concebirlas como entidades cerradas que excluyen cualquier diálogo con otras experiencias o incluso con lo público y el Estado, siempre y cuando este sea receptivo a las demandas y necesidades de las energías comunitarias y respete sus autonomías y estructuras organizativas propias. En este punto, es crucial que la institucionalidad reconozca la naturaleza de las energías comunitarias y las integre en la construcción de las políticas públicas relacionadas con el sistema alimentario, energético e hídrico. En

última instancia, esto debería ocurrir en un marco de ordenamiento territorial participativo donde se reconozcan y se incorporen las propuestas que ya vienen trabajando en los territorios en este sentido. Esto implica garantizar verdaderamente el derecho a la participación según las necesidades y características de cada una de las realidades locales.

Asimismo, en esta relación con lo público, es necesario que el Estado fomente investigaciones sobre las energías comunitarias y demuestre una voluntad de destinar incentivos, financiamiento y acompañamiento a este tipo de propuestas. También es crucial respaldar los ejercicios pedagógicos que muchas experiencias vienen desarrollando en los territorios, así como promover una discusión más amplia en la sociedad sobre el tema. Estos esfuerzos pedagógicos deben incluir el fortalecimiento de las experiencias y de los técnicos y técnicas locales para consolidar la autonomía comunitaria en la implementación y mantenimiento de las tecnologías. Además, es fundamental que la integración de estas experiencias comunitarias a la red eléctrica principal ofrezca beneficios, como la posibilidad de comercializar el excedente de energía generado por la comunidad, tanto a la red misma como a sus vecinos, sin que ello implique tener que registrarse como empresa de servicios públicos. También es importante promover y respaldar el desarrollo de microrredes comunitarias que puede ampliar la escala de alcance de estas propuestas y su distribución.

En relación con la cuestión de la escala, también es importante destacar la experiencia de Adjuntas Pueblo Solar, dirigida por la organización Casa Pueblo, quienes ante la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico, que dejó a la población sin energía eléctrica durante varios meses, optaron por lo que llamaron la “insurrección energética” al implementar un proceso de solarización del municipio de Adjuntas, un poblado de dieciocho mil habitantes en una región montañosa de Puerto Rico. Esta experiencia, que inició resistiendo a un proyecto minero, fue derivando en un proceso que incorporó el debate energético como un asunto central

para lograr la autonomía y democracia energética. Adjuntas Pueblo Solar ha logrado la instalación de cientos de módulos fotovoltaicos y ha empezado a construir sus propias microrredes para generar su propia energía de manera autónoma, local y descentralizada. En su enfoque, han priorizado la prestación de servicios básicos y han atendido a los hogares más vulnerables, incluyendo aquellos con necesidades médicas que requieren asistencia de tecnologías de manera constante. A través de esta iniciativa, han logrado establecer condiciones para independizarse de la red eléctrica, que en Puerto Rico está bajo el control de un monopolio corporativo que, en momentos de adversidad, no responde y, en cambio, profundiza las desigualdades. Esta experiencia ejemplifica las posibilidades de las energías comunitarias en escalas amplias y coloca en el centro la autonomía y la solidaridad.

Otro desafío común que enfrentan las energías comunitarias se relaciona con la instalación y el mantenimiento de tecnologías y equipos, lo cual responde a las barreras que impone la tecnociencia y el limitado acceso a estos conocimientos. La tecnología desempeña un papel fundamental en la industria energética y los grandes poderes energéticos han sabido aprovecharla estratégicamente para consolidar su posición dominante y generar dependencia. A través de inversiones masivas en infraestructura y desarrollo tecnológico, estas corporaciones han logrado controlar la generación, distribución y acceso a la energía en gran parte del mundo. Su enfoque se ha centrado en tecnologías convencionales, como centrales eléctricas de combustibles fósiles y redes de distribución centralizadas, que requieren una inversión considerable y que, una vez establecidas, crean una barrera significativa para la entrada de competidores más pequeños, comunitarios y sostenibles. Además, han promovido sistemas de medición y gestión de datos que se promueven con el discurso de mejorar la eficiencia energética, pero también han sido utilizados para mantener el control y limitar la elección de fuentes de energía más limpias y descentralizadas por parte de los (pro)consumidores. Esta estrategia ha llevado a una dependencia continua

de fuentes de energía altamente contaminantes y costosas, lo que perpetúa la influencia de estos grandes poderes energéticos en detrimento de alternativas más sostenibles y descentralizadas.

Los pueblos y las comunidades siempre han tenido a la tecnología como una barrera para llevar a cabo sus propuestas. Ante esta problemática, surge la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias como un espacio donde diversas organizaciones comunitarias de base pueden intercambiar experiencias y llevar a cabo procesos de formación destinados a mejorar la promoción y la sostenibilidad de tecnologías en comunidades que defienden sus territorios y contribuyen a mejorar los procesos productivos y la calidad de vida. En este entorno, se han desarrollado conocimientos e intercambios en torno a procesos como la deshidratación solar, las estufas eficientes, la energía fotovoltaica y los biodigestores, así como otras formas de relacionarse con la energía, las tecnologías y lo comunitario. Así recuerda Juan Pablo Soler la construcción de la escuela:

Desde 2013 hacia adelante, empezamos a generar un proceso metodológico de formación, que hemos ido replanteando con el tiempo de acuerdo a cómo el aprender haciendo nos va diciendo que hay que cambiar las cosas, es decir una metodología que está en constante renovación, que inició como un intercambio de experiencias y que hoy ya está perfilada como un espacio, escuela de formación [...] Hacer escuela a partir de la práctica, y empezamos a incorporar unos principios, unos principios que partían por ejemplo del “Aprender Haciendo”, no esperamos que alguien de afuera venga y nos instale la tecnología en el territorio porque vamos a generar una dependencia, entonces empezamos a plantear sistemas educativos de transferencia de conocimientos donde rompemos la dependencia y quien monta o quien opera los sistemas son los mismos pobladores locales (Soler, 2023).⁴

⁴ Ver Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia [@censataguaviva-amigosde-lat2863] (14 de noviembre de 2023).

Otros desafíos que enfrentan las energías comunitarias incluyen el acceso y costo de algunos materiales, la centralización de la generación energética, la falta de difusión de conocimientos, la ausencia de voluntad política y apoyo gubernamental, la carencia de políticas que fomenten y fortalezcan la autonomía y la descentralización energética, la privatización de servicios y bienes comunes como el agua o la energía, los impactos de la crisis climática, la violencia política y criminalización del trabajo de las organizaciones sociales, la falta de un enfoque de transformación radical en algunas perspectivas sobre la transición energética y los debates en torno al poscrecimiento.

Como podemos ver, varios de los desafíos que enfrentan las energías comunitarias tienen su raíz en las diversas concepciones sobre la energía: para quién, de qué maneras se produce y con qué propósito. No obstante, las energías comunitarias han logrado superar algunos de estos retos y desafíos. En la mayoría de los casos, los obstáculos se superan mediante el trabajo colectivo, las mingas, la “mano compartida”, el convite y otras prácticas comunitarias que suelen existir en estas comunidades y que ayudan a superar los obstáculos económicos. También se han utilizado fondos rotatorios comunitarios para el préstamo de recursos destinados al desarrollo de proyectos individuales, como ocurre con las comunidades indígenas del Tolima apoyadas por el Grupo Semillas. De igual forma, en algunas ocasiones, también han contado con recursos económicos de la cooperación internacional, los cuales suelen ser limitados pero contribuyen a la implementación de experiencias. Finalmente, ha habido apoyo a proyectos comunitarios por parte de administraciones locales, como en el caso de Lebrija, en Santander, donde el alcalde, motivado por la experiencia de la Escuela de Técnicos y Técnicas, decidió financiar la construcción de cientos de estufas. Los técnicos y técnicas comunitarias participaron en la construcción de algunas de estas estufas.

Estas experiencias demuestran la viabilidad de la autogestión y la autonomía energética para las comunidades, la creación de

propuestas concretas para alejarse de las energías basadas en combustibles fósiles, innovaciones tecnológicas y metodológicas en medio de sus procesos, la diversificación de las fuentes de energía, la participación activa de las mujeres en la construcción y sostenimiento de este tipo de experiencias, la creación y transmisión intergeneracional de conocimientos, la mejora de la calidad de vida y la reivindicación de sus formas propias de concebir y vivir en el mundo. En resumen, estas propuestas acumulan conocimientos y prácticas que crean y proyectan otros mundos posibles, más justos y sustentables desde la autonomía y la dignidad. Esto implica una comprensión amplia de la energía y la relación con ella, y el promover cambios culturales que conllevan a hacer un uso más consciente de la energía y de nuestros bienes comunes, lo que conduce a una comprensión integral y una experiencia vivida de las transiciones socioecológicas.

En cuanto a la integralidad, varias propuestas relacionadas con las energías comunitarias adoptan enfoques multidimensionales al combinar diversas fuentes de energía, procesos organizativos/comunitarios y saberes propios y contextuales. En este caso, nos gustaría resaltar la experiencia de “Las canastas de tecnologías y prácticas: una propuesta para la soberanía energética y alimentaria de Lo Bueno del Monte”, liderada por la Fundación UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, la cual se ha desarrollado en Santander, Colombia. Esta iniciativa trabaja en la revitalización de las prácticas tradicionales del cultivo de arroz y trigo, para fortalecer la soberanía alimentaria desde una perspectiva agroecológica. Para lograrlo, desarrollaron las Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles, donde exploraron y propusieron el concepto de “canastas comunitarias de tecnologías y prácticas”. Estas canastas implican la creación de propuestas integrales adaptadas a la realidad y proyectos de vida de cada comunidad, que incluyen equipos y conocimientos relevantes para la producción agrícola (por ejemplo, producción de biofertilizantes, recolección de aguas lluvias, huertas familiares, entre otras) y la autogestión energética (por ejemplo, biodigestores, deshidratadores

solares, bicimáquinas, entre otras), el intercambio de saberes y el trabajo colectivo en comunidades rurales.

La integralidad de las propuestas de las energías comunitarias reconoce y abarca diversos flujos energéticos, desde el sol, los alimentos, la energía humana hasta los distintos procesos de producción. Estas propuestas están diseñadas para responder a las necesidades de las comunidades en varias dimensiones. Además de conceptualizar las relaciones como un intercambio constante y mutuo entre los diferentes elementos de la naturaleza, en contraposición a reducirlas a simples transacciones en el mercado. En el caso de la propuesta de UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, han logrado articular la diversidad de procesos en la construcción de la soberanía energética y alimentaria de varias familias rurales, lo cual ha permitido fortalecer sus propuestas productivas. En esta misma vía, existen numerosas experiencias que integran una variedad de conocimientos, prácticas y herramientas tecnológicas diseñadas para abordar las necesidades y prioridades de los contextos en los que surgen.

Las mujeres desafían el modelo energético centralizado y patriarcal

Por otro lado, en lo que respecta al papel de las mujeres en la construcción y sostenimiento de estas iniciativas, es crucial su contribución a proyectos que tienen como objetivo central la construcción de una vida digna, la permanencia en los territorios y la promoción del buen vivir para sus familias y comunidades. A menudo, sin autodenominarse como feministas, las mujeres trabajan en favor de prácticas antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas, y promueven una visión alternativa del mundo. Esto implica enfocarse en la ecoddependencia y la interdependencia, así como en la lucha contra la mercantilización del agua, la tierra y la energía, y la defensa de la autonomía territorial. A su vez, es importante destacar que el discurso en torno a la energía y la transición suele ser

masculinizado y vinculado a intereses corporativos, lo que excluye otras voces y perspectivas sobre el tema. Sin embargo, consideramos que al centrarse en propuestas que exploran otras formas de relacionarse con la energía, se abre el espacio para voces diversas, que van desde lo comunitario, lo territorial, las mujeres, las y los jóvenes, niñas y niños, entre otros.

Algunas de estas propuestas han contribuido a facilitar las tareas diarias de las mujeres relacionadas con las labores del cuidado y la reproducción de la vida.⁵ Por ejemplo, la experiencia del “Vivero de las Mujeres de Roble, energía solar para sembrar plantas medicinales y transiciones justas” en el Valle del Cauca, liderada por un grupo de mujeres afrodescendientes, es un ejemplo notable. Estas mujeres instalaron unos aljibes y un sistema de recolección pluvial, lo que les ha evitado realizar largos desplazamientos para obtener agua, como hacían anteriormente. Además, el vivero ahora cuenta con paneles solares que les permiten aprovechar la energía solar para diversas actividades dentro del mismo. Esto les ha brindado la posibilidad de escuchar radio mientras trabajan y de prolongar su jornada en el vivero después de la caída del sol, lo que les permite compartir más tiempo con sus compañeras. Además, el vivero se ha convertido en una fuente de ingresos al transformar las plantas medicinales en productos para la autogestión de la salud, lo que no solo contribuye a su autonomía económica, sino que también fortalece su papel en la comunidad y recupera sus saberes ancestrales.

Otro ejemplo en esta línea son las estufas eficientes, que no requieren el mismo consumo de leña y contribuyen así a la reducción de la deforestación. Además, promueven los huertos leñeros para producir la madera necesaria para su funcionamiento. Esta práctica evita que las mujeres, niñas y niños tengan que ir a buscar grandes cantidades de leña, al tiempo que mejora la salud de las mujeres y reduce los problemas respiratorios causados por las estufas de leña

⁵ Labores en las cuales han sido históricamente socializadas en el marco de la división sexual del trabajo.

tradicionales. La experiencia “Estufas eficientes de leña y huertos leñeros para la conservación comunitaria de los bosques y el buen vivir” es ejemplo de ello.

Reflexiones finales

La urgencia de transformar el sistema energético en el contexto de las transiciones socioecológicas supone una transformación socio-cultural profunda del modelo de producción, gestión, propiedad y de consumo. A su vez implica la reconfiguración del modelo energético hegemónico, que está caracterizado por la alta concentración de grandes empresas privadas que controlan la generación y la distribución eléctrica (Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, 2023). En cambio, debemos avanzar hacia un modelo que otorgue un papel central a las iniciativas locales, democratice la producción y generación de energía, y promueva estas propuestas desde un enfoque intersectorial, impulsado por organizaciones, comunidades, cooperativas y otras formas organizativas comunitarias.

En concreto, es necesario que la institucionalidad brinde incentivos fiscales y financiamiento para el fortalecimiento, desarrollo y la implementación de este tipo de experiencias. Ello debe estar conectado con un marco regulatorio claro y favorable que reconozca y promueva este tipo de iniciativas. De igual forma, es necesario que el acceso a la red eléctrica pública facilite la integración de la energía generada a nivel comunitario y se establezcan mecanismos equitativos para la retribución por el excedente de energía inyectado a la red, así como la posibilidad de una comercialización entre vecinas y vecinos. También, es necesaria la participación y la vinculación de estas experiencias en la toma de decisiones alrededor del sistema energético es central, así como la defensa del territorio y una visión integral del mismo en donde no necesariamente se fraccione lo alimentario, lo energético y lo hídrico, sino que se establezcan miradas, rutas y políticas más integrales. Hay otros aspectos en los que

es necesario profundizar, como el fomento y desarrollo nacional de ciertas tecnologías y materiales que mantienen la dependencia y encarecen los insumos.

Estos cuestionamientos nos conducen a la necesidad de visibilizar y fortalecer las energías comunitarias, para que puedan establecerse cada vez más como una red y un sistema alternativo que promueva el cuidado y la reproducción de la vida a través de la soberanía energética, alimentaria e hídrica de los territorios. Las energías comunitarias requieren garantías para sus propuestas. También necesitan ser visibilizadas, reconocidas y respetadas, resaltando su carácter comunitario y autónomo como aspecto central. Además, exigen un relacionamiento equitativo con el sistema energético nacional e internacional, que transforme las relaciones de poder que han impuesto las grandes empresas energéticas. Esto implica que se las reconozca como actores fundamentales en lugar de tratar de cooptarlas y obligarlas a adoptar estructuras formales como empresas y otras figuras. También son necesarios incentivos financieros, programas de formación y fortalecimiento para las y los promotores locales, el fomento de la industria nacional para reducir la dependencia tecnológica externa y la implementación de programas locales de asistencia técnica, entre otras medidas.

La transición energética justa avanzará a medida que asumamos el control de la energía, las maneras de producirla y en qué se decide utilizarla.

¡Fortalecer las energías comunitarias es poner la reproducción de la vida en el centro!

Bibliografía

Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia [@censataguaviva-amigosdelat2863] (14 de noviembre de 2023). Video 1 - Aprender haciendo: Escuela de técnicos y técnicas comunitarias en energías alternativas [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pKspzspwf8c>

Censat Agua Viva et al. (2023). *Promoción y fortalecimiento de las Energías Comunitarias en Colombia. Propuestas para Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Ruta de la Transición Energética Justa. Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo*. Bogotá. <https://censat.org/wp-content/uploads/2023/03/Promocion-y-fortalecimiento-de-las-Energias-Comunitarias-en-Colombia.pdf>

Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, Chile (2023) Impulsar transiciones energéticas justas desde la ciudadanía. *Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad*, (6). <https://co.boell.org/es/2023/08/15/comunidades-energeticas-energias-comunitarias>

Salazar, Fernando (2023). Coplas campesinas nacidas en el seno de la Escuela técnicas y técnicos comunitarios en energías alternativas. *Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad*, (6), 64. <https://co.boell.org/es/2023/08/15/comunidades-energeticas-energias-comunitarias>

Soler-Villamizar, Juan Pablo (4 de abril de 2023). Habilitadores Energéticos. *Revista Raya*. <https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/287-habilitadores-energeticos.html>

Socializar la energía

Lecciones de las campañas radicales de vivienda en Alemania



*Colectivo communia**

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: NURIA DEL VISO

* Colectivo communia es un grupo de estudios de reciente creación comprometido con el desarrollo y la aplicación de estrategias para una economía democrática. Su trabajo se centra en apoyar a los movimientos sociales que abogan por la socialización y en explorar modelos alternativos de propiedad pública y democrática. Se esfuerzan por promover el pensamiento y la acción económicos progresistas mediante la formulación de políticas, la investigación rigurosa y el desarrollo de narrativas convincentes que aboguen por una economía al servicio de la mayoría. Este ensayo ha sido escrito por Lemon Banhierl, Justus Henze y Max Wilken, el equipo de communia que trabaja en la socialización de la energía.

Para recuperar el impulso perdido para una transición energética, los defensores de la justicia climática y energética pueden aprender del victorioso referéndum de los berlineses en apoyo de la expropiación radical de la propiedad de empresas inmobiliarias en 2021. Este no solo obedeció a una estrategia que hacía recaer los costos sobre las empresas y no sobre las personas, sino que también va más allá de la propiedad pública tradicional para explorar modelos de participación popular.

En septiembre de 2021, el 59,1 % de los berlineses votaron a favor de expropiar y socializar las grandes empresas de vivienda dentro de la ciudad-estado de Berlín. Era la primera vez en cuarenta años que un movimiento social alemán se manifestaba a favor de la propiedad pública y democrática a tan gran escala. Pero el movimiento consiguió algo más que una victoria en el referéndum. Expropiar Deutsche Wohnen & Co. reintrodujo el tema de la propiedad en la política general y atrajo la atención internacional.

Y lo que es aún más importante, la campaña resucitó el concepto de socialización –un grito de guerra del movimiento obrero olvidado hace tiempo– como una reivindicación política factible en Alemania. Ello tiene repercusiones que van más allá de la lucha por una vivienda asequible en Berlín. La socialización, como reivindicación y como práctica tangible del movimiento, podría aplicarse a otros ámbitos de la economía, en particular al sector energético. Debido a la creciente crisis climática, las campañas de socialización no solo son desesperadamente necesarias, sino también cada vez más realistas.

La idea de la socialización para una transición energética justa y rápida se encuentra con un sector energético que está experimentando actualmente una intensa transformación. El camino de esta transformación está muy disputado. A un nivel simplificado, el bloque dirigente puede verse como un campo de batalla entre

un proyecto fósil-capitalista históricamente atrincherado y conservador y la emergente hegemonía verde-capitalista. Mientras ciertos elementos de la antigua hegemonía fósil-neoliberal, como las facciones del capital individual en la industria energética, junto con los partidos conservadores y reaccionarios, se esfuerzan por mantener sus modelos empresariales frente a las actuales políticas climáticas, un grupo diverso de actores políticos se está alineando dentro de un proyecto hegemónico verde-capitalista.

Esto incluye algunas asociaciones ecologistas y grupos de estudios, así como partidos verdes y, hasta cierto punto, socialdemócratas, pero también asociaciones empresariales y segmentos de la clase capitalista como la industria automovilística alemana o la economía del hidrógeno.¹ El proyecto se centra en movilizar el capital privado mediante una mezcla de incentivos, subvenciones y políticas industriales. Sin embargo, tanto la amplitud como los objetivos divergentes entre los actores de la sociedad civil y las facciones del capital, así como la participación vacilante e incompleta de los sindicatos conllevan un cúmulo de contradicciones internas y debilidades potenciales. El Gobierno federal alemán, que incluye a los verdes, los socialdemócratas y los liberales, encapsula estas contradicciones internas en una coalición de gobierno inestable.

Aunque la hegemonía verde-capitalista aún no está firmemente establecida, es muy probable que consolide su posición en los próximos años. Sin embargo, esto no es motivo de celebración: el proyecto verde-capitalista es totalmente insuficiente para abordar la magnitud de la crisis climática y es disfuncional debido a su dependencia de transferir los costos de la transformación a la mayoría de la población a través del mercado. Como consecuencia de ello, seguirá siendo políticamente inviable y prolongará innecesariamente la transición verde más allá de lo que podemos permitirnos.

Estas discrepancias se pusieron especialmente de manifiesto en los recientes acontecimientos políticos en Alemania. Un intenso

¹ Para un análisis más detallado de la hegemonía (en alemán), véase Sander (2022).

debate suscitado por una nueva ley, que obliga a que, a partir de 2025, el 65 % de la energía de calefacción de los nuevos sistemas instalados proceda de fuentes renovables, puso al descubierto las limitaciones de las políticas basadas únicamente en cambios normativos, diseño del mercado y estructuras de incentivos (Amelang y Wehrmann, 27 de septiembre de 2023).

La respuesta a la iniciativa del Ministerio de Economía, dirigido por el Partido Verde, de modernizar el parque de viviendas fue reveladora. Por un lado, la dura reacción de los medios de comunicación contra los planes legislativos de los verdes puede atribuirse a las facciones del capital de los combustibles fósiles, que aún subsisten. Ejercen su influencia para frustrar los planes que podrían repercutir negativamente en sus beneficios en el sector del gas, que aún hoy domina la tecnología de calefacción en Alemania, y desviar la atención presentando el hidrógeno como la solución. Por otro lado, la opinión pública tiene una preocupación válida por las políticas basadas en medidas reguladoras que dejan indemnes la propiedad privada y los beneficios. Los inquilinos, que ya se enfrentan a un mercado de la vivienda financiarizado, entienden que soportarán la mayor parte de los costos de modernización del parque inmobiliario.

Los debates sobre la propuesta de abandonar la minería del lignito en Alemania son otro ejemplo de la incapacidad de la política verde-capitalista dominante para actuar en un sistema energético que depende principalmente del capital privado. En lugar de simplemente ordenar a una empresa energética controlada públicamente que adelantara la eliminación del lignito, el Gobierno local de Renania del Norte-Westfalia, de minoría verde, tuvo que negociar tratos sucios con la industria fósil para obtener concesiones menores. Es probable que el lignito, el combustible fósil más contaminante, deje de ser rentable en los próximos cinco a diez años. A pesar de ello, el acuerdo negociado solo adelantaba la eliminación de 2038 a 2030, ofrecía generosas compensaciones a las empresas energéticas y permitía seguir explotando las reservas de lignito hasta 2030

(*Environmental Justice Foundation*, 20 de enero de 2023). Esto dio lugar a una acalorada batalla en torno al pueblo de Lützerath, amenazado de destrucción por los planes de la gigante empresa de energía RWE de ampliar una mina de lignito de 66 km². Los activistas por el clima argumentaron que quemar el lignito restante y defender así los derechos de propiedad de RWE entraba en conflicto con la justicia climática y el objetivo de 1,5 °C. El pueblo se convirtió en un campo de batalla simbólico debido a la brutal violencia policial contra los activistas que lo ocupaban y personificó el conflicto entre los intereses corporativos privados y la urgente necesidad de una rápida transformación energética.

La crisis energética de 2022, desencadenada por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, ha vuelto a poner de manifiesto las limitaciones de un sistema energético basado en la propiedad privada. Ha dejado al descubierto los problemas que conlleva la mercantilización. El diseño del mercado energético europeo, que hace de la energía una mercancía comercializable, provocó un enorme aumento de los precios al consumo, al tiempo que permitió a las grandes corporaciones energéticas amasar miles de millones en beneficios. Las contramedidas del Gobierno alemán –paquetes de ayuda y tibias subvenciones a los precios de la energía para los consumidores– mitigaron los trastornos sociales más graves, pero dejaron indemnes los beneficios empresariales. Si el sector energético hubiera sido público, los precios podrían haberse regulado fácilmente hasta un umbral aceptable. Una vez más, la reacción a la crisis demostró que la propiedad privada y la apropiación de los beneficios de los servicios básicos siguen siendo sacrosantas, incluso para los políticos del Partido Verde.

Estos acontecimientos recientes demuestran por sí solos que las actuales estrategias de transformación no solo son injustas y excesivamente lentas, sino también disfuncionales y poco adecuadas a la magnitud de la crisis. La necesaria transformación rápida y socialmente justa está reñida con la propiedad privada y el sistema energético mercantilizado. El enfoque predominante de la transición

energética da prioridad a un modelo político que incentiva, subvenciona y regula a los participantes en el mercado, en lugar de canalizar la inversión pública hacia el establecimiento de una producción y suministro de energía de propiedad pública y gestión democrática. De este modo, se estabilizan las relaciones de propiedad y poder existentes y se transfieren a un nuevo marco verde-capitalista. Sin embargo, si el diseño del mercado y las estructuras de propiedad impiden una solución a la crisis climática, estas deben convertirse en el principal escenario de las luchas políticas.

Socialización, remunicipalización y el movimiento de expropiación de Berlín

La resistencia a la privatización es tan antigua como el propio neoliberalismo. Aunque numerosas remunicipalizaciones exitosas y batallas defensivas han logrado frenar la embestida neoliberal contra la propiedad pública en Alemania, la izquierda sigue encontrándose a la zaga (Cumbers y Paul, 2022). Sin embargo, el 26 de septiembre de 2021 marcó un punto de inflexión significativo cuando la trayectoria de las batallas contra los efectos perjudiciales de la propiedad privada comenzó a cambiar. La campaña “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.” triunfó en un referéndum en la ciudad-estado de Berlín que abogaba por la expropiación de todas las empresas privadas de vivienda que poseyeran más de tres mil viviendas en la ciudad. Para sorpresa de muchos observadores y participantes, una mayoría decisiva del 59,1 % de los votantes apoyó la resolución propuesta por la iniciativa, que había encabezado una impresionante campaña durante tres años. Esta campaña galvanizó a varios miles de berlineses y los transformó en activistas comprometidos con el desmantelamiento del dominio de las colosales corporaciones financierizadas sobre el mercado inmobiliario de Berlín.

Los activistas lograron un éxito rotundo y desde entonces no han cejado en su empeño de garantizar que se respete la voluntad de los

berlineses y se lleve a cabo el referéndum. Su lucha persiste, ya que los representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción están bien coordinados. A pesar de la mala reputación del sector inmobiliario privado entre los inquilinos berlineses, el Partido Socialdemócrata (PSD), en el Gobierno de Berlín, lo considera un socio aceptable. La aversión del PSD a la expropiación es tan fuerte que, tras su reelección en 2023, optó por formar una coalición con los conservadores en lugar de continuar la alianza progresista con los verdes y, sobre todo, la izquierda (partidarios de la socialización). El movimiento se mantiene firme en su lucha por la aplicación del resultado del referéndum, a través de organizaciones de inquilinos, manifestaciones y otros medios.

La iniciativa de Berlín tiene su base jurídica en un artículo de la Constitución alemana que no se ha utilizado en los setenta años de historia del Estado alemán (occidental). El artículo 15 de la Ley Fundamental alemana ofrece la posibilidad de socializar la tierra, los medios de producción o los recursos naturales independientemente de la voluntad de los propietarios privados. Aunque deja claro que los actuales propietarios deben ser indemnizados, la opinión de los expertos es prácticamente unánime en cuanto a que la indemnización puede ser inferior al valor de mercado. Curiosamente, especifica que la socialización significa no solo la expropiación de activos, sino también su transferencia a la economía común (*Gemeinwirtschaft*). Por lo general, se entiende que esto implica la democratización de la toma de decisiones y la orientación hacia el bienestar público en lugar del beneficio privado.

La campaña se basó en el creciente consenso de la sociedad alemana de que las políticas neoliberales iban demasiado lejos. Tras las campañas de privatización en Alemania desde la época del canciller Helmut Kohl en las décadas de 1980 y 1990, que se prolongaron hasta bien entrada la década de 2000, en los últimos veinte años se ha estado gestando en Alemania un potente contramovimiento a favor de la remunicipalización. Entre 2005 y 2017, tan solo en el sector energético se produjeron 284 remunicipalizaciones de

infraestructuras públicas previamente privatizadas (Becker, 2017). Esta oleada fue impulsada por movimientos ciudadanos locales. En 2013, un referéndum ciudadano obligó a la ciudad de Hamburgo a readquirir toda la infraestructura de red municipal (incluida el agua, la energía y la calefacción). Los municipios rurales volvieron a adquirir redes privatizadas y formaron asociaciones municipales suprarregionales, y en Berlín y otros lugares se readquirieron algunas viviendas que antes eran propiedad del Estado. La tendencia a la remunicipalización es una señal prometedora para la reactivación de la propiedad pública de los servicios públicos y para la transformación socioecológica. Sin embargo, el impulso ha decaído en los últimos años, lo que sugiere que el punto álgido de la ola de remunicipalización puede haber pasado ya (Cumbers et al., 2022).

La lucha por la expropiación en Berlín se basa en un punto de partida político muy similar, pero va mucho más allá de los proyectos de remunicipalización. Berlín sufrió una ola masiva de privatizaciones en la década de 2000. Tras un escándalo bancario en el que estaba implicado un banco estatal, Berlín se encontró al borde de la quiebra, lo que llevó al Gobierno local a aplicar un estricto programa de austeridad. Cientos de miles de apartamentos y terrenos, antes municipales se vendieron a precios vergonzosamente bajos a fondos de alto riesgo, empresas privadas o fondos de pensiones. Tras numerosas fusiones, adquisiciones y la consolidación general del mercado, estas viviendas pertenecen ahora a un puñado de grandes grupos europeos como Vonovia, Heimstaden o Adler. A principios de la década de 1990, más de quinientos mil apartamentos en Berlín eran de propiedad estatal; a finales de la década de 2000, solo quedaban 250.000 (Holm, 2022).

Los berlineses son muy conscientes de que estas corporaciones hacen poco con estos edificios, aparte de explotarlos para obtener beneficios mediante la escalada de los alquileres y las valoraciones especulativas. En consecuencia, Berlín se encuentra ahora en plena crisis de la vivienda. La ciudad tiene una gran afluencia de personas y una fuerte demanda de vivienda, una situación que las empresas

privadas explotan subiendo los alquileres desorbitadamente y construyendo nuevos edificios de apartamentos caros en lugar de viviendas sociales asequibles. Como declaró la activista de la campaña Isabella Rogner en una audiencia en el Parlamento de Berlín en 2023:

Cuando evalué los dos últimos años, mi principal observación es que la situación del mercado inmobiliario berlinés es peor que nunca para nosotros, los inquilinos. Si esta tendencia continúa, en pocos años habremos perdido la ciudad que todos ustedes, el Gobierno de Berlín, dicen defender. Tienen la oportunidad de salvar este Berlín, de preservar los hogares de millones de personas y de protegerlas del desplazamiento. El instrumento para ello, la socialización, está frente a ustedes (Abgeordnetenhaus von Berlin [@agh_berlin], 29 de agosto de 2023).

La campaña de expropiación se centra precisamente en el evidente fracaso de la privatización de la vivienda. En lugar de intentar remunicipalizar estos apartamentos comprándolos a precios de mercado sobrevalorados y esperando que los propietarios privados estén dispuestos a venderlos, la campaña ha dado un gran paso más. Propone expropiar las grandes empresas inmobiliarias a un precio muy inferior al del mercado y, curiosamente, no devolverlas al Estado. La campaña ha presentado un concepto para la administración de los edificios que van a ser expropiados, en el que los inquilinos, así como representantes de la sociedad civil, toman las decisiones en las estructuras del consejo y el Estado solo desempeña un papel menor. Reflejando críticamente las experiencias de propiedad estatal del siglo xx, la iniciativa presenta un modelo imaginativo centrado en la democratización radical de la toma de decisiones (Deutsche Wohnen & Co Enteignen, 2023).

La socialización que proponía la campaña iba mucho más allá de los modelos clásicos de propiedad: expropiación de las grandes empresas, indemnización por debajo del valor de mercado y democratización y desmercantilización radicales. Estas ambiciosas reivindicaciones fueron el punto de partida de la campaña y triunfaron.

La iniciativa presentó un concepto que resultó convincente: desde hace mucho tiempo los berlineses han tenido buenas experiencias con las viviendas comunales o el suministro municipal de agua. Aunque distaban mucho de ser perfectas, existían experiencias políticas y organizativas con la propiedad pública de estos sectores de servicios públicos. Junto con un programa político que abordaba adecuadamente la magnitud de la crisis de vivienda de Berlín, había amplias mayorías a favor de la expropiación. En fechas tan recientes como 2018, cuando se lanzó la campaña, tal resultado parecía impensable.

En Alemania, hay conciencia de diversas formas de propiedad estatal en los servicios básicos, incluso bajo el capitalismo: las empresas municipales de agua, las escuelas estatales y las viviendas municipales forman parte de la experiencia vivida de la gente. Sin embargo, la propiedad pública rara vez es plenamente democrática y pocas veces rechaza por completo el afán de lucro para centrarse en objetivos públicos. Los Estados o los municipios son tan capaces como los propietarios privados de presionar para que se extraigan beneficios y no se invierta lo suficiente en infraestructuras críticas. Esto es especialmente cierto si los activos deben recomprarse a precios de mercado, lo que limita las posibilidades de los agentes públicos. Además, la propiedad estatal siempre corre el riesgo de ser privatizada de nuevo cuando los presupuestos son ajustados. A pesar de algunas buenas experiencias de remunicipalización, que han permitido mejorar la calidad del suministro y abaratar los precios, no se aprecia ninguna tendencia hacia una oleada de propiedad pública adecuada a los problemas del siglo XXI, sobre todo en el sector energético.

El sector energético alemán y el papel de la propiedad local a pequeña escala

La remunicipalización o la creación de nuevas empresas municipales o cooperativas no bastarán por sí solas para gestionar la transición energética de forma rápida y socialmente justa. Es necesario socializar las grandes empresas para romper su poder de mercado, dirigir inversiones masivas a la generación de energías renovables a escala y transformar el sector en su conjunto, junto con los trabajadores, que tienen tanto el poder de organización como los conocimientos necesarios para la transición. Mucho depende de no tener que recomprar activos a valor de mercado y de democratizar adecuadamente las empresas energéticas. Y esto solo será posible en el marco de la socialización.

Las actuales estructuras de propiedad y la mercantilización del sistema energético alemán son producto de la liberalización de los sistemas energéticos a escala europea que se viene impulsando desde los años noventa en el contexto de la creación de un mercado interior único de la energía en la UE. En esencia, los paquetes de medidas de desregulación energética de la UE desde 1996 han fomentado un sistema en el que las empresas privadas han podido hacerse con importantes segmentos del sector energético, y la energía, antes considerada un “monopolio natural”, se ha transformado en un bien comercializable.

Las actuales estructuras de propiedad del sistema energético alemán también han sido moldeadas por leyes negociadas por la minoría verde en el Gobierno a principios de los años 2000. El fomento de las energías renovables está regulado desde 2000 por la Ley de Energías Renovables, que es básicamente un mecanismo para incentivar la construcción de energías renovables mediante una tarifa de alimentación pagada por el consumidor (Haas y Sander, 2016). Este mecanismo de subvención con una compra garantizada de electricidad verde creó un entorno de mercado seguro para las inversiones privadas a pequeña escala y tuvo un gran éxito como modelo para

este periodo. En retrospectiva, sin embargo, este mecanismo de subvención ayudó a iniciar un modelo de reducción de riesgo de la transformación verde, que está en expansión y que se ha observado cada vez más intensamente en los últimos años (Gabor, 2023).

La transición energética alemana fue impulsada en gran medida por pequeños actores privados: cooperativas energéticas, particulares con paneles solares en su tejado, servicios públicos municipales o empresas energéticas medianas que invierten exclusivamente en renovables. La tarifa regulada proporcionó a los pequeños agentes del mercado un marco normativo y una seguridad económica que han garantizado durante mucho tiempo las inversiones en energías renovables e incluso llevaron a la industria solar alemana a ser líder del mercado mundial durante un breve periodo de tiempo.

A partir de los años 2000, la “*Energiewende*” (transición energética) alemana fue un proyecto descentralizado de transformación energética en el que participaron diversos agentes y que, en consecuencia, fue elogiado y reproducido a escala internacional. Aunque la propiedad privada a pequeña escala suele beneficiar a los consumidores de clase media y no necesariamente a los trabajadores y a las poblaciones urbanas más pobres, al menos se invirtió en energías renovables. Hasta 2019, las cooperativas, los particulares y los agricultores poseían una cuota del 40,4 % de la energía renovable en Alemania (*Agentur für erneuerbare Energien*, 15 de enero de 2021). Sin embargo, esto está cambiando actualmente: la proporción de energía ciudadana a pequeña escala (*Bürgerenergie*) está disminuyendo lenta pero inexorablemente. Los promotores de proyectos, los bancos, las empresas de inversión y las cuatro grandes corporaciones energéticas que dominaban el mercado de los fósiles se están pasando rápidamente a las energías renovables. Se espera que su cuota siga aumentando en los próximos años, mientras que los productores de energía locales, cooperativos y a pequeña escala seguirán perdiendo cuota (*Solarserver*, 21 de diciembre de 2020).

Socialización para la propiedad pública democrática a gran escala

La propiedad local a pequeña escala y la remunicipalización deben desempeñar un papel en la transición energética. Sin embargo, es evidente que una transición energética social y ecológicamente justa debe centrarse además en la construcción de modelos públicos y democráticos a gran escala con el objetivo a largo plazo de una completa desmercantilización del sector y la prestación como servicio público universal.

La socialización propuesta por la iniciativa de Berlín significa la expropiación a gran escala de los activos de propiedad privada y su transferencia a instituciones gobernadas democráticamente y de propiedad pública centradas en objetivos públicos. La socialización ha demostrado su viabilidad como estrategia de movimiento, sobre todo porque politiza el antagonismo entre las grandes corporaciones de propiedad privada y el público. En el sector energético esto es relevante y necesario especialmente en lo que respecta a las grandes corporaciones de producción de energía y a los operadores de las redes de transmisión.

La producción de energía en Alemania solía estar dominada por cuatro grandes empresas de combustibles fósiles (Haas, Herberg y Löw-Beer, 2022). Aunque estas empresas llevan mucho tiempo invirtiendo poco en energías renovables, ahora están entrando en el sector y amenazan con privatizar el futuro del sistema energético. Al mismo tiempo, estas corporaciones aún conservan y están ampliando en parte sus activos de combustibles fósiles, por lo que tienen un enorme interés en mantener su producción. Su inversión en energías renovables es cada vez mayor, pero está supeditada a los beneficios futuros. Una transición energética rápida y socialmente justa no será posible sin los activos, así como sin los conocimientos, las capacidades y la mano de obra de los trabajadores del actual sector de los combustibles fósiles. En lugar de incentivar a los agentes privados y subvencionar de hecho los beneficios privados con dinero público, sería más eficiente que las empresas pasaran a ser

de propiedad pública y financiar directamente la transición, sobre todo si se tienen en cuenta los costos sociales de la misma (Lawrence, 26 de septiembre de 2022). La socialización y la financiación estatal de inversiones considerables en capacidades renovables a través de instituciones energéticas gobernadas democráticamente y de titularidad pública podrían crear puestos de trabajo sindicalizados y de calidad en el sector de las energías renovables y gestionar la pérdida de empleos en industrias que deben reducirse o eliminarse progresivamente, como la minería del lignito o la industria automovilística. Por el contrario, una transición basada en la propiedad privada nunca podrá ofrecer a los trabajadores vías seguras hacia sectores futuros. Las empresas socializadas también podrían realizar eficazmente las inversiones necesarias, ya que no están obligadas a proporcionar un rendimiento de mercado a los accionistas, y reducir así los costos de capital para la transición.

La socialización no solo implica la transferencia de la propiedad, sino que también incluye la gobernanza democrática y la atención al bienestar público. Las empresas de energía socializadas tendrían que estar gobernadas por representantes de los consumidores, asociaciones ecologistas y trabajadores, y el Estado tendría un papel secundario. Al mismo tiempo, tendrían que estar ancladas en objetivos claros de política pública, como el suministro de energía asequible, los objetivos de inversión en renovables y la transferencia de conocimientos al sur global.

La socialización presenta una solución a problemas similares en relación con las redes de transmisión. La red alemana de transmisión a larga distancia está actualmente dividida entre cuatro empresas privadas, financiadas a través de las tarifas de red que pagan los consumidores. Estas tarifas las determina una agencia estatal e incluyen un importante rendimiento del capital. Por consiguiente, los accionistas de estas empresas reciben un beneficio garantizado, suscrito por los consumidores. Al mismo tiempo, hay una falta de inversión que crea desequilibrios regionales y obstaculiza la expansión de las energías renovables. En lugar de esto, la red de transporte

a larga distancia debería gobernarse democráticamente a nivel nacional. La gobernanza de las redes de transporte debería seguir unos objetivos públicos claros y fijados democráticamente, como una expansión de las energías renovables basada en las necesidades y estar dirigida por los trabajadores y los representantes electos.

La socialización de las grandes empresas energéticas y de los operadores de redes debe complementarse con la propiedad democrática pública a nivel local. La producción local y descentralizada de energías renovables podría ser impulsada en parte por cooperativas energéticas. En las ciudades, los consejos de energía elegidos podrían desarrollar planes de descarbonización y reducción de la energía que serían aplicados por proveedores de servicios públicos municipales democratizados. Los servicios públicos regionales podrían vincular los planes locales de descarbonización con la expansión coordinada a nivel suprarregional de las energías renovables y las capacidades de almacenamiento.

Así pues, una transición energética democrática en un sector energético socializado se sustenta en diversos modelos de propiedad pública democrática. La complejidad del sistema energético, con diversas funciones, como la transmisión, la distribución y la producción que operan a diferentes escalas, exige una multitud de mecanismos e instituciones de gobernanza democrática.

Por lo tanto, un sector energético socializado debe entenderse como un sistema integrado de varios niveles que presenta una amplia variedad de modelos de propiedad pública y democrática que se refuerzan y potencian mutuamente (Cumbers, 2012). No se trata solo de propiedad, sino también de gobernanza, participación y responsabilidad. También se trata de crear estructuras en las que la toma de decisiones sea compartida y los beneficios se distribuyan de forma más equitativa. Esto incluye la socialización de las grandes empresas energéticas y los operadores de transmisión, la municipalización de las redes locales y la producción de energía, así como el apoyo y la promoción de la propiedad local y cooperativa a pequeña escala. Se trata de garantizar que las personas afectadas

por las políticas energéticas tengan voz y voto en la elaboración de dichas políticas. Un sistema energético de este tipo tiene el potencial de llevar a cabo la transformación energética necesaria de una manera no solo más rápida y eficiente, sino también más equitativa. Se trata de diseñar un futuro energético que dé prioridad al bienestar de los ciudadanos y del planeta, y garantice que la energía sea accesible, asequible y sostenible para todos.

La socialización como núcleo de una alternativa emancipadora al capitalismo verde

Obviamente, este breve esbozo de transformación energética democrática basada en la socialización contrastaría enormemente con los planteamientos políticos dominantes en la actualidad. Proponemos que la socialización puede ser el núcleo de un proyecto emancipador que contrarreste la actual captura capitalista de la transformación energética. La transformación hacia un capitalismo verde dirigido por el Estado no es en absoluto un proyecto hegemónico firmemente establecido y sigue habiendo contradicciones significativas que ofrecen oportunidades para una nueva oleada de luchas en torno a la propiedad pública.

Un contraproyecto emancipador al capitalismo verde aún no está suficientemente definido ni organizado y mucho menos suficientemente preparado para generar estratégicamente un poder de contrapeso a largo plazo. El reto de establecer un proyecto hegemónico de este tipo es doble. Por un lado, existe una necesidad permanente de resistirse a los retrasos en la transición energética que propugna la facción reaccionaria-fosilista (y, en parte, de formar las alianzas necesarias con los actores del proyecto verde-capitalista). Por otro lado, es necesario articular una crítica inspiradora, que inste a la acción, del proyecto verde-capitalista emergente.

Aunque este proyecto alternativo emancipador aún no esté plenamente establecido, actualmente existe un terreno fértil para

nuevas alianzas. Proyectos pioneros como la cooperación entre el movimiento juvenil Fridays for Future y el sindicato del sector de servicios Ver.di para una acción industrial conjunta en el sector del transporte público dan esperanzas para una nueva fase de luchas en el sector de la movilidad. En 2024, los activistas del clima y los sindicalistas volverán a unirse para reclamar mejoras salariales y mayores inversiones en el transporte público. El giro de parte del movimiento climático hacia los sindicatos, así como el correspondiente giro climático en parte de los sindicatos, podría sentar las bases para nuevas alianzas. Las fracturas y contradicciones internas del capitalismo verde ya ofrecen puntos de entrada para separar del proyecto verde-capitalista a actores individuales como los sindicatos y, en cierta medida, las asociaciones ecologistas, y ganarlos para alianzas entre la izquierda y los verdes.

Todo proyecto político exitoso requiere un núcleo popular que pueda servir de anclaje para las alianzas. Estamos convencidos de que un programa radical de propiedad pública basado en la socialización de la transformación energética puede formar este núcleo popular. Aunque un proyecto político emancipador no logrará la hegemonía a corto plazo, cada vez se hace más hincapié en construir poder en torno a la propiedad pública y la socialización. En Renania, parte del movimiento climático alemán se inspira en la exitosa iniciativa de expropiación de Berlín. La campaña “Expropiar RWE & Co.” pretende socializar la infraestructura energética privada en el estado federal de Renania del Norte-Westfalia; desafía, de este modo, a las dos grandes empresas energéticas, RWE y E.ON, y se propone transferirlas a una estructura pública y democrática para impulsar la transición energética local. La iniciativa está contemplando las posibilidades legales de expropiación, así como en conceptos para un sistema energético democratizado; realiza así un trabajo pionero para un sector energético socializado. Otras partes del movimiento por el clima también están empezando a desarrollar estrategias sobre la socialización en el contexto de la crisis climática (en el sector energético y más allá) y pretenden exponer

ideas de campaña concretas en una conferencia estratégica a principios de 2024.

La socialización de la transformación energética podría presentar un núcleo unificador para la política emancipadora, ya que ofrece mejoras concretas en los medios de vida de las personas al reducir y trasladar los costos de la transición, al tiempo que proporciona un curso de acción acorde con la magnitud de la crisis climática. La socialización puede ser –y ha sido– un objetivo de campaña exitoso y convincente, ya que permite que la mayoría de la población participe en los beneficios de la transformación, por ejemplo, a través del abaratamiento de los precios de la electricidad y la energía (y en la prestación a largo plazo como servicio básico universal). Ofrece así una perspectiva optimista a quienes sufren actualmente bajo el capitalismo neoliberal, y demuestra que, incluso en medio de la crisis climática, pueden lograrse mejoras sustanciales en las condiciones materiales de vida individuales a través de soluciones colectivas y no individuales basadas en el mercado.

Socializar las corporaciones energéticas y transformarlas junto con los trabajadores del sector, que aportan tanto los conocimientos como los recursos de poder para hacerlo, es necesario y posible. Si bien ha habido luchas locales y regionales en torno a la remunicipalización, hay una falta de experiencia del movimiento en la lucha y la configuración de la propiedad pública a un nivel que responda a la crisis climática. Con una agenda de socialización podemos moldear conceptos de propiedad pública amplia en objetivos de movimiento concretos y alcanzables.

La socialización, potencialmente a través de referendos, permite la entrada estratégica en el terreno y el poder a nivel estatal sin asumir necesariamente la forma de partido político, y sienta así las bases para alianzas de diversos actores. Dados los fundamentos jurídicos de la socialización en el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana y las experiencias prácticas iniciales obtenidas a través del movimiento de expropiación de Berlín, existe una oportunidad única para desarrollar la práctica de los movimientos en torno al

establecimiento de formas de propiedad pública democrática. Esto es crucial para los movimientos sociales, que no solo requieren demandas bien articuladas, sino también espacios experienciales y formas prácticas.

En 2018 nadie en Berlín pensaba que la expropiación de las corporaciones de vivienda tendría la más mínima posibilidad de generar una mayoría pública, pero hoy la socialización es una posibilidad muy real y una propuesta ineludible en los debates políticos en torno a la crisis de la vivienda. El cambio social puede avanzar a veces más rápido de lo previsto. Si se puede generar una dinámica similar en el sector energético, aún puede haber esperanza.

Bibliografía

Abgeordnetenhaus von Berlin [@agh_berlin] (29 de agosto de 2023). 22. Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am 28.08.2023 [video]. YouTube. [Isabella Rogner desde 1:28:45]. <https://www.youtube.com/watch?v=TCT3iK6LaHc>

Agentur für erneuerbare Energien (15 de enero de 2021). Neue Studie zeigt: Bürgerenergie bleibt zentrale Säule der Energiewende. <https://www.unendlich-viel-energie.de/studie-buergerenergie-bleibt-zentrale-saeule-der-energiewende>

Amelang, Sören y Wehrmann, Benjamin (27 de septiembre de 2023). German government to suspend tightening of building efficiency rules. *Clean Energy Wire*. <https://www.cleanenergywire.org/news/german-government-suspend-tightening-building-efficiency-rules>

Becker, Sören (2017). Our City, Our Grid: The energy remunicipalisation trend in Germany. En Satoko Kishimoto y Olivier

Petitjean (eds.), *Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatization* (pp. 118-130). Amsterdam y París: Transnational Institute et al. https://www.tni.org/files/publication-downloads/chapter_8_reclaiming_public_services_2908.pdf

Cumbers, Andrew (2012). *Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy*. Londres: Bloomsbury Publishing.

Cumbers, Andrew y Paul, Franziska (2022). Remunicipalisation, Mutating Neoliberalism, and the Conjuncture. *Antipode*, 54(1), 197-217. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/anti.12761>

Cumbers, Andrew et al. (2022). *Mapping Remunicipalisation: Emergent Trends in the Global De-Privatisation Process*. Glasgow: University of Glasgow; European Research Council. <https://eprints.gla.ac.uk/272257/1/272257.pdf>

Deutsche Wohnen & Co Enteignen (2023) *Gemeingut Wohnen: Eine Anstalt öffentlichen Rechts für Berlins vergesellschaftete Wohnungsbestände*. Berlín. https://content.dwenteignen.de/uploads/Gemeingut_Wohnen_3a03fa4c87.pdf

Environmental Justice Foundation (20 de enero de 2023). Lützerath: Germany needs climate action, not more coal. <https://ejfoundation.org/news-media/1%C3%BCtzerath-germany-needs-climate-action-not-more-coal>

Gabor, Daniela (2023). The (European) Derisking State. *SocArXiv*. <https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/hpbj2.html>

Haas, Tobias, Herberg, Jeremias y Löw-Beer, David (2022). From carbon democracy to post-fossil capitalism? The German coal phase-out as a crossroads of sustainability politics. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 18(1), 384-399. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15487733.2022.2069542>

Haas, Tobias y Sander, Hendrik (2016). Shortcomings and Perspectives of the German *Energiewende*. *Socialism and Democracy*, 30(2), 121-143. <https://doi.org/10.1080/08854300.2016.1183996>

Holm, Andrej (2022). *Die Lage der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin: Stellungnahme für die Expertenkommission zum Volksentscheid "Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen"*. Berlín: Rosa Luxemburg Stiftung. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Artikel/3-22_Onl-Publ_Wohnraumversorgung.pdf

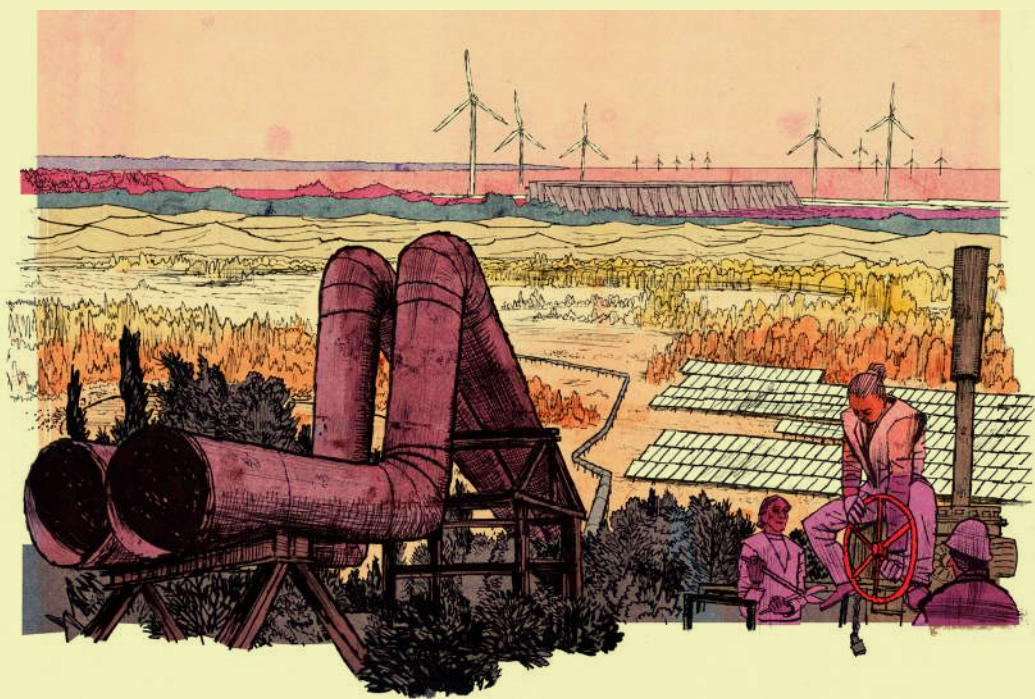
Lawrence, Mathew (26 de septiembre de 2022). Power to the People: The Case for a Publicly Owned Generation Company. *Common Wealth*. <https://www.common-wealth.org/publications/power-to-the-people-the-case-for-a-publicly-owned-generation-company>

Sander, Hendrik (2022). *An der Schwelle zum grünen Kapitalismus? Sozial-ökologische Hegemonieprojekte in Deutschland*. Berlín: Rosa Luxemburg Stiftung.

Solarserver (21 de diciembre de 2020). Studie zeigt: Bürgerenergie verliert Marktanteile. <https://www.solarserver.de/2020/12/21/studie-zeigt-buergerenergie-verliert-marktanteile/>

Doble poder

Forjar un movimiento para abolir el capital fósil y construir energías renovables públicas



Ashley Dawson

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: NURIA DEL VISO

El fracaso de la revolución de las energías limpias impulsada por el mercado para acabar con el uso de los combustibles fósiles o proporcionar un acceso equitativo a la energía requiere una doble estrategia: confrontar el capital de los combustibles fósiles y ampliar rápidamente las energías renovables públicas. La experiencia de los torneros de válvulas de Minnesota, la campaña de huelga Strike MoMA y el notable éxito de la campaña por las energías renovables públicas en Nueva York sirven de inspiración.

Los miembros de la campaña Public Power recibieron la noticia el día después del Primero de Mayo: la legislatura del estado de Nueva York había aprobado la Ley de Construcción de Energías Renovables Públicas (BPRA). En todo el extenso estado de Nueva York, los miembros del movimiento nos reunimos para celebrar nuestra reñida victoria. Sabíamos que esta victoria tenía repercusiones que iban mucho más allá de Nueva York. Tras cuatro años de lucha, en mayo de 2023 la campaña Public Power NY consiguió la aprobación de una importante política del nuevo pacto verde. La BPRA faculta y dirige al proveedor público de energía del estado –la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA)– para planificar, construir y operar proyectos de energía renovable en todo su territorio. A diferencia de lo que ocurre en otros estados, la BPRA rompe con decenios de ortodoxia neoliberal al poner a una autoridad pública al frente de la transición energética. En otras palabras, nuestra campaña consiguió aprovechar el poder del estado para luchar contra el capital fósil.

La campaña Public Power NY (PPNY) ofrece algunas lecciones útiles para los movimientos por la democracia energética en otras partes de Estados Unidos y más allá. Al organizarse en torno a un establecimiento rápido, democráticamente controlado y justo de energía limpia, nuestra campaña evita algunos de los escollos de la actual “transición” a las energías renovables. Como muestra el informe *Los mitos de la transición energética* del Transnational Institute

(Steinfort y Angel, 2024), el comentario habitual en los principales medios de comunicación de que los inversores privados y los mercados liberalizados han catalizado una revolución de la energía limpia es sencillamente incorrecto: los combustibles fósiles siguen representando el 82 % del consumo total de energía primaria en todo el mundo (Malm, 2020). Peor aún, el consumo mundial de carbón, gas y petróleo sigue aumentando. Lo que estamos viendo, en otras palabras, es una expansión energética en lugar de una transición energética (York y Shannon, 2019). De hecho, a pesar de la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden, que brinda 400.000 millones de dólares de financiación para las energías renovables, la producción nacional de petróleo en Estados Unidos alcanzará un máximo histórico en 2023 (Kelly y Khan, 8 de agosto de 2023). Las exportaciones de crudo han aumentado casi un 850 % desde que se levantó la prohibición de exportar en 2015 (*U. S. Energy Information Administration*, 29 de noviembre de 2024).

Esta situación implica que el movimiento para abolir el capital fósil debe tener dos dimensiones complementarias y conectadas. Una se centra cada vez más en el cierre de las infraestructuras fósiles. La otra debe dedicarse a la rápida implantación de las energías renovables. A medida que el movimiento climático lucha por acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y se orienta hacia diversas tácticas para lograr este objetivo, es imperativo que el movimiento comprenda que estas dimensiones son interdependientes y no pueden lograrse de forma aislada. Construir energías renovables sin abandonar los combustibles fósiles es un suicidio planetario, pero los líderes electos se negarán a acabar con la dependencia de los combustibles fósiles hasta que –y a menos que– haya fuentes de energía significativas con bajas emisiones de carbono. En consecuencia, el movimiento para abolir el uso de combustibles fósiles debe considerarse como una campaña a favor de lo que yo denomino *poder dual*. Utilizo este término de manera algo diferente a su connotación tradicional en los círculos radicales, donde tiende a referirse a la formación de una serie de contrainstituciones, como

los consejos de trabajadores que, una vez consolidados, desafían y en última instancia derrocan el Estado burgués. Como explico en detalle más adelante, el poder dual se refiere aquí a una estrategia que vincula los esfuerzos por construir energías renovables controladas públicamente con una lucha por abolir el capital fósil.

Hacia la abolición del capital fósil

Se ha producido un cambio pronunciado en el movimiento climático desde el ocaso de la pandemia de COVID-19. El movimiento se centra cada vez más en la abolición del capital fósil. Cuando 75.000 personas se manifestaron en Nueva York antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Ambición Climática en septiembre de 2023, una pancarta en la que se leía “Biden: acabemos con los combustibles fósiles” colgaba del podio de los oradores al final de la marcha. El éxito arrollador del libro de Andreas Malm *Cómo dinamitar un oleoducto* (2020) –que fue adaptado al cine en 2022– ejemplifica y ha contribuido a intensificar este giro del movimiento climático hacia una confrontación más radical e incluso insurreccional con el capital fósil.

Con este cambio estratégico ha llegado un creciente escrutinio crítico de las protestas masivas no violentas como las orquestadas por Extinction Rebellion (XR). La convicción principal de XR de que el movimiento solo necesita sacar a la calle el 3,5 % de la sociedad para producir un cambio político serio no ha reducido el poder político del capital fósil y la abundante capacidad de las sociedades capitalistas democráticas liberales para desactivar y resistir la protesta popular. En lugar de estos esfuerzos por intervenir en la sociedad llamando la atención de los medios de comunicación mediante manifestaciones masivas y detenciones frente a los grandes bancos, las sedes de las compañías petroleras y las oficinas de los periódicos, se ha producido un mayor interés por las estrategias militantes

para cerrar oleoductos, refinerías y otras formas de infraestructura de combustibles fósiles.

Pero la estrategia de sabotaje fósil enfrenta enormes obstáculos. En primer lugar, está el problema de la represión. La protesta se ha vuelto muy difícil en los principales petro Estados del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado ha perseguido duramente a los movimientos ecologistas orientados a la acción (así como a otros movimientos como Black Lives Matter (BLM)) durante los últimos treinta años. La categorización del Frente de Liberación de la Tierra como grupo ecoterrorista y su persecución por parte del FBI en la década de 1990 y principios de la del 2000 ejemplifican una historia de criminalización que supone un serio freno a los actos de sabotaje fósil. El enorme desequilibrio de poder resultante entre las pequeñas bandas de sabotadores de los combustibles fósiles y el vasto aparato coercitivo estadounidense hizo prácticamente imposible una acción eficaz. Y no es solo esta historia de represión la que puede disuadir los actos de sabotaje en la actualidad. Más de una docena de estados han aprobado leyes que criminalizan las protestas (Herr, 10 de febrero de 2022) contra los combustibles fósiles, y el Gobierno federal ha intensificado sus propias tácticas de vigilancia y penalización de los manifestantes. Los cargos por asociación ilícita presentados por el estado de Georgia contra los manifestantes del movimiento Defend the Atlanta Forest son un indicio de las medidas extremas que las autoridades están dispuestas a adoptar contra cualquiera que cuestione o interrumpa el capital fósil en Estados Unidos (Bruce y Shamsi, 21 de septiembre de 2023).

Además, aunque explote un oleoducto, las petroleras siempre pueden construir otro o simplemente poner el petróleo en trenes. Al fin y al cabo, una de las principales características del petróleo es su fluidez, que facilita su desplazamiento para evitar los esfuerzos por establecer puntos de estrangulamiento en los suministros y golpear al capital fósil (Mitchell, 2011). La oleosidad del petróleo fue, de hecho, una razón importante de su histórico ascenso a la preeminencia energética. Los sabotadores fósiles tendrían que ser

numerosos y estar geográficamente dispersos para poder cerrar las muchas rutas diferentes por las que el petróleo puede fluir hasta el mercado en un país como Estados Unidos. Ciertamente ha habido algunos actos heroicos por parte de los llamados torneros de válvulas, como los Four Necessity Valve Turners, que fueron arrestados en 2019 mientras intentaban cerrar el oleoducto Enbridge Line 4 en Minnesota. Pero las filas de los torneros de válvulas no están ni cerca de ser suficientes para disminuir seriamente el flujo de combustibles fósiles. Sin duda, el miedo a las largas penas de prisión tiene mucho que ver con esto.

La defensa de la “necesidad” movilizada por los torneros de válvulas de Minnesota sugiere una posible estrategia a desarrollar y, lo que es igualmente importante, también popularizó el sabotaje fósil. En su juicio, el grupo argumentó que sus acciones eran necesarias y estaban legalmente justificadas en respuesta a la amenaza de un cambio climático catastrófico. Esto dependía de convencer al presidente del tribunal de que “permitiera al jurado considerar la defensa de ‘necesidad’”. Puede que no lo hiciera. De hecho, dado el abrumador número de jueces conservadores nombrados en los últimos años por la derecha alineada con los combustibles fósiles, parece temerario contar con una aceptación judicial generalizada de esta defensa.

Al igual que el movimiento de desinversión y otros esfuerzos por movilizar un número cada vez mayor de personas contra el capital fósil, esta estrategia enfrenta un problema básico: los combustibles fósiles siguen siendo bastante populares. No me refiero solo a los conductores de Harley Davidson, los entusiastas de las carreras de NASCAR y los trabajadores de los oleoductos. Los combustibles fósiles son fundamentales para el bienestar económico de muchos –incluso de la mayoría– de los habitantes de las principales naciones capitalistas. Como ha argumentado Andreas Malm, el capital fósil reorganizó la vida de la clase trabajadora: concentró la energía y el trabajo en las ciudades y maximizó así su control sobre ellas (Malm, 2016). La “compulsión muda” que el capital ejerce sobre los

trabajadores se pone especialmente de manifiesto en la dependencia casi universal de los combustibles fósiles, que actualmente son la fuente no solo de puestos de trabajo, sino también de la mayor parte de la luz, la calefacción, los alimentos y la ropa.¹

El estancamiento político resultante se manifiesta en la correlación directa entre el costo de los combustibles fósiles y el precio de otras mercancías. En el reciente brote inflacionario de Estados Unidos, por ejemplo, el 40 % del aumento de los precios en toda la economía se debió a la subida de los precios del petróleo y el gas (Leber, 12 de agosto de 2022). No se trata de una aberración: según el economista Mark Zandi, todas las recesiones desde la Segunda Guerra Mundial han estado precedidas de una subida de los precios del petróleo. Esto, por supuesto, sugiere que sería una gran idea abandonar el capitalismo fósil, no solo por el daño que los combustibles fósiles causan a las comunidades de primera línea en lugares como el “Callejón del Cáncer” de Luisiana, la franja de 135 km a lo largo del río Misisipi que alberga más de doscientas plantas petroquímicas y refinerías. La abolición de los combustibles fósiles acabará también con la lacra de la “fosilflación”. Pero eso es a largo plazo. A corto plazo, si disminuye el suministro de combustibles fósiles, aumenta la inflación y se encarecen la gasolina y los alimentos. Cuando esto ocurre, la gente sufre y a menudo echa a los políticos que considera responsables de su sufrimiento.

En otras palabras, la negativa de las élites políticas a enfrentarse al capital fósil no se debe simplemente a la corrupción política, aunque sin duda es un factor importante. La mayoría de los políticos no están dispuestos a correr el riesgo de provocar la inflación y las reacciones adversas de la población al frenar el suministro de combustibles fósiles. Las protestas de los chalecos amarillos en Francia son un ejemplo de esta dinámica. Y, al menos en Estados Unidos, la idea de aplicar impuestos más elevados a las empresas petroleras y a los ricos para subvencionar a todos los demás es un fracaso

¹ Acerca del poder del capital sobre el proletariado, ver Mau (2023).

político. Esto explica las desesperadas exhortaciones de Biden a las refinerías de petróleo para que aumentaran la oferta cuando la inflación se disparó en 2022 (Saenz y Betsy, 15 de junio de 2022). También ayuda a explicar por qué tanto él como el expresidente Obama persiguieron una estrategia energética de “todo lo anterior”. La Ley de Recuperación de 2009 de Obama, que adjudicaba 90.000 millones de dólares en créditos fiscales federales, pretendía ayudar a impulsar los proyectos de energías renovables (Osaka, 1 de junio de 2020). Este acuerdo, conocido como “equidad fiscal”, ha sido criticado con razón, ya que permite a un puñado de grandes bancos que proporcionan dinero en efectivo a los promotores privados de energías renovables a cambio de créditos fiscales decidir qué proyectos se construyen y, en muchos casos, paralizar por completo el desarrollo de las energías renovables (Knuth, 2021). La Ley de Reducción de la Inflación de Biden mantiene este acuerdo corrupto, aunque también permite que la financiación fluya hacia autoridades públicas como la NYPA, un hecho que fue clave en la campaña para aprobar la BPPRA en Nueva York. Sin embargo, junto con estas políticas de apoyo a las energías renovables, el gobierno de Obama casi duplicó las subvenciones a la exploración de petróleo y gas, a pesar de la promesa de 2009 de eliminarlas gradualmente (Leber, 11 de noviembre de 2014). El apoyo de Biden a la expansión tanto de las energías renovables como de los combustibles fósiles coincide con estas políticas anteriores aparentemente contradictorias. Como resultado, Estados Unidos va camino de convertirse en el país que más ampliará la extracción de petróleo y gas de aquí a 2050, lo que representa más de un tercio de la expansión mundial prevista (Oil Change International, 2023).

La única forma de salir de este atolladero político, que está sumiendo al planeta en un caos climático cada vez más profundo, es intensificar y diversificar los esfuerzos para dismantelar la infraestructura fósil, junto con una expansión masivamente acelerada de las energías renovables. En cuanto a lo primero, necesitamos que prolifere no solo el movimiento de desinversión, sino también actos

de disidencia creativa dirigidos contra la clase de los megadonantes y sus esfuerzos por utilizar las instituciones culturales para maquillar de verde su reputación. Un ejemplo de estas tácticas es la campaña Strike MoMA, dirigida contra las élites petroleras del consejo de administración del Museo de Arte Moderno (MoMA) mediante una serie de protestas semanales y actos educativos.² Además de criticar –y finalmente dismantelar– a la oligarquía petrolera y su hegemonía cultural, tenemos que ampliar el movimiento por el poder público. Contrariamente a los mitos sobre la rápida transición energética a través del sector privado, el libre mercado y el inexorable abaratamiento de las energías renovables, la única forma de conseguir una energía rápida y justa es a través del poder público. En consecuencia, el control democrático del sistema energético es esencial para la liquidación del capital fósil.

Cómo ganamos el poder público en Nueva York

Hace unos años se hablaba mucho de que las empresas de combustibles fósiles invertirían a lo grande en energías renovables. El nuevo director ejecutivo de BP anunció, por ejemplo, que en 2020 la empresa reduciría la producción futura de combustibles fósiles en un 40 % y aumentaría su capacidad de generar electricidad a partir de fuentes renovables hasta cincuenta gigavatios (GW), es decir, veinte veces más (Bouso, 20 de septiembre de 2021). Hay motivos para ser escépticos sobre la durabilidad de estas inversiones, sobre todo desde que BP se rebautizó como Beyond Petroleum (Más allá del petróleo) en 2001, pero después eliminó sus programas de investigación sobre energía verde y los guardó en un archivo privado de la empresa (Macalister, 16 de abril de 2015). Su conversión a las energías renovables en 2020 no iba a durar: cuando BP abandonó sus planes

² Para una discusión sobre las tácticas de la campaña Strike MoMA, véase Dawson (2021).

de reducir la producción de petróleo y gas a principios de 2023, el precio de sus acciones se disparó. No es la única. Según la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos años las empresas de petróleo y gas han destinado menos del 5 % de sus inversiones a la producción y exploración de fuentes de energía de bajas emisiones (Bordoff, 7 de agosto de 2023).

Pero la inconstancia no es la única razón por la que la transición energética no debe dejarse en manos del capital fósil. Como ha demostrado Andreas Malm, gracias a la quema de combustibles fósiles el capital fósil pudo desvincular la producción de energía de fuentes naturales como el sol y el viento y, en consecuencia, concentrar a la clase trabajadora en fábricas urbanas, donde podía ser exprimida para obtener el máximo beneficio (Malm, 2016). Esta estrategia y la enorme energía generada por los combustibles fósiles produjeron una acumulación de capital sin parangón, pero también crearon una destrucción medioambiental catastrófica sin precedentes, incluidas las emisiones de carbono. Estas características opresivas no se disiparán simplemente si el capital fósil desplaza sus inversiones hacia las energías renovables. Como argumenta Tatjana Söding, el capital fósil está intrínsecamente comprometido con la explotación y la destrucción medioambiental:

Dado que el capital fósil, en la dinámica de su acumulación original, en primer lugar creó un espacio y un tiempo abstractos, en segundo lugar maximizó su control sobre la fuerza de trabajo global para permitir un grado de acumulación de capital (más) elevado y en tercer lugar creó la destrucción natural como un subproducto necesario, su transición a las energías renovables no debe entenderse como un alivio de estos subproductos intencionados (Söding, 20 de abril de 2023).

Söding sugiere que no debemos dejar la transición energética en manos de empresas de combustibles fósiles como BP, dado que se basan en una explotación profundamente destructiva de los trabajadores y el medio ambiente, así como en su orientación megalómana

creada por el acceso a reservas prácticamente ilimitadas de energía fósil.

En los primeros meses de nuestra organización, la campaña Poder Público descubrió que las dinámicas destructivas que caracterizan a las grandes petroleras también son fundamentales para las empresas eléctricas con fines de lucro. PPNY comenzó a finales de 2019 con una campaña organizada por la filial de la agrupación Democratic Socialists of America (DSA) de la ciudad de Nueva York contra un aumento de las tarifas eléctricas propuesto por la empresa de servicios públicos con fines de lucro ConEd. Al igual que en otros estados de Estados Unidos, las tarifas que los consumidores pagan a las empresas de servicios públicos por la electricidad en Nueva York están reguladas por los organismos designados políticamente en la llamada Comisión de Servicios Públicos (PSC). Pero aunque se supone que la PSC debe mantener tarifas asequibles, los investigadores de la campaña descubrieron que ConEd ya cobraba las segundas tarifas residenciales más altas del país. Además, a pesar de obtener enormes ganancias, ConEd y las empresas de gas como National Grid amenazaban sistemáticamente con cortar el suministro a los clientes con bajos ingresos.

Y no se trataba solo de que la empresa se comportara de forma manifiestamente injusta. Los investigadores de Public Power descubrieron que National Grid y otras empresas con ánimo de lucro tienen un incentivo estructural para construir tanta infraestructura como sea posible para justificar el aumento de sus tarifas. Esto se debe a que las empresas de gas reciben las llamadas “subvenciones a la ampliación de líneas”, dinero recaudado de los consumidores de energía para pagar gasoductos adicionales. Este acuerdo significa esencialmente que las empresas con ánimo de lucro obligan a los ciudadanos comunes y corrientes a pagarles para asegurar las infraestructuras fósiles.

El carácter explotador y destructivo para el medio ambiente de este aspecto del capital fósil quedó aún más claro cuando nuestra campaña descubrió que ConEd paga 1,4 millones de dólares en

cuotas anuales a asociaciones comerciales como el Edison Electric Institute y la American Gas Association, que ejercen presión para socavar las energías renovables, desregular el mercado energético y consolidar el poder de las empresas privadas de servicios públicos. Esta información y nuestro análisis de los incentivos estructurales que llevan a las empresas de servicios públicos con ánimo de lucro a construir infraestructuras fósiles dejaron claro a la campaña Public Power que solo una autoridad pública controlada democráticamente podría conseguir una transición energética rápida y justa.

El carácter racista del capital fósil quedó patente cuando la ciudad de Nueva York sufrió una ola de calor durante el verano posterior al inicio de la campaña contra la subida de tarifas. En medio de esta ola de calor, ConEd cortó el suministro eléctrico a las comunidades obreras de color de los barrios periféricos de la ciudad para proteger el suministro de las comunidades más ricas de la ciudad (Raskin, 23 de julio de 2019). Las comunidades de lugares como el este de Nueva York no solo suelen ser más pobres, sino que también tienen menos acceso a espacios verdes frescos y aire acondicionado, lo que contribuye a elevar las tasas de mortalidad relacionadas con el calor. Cortarles la luz fue un escalofriante ejemplo de la creación de “zonas de sacrificio” en comunidades racializadas. Tras estos incidentes, la campaña Public Power recorrió las zonas afectadas por los cortes de electricidad y celebró asambleas municipales por toda la ciudad, explicando que la lucha por un poder controlado democráticamente era la solución a las inasequibles tarifas eléctricas y a la injusticia de los cortes de electricidad.

Una de las grandes cuestiones a las que se enfrentaba la campaña Public Power era cómo crear una alternativa a las empresas con ánimo de lucro. Después de todo, empresas como ConEd, que han existido de una forma u otra desde la construcción de la red moderna, ejercen un inmenso poder económico y político. Afortunadamente, en el estado de Nueva York existe una fuente alternativa de energía: la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA). Creada durante la Gran Depresión, la NYPA fue concebida por el entonces

gobernador Franklin Delano Roosevelt como una alternativa pública a los precios abusivos de las empresas privadas de la época. Aunque la NYPA genera aproximadamente el 20 % de la energía limpia del estado a través de sus centrales hidroeléctricas en los Grandes Lagos, su capacidad para construir nuevas energías renovables estaba limitada por ley antes de la aprobación de la BPRa. Nuestra investigación sobre la NYPA nos convenció de que la autoridad podía construir proyectos de energía renovable más baratos, más rápidos y más eficientes que el sector con ánimo de lucro. A diferencia de las empresas energéticas con ánimo de lucro, por ejemplo, la NYPA no está obligada a generar ganancias astronómicas para los inversores. Además, gracias a su elevada calificación crediticia, la NYPA puede pedir préstamos para financiar proyectos a tasas de interés muy bajas. Esto significa que no tiene que subir las tarifas de los servicios públicos para construir infraestructuras, como hacen las empresas de servicios públicos propiedad de inversores. El desarrollo de energías renovables dirigido por la NYPA podría evitar que se intensifique la pobreza energética para cuya solución se lanzó inicialmente nuestra campaña.

Los organizadores, con experiencia en la lucha por la democracia energética en Nueva York, se dieron cuenta de que la campaña Public Power tenía que trabajar a escala estatal para conseguir la legislación necesaria a fin de otorgar a la NYPA el mandato de construir nuevas energías renovables. La campaña decidió organizar un amplio movimiento popular a favor del poder público y trabajar con socialistas y otros aliados dentro de la legislatura estatal para impulsar la BPRa. Formamos la coalición estatal por el poder público a finales de 2019, reuniendo a activistas de la democracia energética, grupos de justicia medioambiental y organizaciones climáticas como Sunrise Movement. A principios de 2020, comenzamos el proceso de colaboración para investigar de qué modo la legislación de energía pública podía satisfacer diversas necesidades en todo el estado y también comenzamos una serie estatal de eventos públicos de Energía 101 para educar a las personas sobre la injusticia y

el pésimo rendimiento del sistema de servicios públicos con fines de lucro. Durante la pandemia, nuestras victorias demostraron que Public Power era una fuerza a tener en cuenta: organizamos con éxito una moratoria del corte de electricidad y la condonación de la deuda de las empresas de servicios públicos para las comunidades duramente afectadas por la COVID-19.

Luchamos mucho por la BPRa, pero vimos cómo languidecía en los comités legislativos durante dos años consecutivos. Esto nos demostró que teníamos que seguir ejerciendo presión pública. Organizamos manifestaciones, incluida una concentración en la que denunciábamos a los legisladores que recibían dinero de las empresas de servicios públicos y –no por casualidad– se oponían a la BPRa. Nuestra campaña electoral organizó a legisladores clave, que luego ayudaron a organizar a personas menos progresistas políticamente en la legislatura para que respaldaran la BPRa. También emprendimos una acción directa, en la que personas que exigían energía pública se encerraron en una cadena humana a través de Broadway, en el centro de Manhattan, cerca de las oficinas de legisladores estatales clave.

Un aspecto fundamental para conseguir el poder político necesario para aprobar la BPRa fue ganarse a los trabajadores organizados. Aunque la clase trabajadora en general se beneficia del control democrático de los medios de producción de energía, los trabajadores no son un grupo homogéneo en torno a la transición energética. De hecho, contrariamente a los argumentos de Matt Huber sobre la lucha de clases unificada contra los motores capitalistas de la crisis climática, nos encontramos con que algunos sindicatos rechazaron inicialmente nuestros llamamientos a unirse a la campaña por la energía pública, mientras que otros se sumaron con entusiasmo (Huber, 2022). El apoyo inicial de mi propio sindicato, el Congreso de Funcionarios Profesionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, redundó en el respaldo del Sindicato de Profesores del Estado de Nueva York (NYSUT) y de otros sindicatos del sector servicios, como el 1199SEIU. Ganarse a los sindicatos requirió un

trabajo adicional, dado el escepticismo de los trabajadores de estos sectores con respecto a la industria (en gran parte privada) de las energías renovables en Estados Unidos, que es notoriamente anti-sindical. Para dar respuesta a estas preocupaciones, trabajamos con la AFL-CIO para incorporar a la BPRa un lenguaje laboral de referencia que incluyera disposiciones sobre el salario predominante y los acuerdos laborales de proyecto, un memorando de entendimiento sobre la transición laboral y veinticinco millones de dólares anuales para financiar una Oficina de Transición Justa que supervisara la reconversión profesional de los trabajadores del sector de las energías renovables.

La versión final de la BPRa que se aprobó en mayo de 2023 incluía la mayoría de las disposiciones clave por las que habíamos luchado durante tanto tiempo. La NYPA recibió, por fin, el mandato de construir, poseer y explotar proyectos de energías renovables. Cada año, la NYPA debe llevar a cabo una revisión para determinar si el estado está en camino de alcanzar el 70 % de energía renovable para 2030 y el 100 % para 2040, de acuerdo con los mandatos estatales. Si no es así, la NYPA debe intervenir para construir energía suficiente para compensar la diferencia. La BPRa también exige a la NYPA que elimine gradualmente sus centrales eléctricas de combustibles fósiles –incluidas las centrales sucias de respaldo (centrales eléctricas de reserva que se encienden cuando hay picos de electricidad) situadas predominantemente en comunidades de color– para 2030, y que suministre y entregue únicamente energía renovable a los clientes. Estas centrales están inoperativas la mayor parte del tiempo y solo funcionan en momentos de máxima demanda, por lo que están exentas de la mayoría de las normativas medioambientales. El cierre de estas centrales contaminantes es una de las principales victorias de nuestra campaña. La ley BPRa también exige a la NYPA que establezca un programa que permita a los consumidores de electricidad con ingresos bajos y moderados recibir créditos en sus facturas mensuales por cualquier energía renovable producida por la NYPA. Por último, la BPRa incluye todo el lenguaje

favorable a los trabajadores que la campaña Public Power elaboró en colaboración con aliados sindicales.

Ahora que hemos conseguido este mandato, debemos seguir luchando por una aplicación adecuada de la BPRa. La situación es difícil. Como legado de la larga historia de lucha del capital fósil contra la transición energética, el estado de Nueva York tendrá que añadir 2,5 GW al año durante los próximos ocho años para cumplir los objetivos climáticos del 70 % de energía renovable para 2030 (DiNapoli, 2023). Para ponerlo en perspectiva, el estado solo ha añadido 12,9 GW de energía en general (tanto fósil como renovable) en los últimos veinte años, o aproximadamente 0,645 GW al año. Este fuerte aumento es solo para descarbonizar la red energética. Para generar energía suficiente para alimentar una flota de vehículos eléctricos y descarbonizar la calefacción y refrigeración de los edificios y la industria, debemos triplicar aproximadamente la cantidad actual de generación de energía.

Los activistas de Public Power NY eran muy conscientes de la necesidad de promover la eficiencia energética. La expansión de la producción de energía –incluso si es renovable– ya está teniendo muchos efectos perjudiciales para el medio ambiente, como, por ejemplo, la minería en países de renta baja como Bolivia. Aunque la campaña era consciente de la necesidad de promover la eficiencia energética, no incluimos medidas de este tipo en la BPRa debido a la necesidad de centrar la legislación en un tema y a que el estado ya contaba con una legislación sobre eficiencia energética que marcaba tendencia. La Ley Local 97 de la ciudad de Nueva York, aprobada en 2019, obliga a reducir las emisiones en un 40 % en los edificios más grandes de la ciudad para 2030 y hasta en un 80 % para 2040 (Maldonado, 7 de octubre de 2022).

Llevar a cabo el desarrollo rápido y a gran escala de energía renovable ordenado por la Ley del Clima de 2019 de una manera democrática y justa será un desafío enorme. Afortunadamente, la BPRa estableció un proceso de planificación estratégica a través del cual se dirige a NYPA para determinar dónde, cuándo y cómo construye

energía renovable. Aunque no logramos todas nuestras demandas de democratización de la NYPA, este proceso de planificación estratégica es un lugar para la aportación sustancial de la comunidad, ya que la autoridad está obligada a consultar con expertos en clima y resiliencia, organizaciones laborales, defensores de los contribuyentes residenciales y de pequeñas empresas, y comunidades de justicia ambiental, entre otros, a medida que elabora sus planes estratégicos. Para garantizar que la NYPA cumpla fielmente este mandato de compromiso con la comunidad, actualmente estoy organizando un Observatorio de la Energía Pública que supervisará el trabajo de la autoridad, documentará su historia y participará en diversas formas de divulgación pública creativa en relación con la transición energética.

Construir un movimiento mundial por el poder público

La victoria de nuestra campaña Public Power no será muy significativa, en última instancia, si no contribuye a inspirar campañas exitosas por la democracia energética más allá de Nueva York. Solo una de cada diez personas en EE. UU. obtiene su energía de una autoridad pública y muchas de estas empresas, vestigios del impulso de la era del New Deal para la electrificación universal, son rehenes de las fuerzas conservadoras con grandes inversiones en combustibles fósiles (Bruggers, 28 de febrero de 2021). En 2022, las energías renovables solo representaban alrededor del 13 % del consumo total de energía primaria y el 21,5 % de la generación total de electricidad a escala comercial en Estados Unidos (*U. S. Energy Information Administration*, 2023). Los esfuerzos de un estado por abandonar los combustibles fósiles, por heroicos que sean, no modificarán significativamente estos promedios globales. Dicho de otro modo, no se puede construir el ecosocialismo en un solo estado. La red eléctrica está repartida por todo el país en tres grandes segmentos y los requisitos técnicos de las energías renovables dictan una mayor

integración en la red en lugar de una mayor autonomía local. Y, por supuesto, los desastres climáticos provocados por los combustibles fósiles no se detienen en las fronteras estatales o nacionales. Solo extendiendo el poder público más allá del estado de Nueva York conseguiremos la rápida transición energética necesaria para evitar la catástrofe climática.

Afortunadamente, la victoria de Public Power NY está inspirando a otros movimientos en todo el país. Aunque la campaña Nationalize Grid en Rhode Island, que ayudó a inspirar nuestro trabajo en Nueva York, ha perdido fuerza, la idea del poder público se está extendiendo a otros estados. En noviembre de 2023, Maine celebró un referéndum público sobre la creación de una empresa pública, Pine Tree Power. Actualmente, los residentes de Maine obtienen su electricidad de Central Maine Power, una empresa con ánimo de lucro de la gigante energética española Iberdrola, entre cuyos principales accionistas se encuentran potencias capitalistas fósiles como Qatar y Noruega, así como Blackrock, la enorme empresa de inversiones que se ha negado a desinvertir las dotaciones y fondos de pensiones que controla de los combustibles fósiles (Kerber, 17 de febrero de 2022).

La lucha por la energía pública en Maine no se limita a su control local, sino que también gira en torno a la lucha contra la pobreza energética, la reparación de la maltrecha red en un estado con el mayor número de apagones del país y la consolidación de los derechos, salarios y prestaciones de los trabajadores. La batalla en torno al referéndum de Pine Tree Power se convirtió en un plebiscito popular sobre el sistema de las empresas de servicios públicos con ánimo de lucro que está fracasando, un modelo tan antiguo como la red eléctrica moderna. Los grupos fachada de Central Maine Power, como Maine Affordable Energy, invirtieron cuarenta millones de dólares en las elecciones para engañar a los contribuyentes de Maine y hacerles creer que el control corporativo de la red es beneficioso para ellos, a pesar de que las empresas de servicios públicos propiedad de los consumidores que existen en el estado ya tienen

tarifas un 50 % más bajas que las de las empresas con ánimo de lucro (*Pine Tree Power*, 14 de septiembre de 2023). Al final, ganó el dinero de las empresas y el referéndum para crear Pine Tree Power fue rechazado.

¿Cuál es el futuro de las campañas por el poder público en Maine y en otras partes de Estados Unidos? Los defensores del poder público no podemos permitir que la derrota del referéndum paralice nuestro trabajo. La campaña reunió a defensores de Public Power de todo el país para fomentar la solidaridad y aprender del trabajo de los demás. Esta campaña consiguió una importante victoria con la aprobación de otro punto del referéndum que prohíbe a las organizaciones extranjeras propiedad de gobiernos (como Iberdrola y Versant) gastar dinero en futuras elecciones para referéndums estatales (Budion, 8 de noviembre de 2023). Esto significa que cuando se celebre otro referéndum en Maine, las probabilidades ya no estarán tan en contra del poder público.

Otras derrotas aparentes también han favorecido la lucha por la energía pública. En 2011, por ejemplo, la ciudad de Boulder, en Colorado, inició una adquisición pública de su empresa eléctrica con ánimo de lucro, Xcel Energy. Tras una década de feroz oposición por parte de Xcel, los votantes de la ciudad decidieron poner fin al proceso (Sakas, 20 de noviembre de 2020). Sin embargo, a pesar de esta derrota, la campaña ayudó a la ciudad a obtener importantes concesiones de Xcel, incluido el compromiso de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

También conviene recordar que la Autoridad de Energía de Nueva York se creó tras decenios de lucha por el poder público en Estados Unidos y en todo el mundo. Su creación coincidió con otras victorias, como la creación de la Tennessee Valley Authority (TVA) en 1933. Las campañas actuales pueden inspirarse en los poderosos movimientos de masas que ayudaron a conseguir el apoyo de los legisladores para la creación de autoridades como la NYPA y la TVA.

Mientras luchamos por el poder público en todo Estados Unidos, debemos recordar que esta campaña no puede detenerse en las

fronteras nacionales. Necesitamos construir un movimiento mundial por el poder público. Esto significa que nuestro trabajo para transformar la NYPA no debe limitarse a garantizar que la autoridad genere cantidades adecuadas de energía renovable. También tenemos que trabajar para establecer asociaciones público-públicas (APP), en las que una empresa pública como la NYPA pueda apoyar campañas y autoridades de energía pública en otros países. El desarrollo de estas APP debe ser una de las prioridades futuras de nuestra campaña.

El capital fósil crea desigualdades a nivel mundial al extraer recursos de zonas de sacrificio para beneficiar a élites situadas lejos de la carnicería. Ganar el control obrero de la transición a la energía renovable en las naciones capitalistas centrales por sí solo dejaría intacto un sistema mundial de imperialismo energético. Por ejemplo, como establece el reciente documento de posición *Reclaim and Restore de Trade Unions for Energy Democracy*, el modelo de privatización de los servicios públicos impuesto por organizaciones dominadas por Estados Unidos y la UE, como el Banco Mundial, en las regiones menos desarrolladas del mundo, como los países del África subsahariana, es un fracaso absoluto: después de treinta años de reformas a favor del mercado, un número creciente de personas carecen de acceso a la electricidad en muchos países africanos (Sweeney, 2023). En lugar del modelo fracasado de dar dinero público a empresas energéticas con ánimo de lucro, los países de África y del resto del mundo necesitan aquello por lo que hemos luchado en Nueva York: servicios públicos de electricidad verdaderamente democráticos, financiación pública y plena propiedad pública de la energía con bajas emisiones de carbono.

Bibliografía

Bordoff, Jason (7 de agosto de 2023). Behind all the Talk, This is What Big Oil is Actually Doing. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/08/07/opinion/oil-fossil-fuels-clean-energy.html>

Bouso, Ron (20 de septiembre de 2021). BP gambles big on fast transition from oil to renewables. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/sustainable-business/bp-gambles-big-fast-transition-oil-renewables-2021-09-20/>

Bruce, Christopher y Shamsi, Hina (21 de septiembre de 2023). RICO and Domestic Terrorism Charges Against Cop City Activists Send a Chilling Message. *ACLU*. <https://www.aclu.org/news/free-speech/rico-and-domestic-terrorism-charges-against-cop-city-activists-send-a-chilling-message>

Bruggers, James (28 de febrero de 2021). A Legacy of the New Deal, Electric Cooperatives Struggle to Democratize and Make a Green Transition. *Inside Climate News*. <https://insideclimatenews.org/news/28022021/electric-cooperatives-new-deal-fossil-fuels-renewables/>

Budion, Kaitlyn (8 de noviembre de 2023). Question 2 passes, banning foreign electioneering in Maine. *Maine Public*. <https://www.mainepublic.org/politics/2023-11-08/question-2-passes-banning-foreign-electioneering-in-maine>

Dawson, Ashley (2021). Growing Movement Pushes Museums to Cut Ties with Colonialism and Apartheid. *Truthout*. <https://truthout.org/articles/growing-movement-pushes-museums-to-cut-ties-with-colonialism-and-apartheid/>

DiNapoli, Thomas (2023). *Renewable Energy in New York State: Reviews and Prospects*. Nueva York: New York State Comptroller.

<https://www.osc.ny.gov/files/reports/pdf/renewable-electricity-in-nys.pdf>

Herr, Alexandria (10 de febrero de 2022). “They criminalize us”: how felony charges are weaponized against pipeline protesters. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/10/felony-charges-pipeline-protesters-line-3>

Huber, Matthew (2022). *Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet*. Nueva York: Verso.

Kelly, Stephanie y Khan, Shariq (8 de agosto de 2023). US crude output to rise to record 12.76 million bpd in 2023 - EIA. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/us-crude-output-rise-record-1276-mln-bpd-2023-eia-2023-08-08/>

Kerber, Ross (17 de febrero de 2022). Facing Texas pushback, BlackRock says it backs fossil fuels. *Reuters*. <https://www.reuters.com/markets/us/facing-texas-pushback-blackrock-says-it-backs-fossil-fuels-2022-02-17/>

Knuth, Sarah (2021). Rentiers of the Low-Carbon Economy? Renewable Energy’s Extractive Fiscal Economies. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 55(6), 1-17. <https://doi.org/10.1177/0308518X211062601>

Leber, Rebecca (11 de noviembre de 2014). Five Years Ago, Obama Promised to Phase Out Government Subsidies for Oil and Gas Exploration. Instead, They’ve Doubled. *The New Republic*. <https://newrepublic.com/article/120239/us-subsidies-fossil-fuel-exploration-double-under-obamas-watch>

Leber, Rebecca (12 de agosto de 2022). Fight Climate Change. End Fossilflation. Here’s How. *Vox*. <https://www.vox.com/science-and-health/2022/8/12/23290488/fight-climate-change-end-fossil-fuel-inflation>

Macalister, Terry (16 de abril de 2015). BP dropped green energy projects worth billions to focus on fossil fuels. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2015/apr/16/bp-dropped-green-energy-projects-worth-billions-to-focus-on-fossil-fuels>

Maldonado, Samantha (7 de octubre de 2022). City's 3-Year-Old Climate Law Finally Gets Some Details Ahead of 2024 Deadline. *The City*. <https://www.thecity.nyc/2022/10/07/nyc-climate-change-law-details-2024-deadline/>

Malm, Andreas (2016). *Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming*. Nueva York: Verso.

Malm, Andreas (2020). *How to Blow Up a Pipeline*. Nueva York: Verso.

Mau, Søren (2023). *Mute Compulsion: A Marxist Theory of the Political Economy Power of Capital*. Nueva York: Verso.

Mitchell, Timothy (2011). *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*. Nueva York: Verso.

Oil Change International (2023). *Planet Wreckers: How 20 Countries' Oil and Gas Extraction Plans Risk Locking in Climate Chaos*. Washington D. C. <https://oilchange.org/wp-content/uploads/2023/09/OCI-Planet-Wreckers-Report.pdf>

Osaka, Shannon (1 de junio de 2020). Obama's Recovery Act breathed life into renewables. Now they need rescuing. *Grist*. <https://grist.org/energy/obamas-recovery-act-breathed-life-into-renewables-now-they-need-rescuing/>

Pine Tree Power (14 de septiembre de 2023). CMP Attempts to Buy Statewide Election. <https://pinetreepower.org/wp-content/uploads/2023/09/ptp-press-release-9-14-23.pdf>

Raskin, Sam (23 de Julio de 2019). “This is Outrageous”: Local Pols React to Con Ed Power Outages. *The Brooklynner*. <https://bklyner.com/this-is-outrageous-local-pols-react-to-con-ed-power-outages/>

Saenz, Arlette y Betsy Klein (15 de junio de 2022). Biden urges oil companies to boost supply, slams high profit margins as “not acceptable” in new letter. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2022/06/15/politics/joe-biden-oil-companies/index.html>

Sakas, Michael Elizabeth (20 de noviembre de 2020). Boulder Ends Decade Long Pursuit of City-Owned Power Utility. *CPR News*. <https://www.cpr.org/2020/11/20/boulder-ends-decade-long-pursuit-of-city-owned-power-utility/>

Söding, Tatjana (20 de abril de 2023). Against the End of History: Why We Should Resist the Remaking of Fossil Capital into Green Capital. *Berliner Gazette*. <https://berlingazette.de/resistance-against-the-transformation-of-fossil-capital-into-green-capital/>

Steinfort, Lavinia y Angel, James (2024). *Los mitos de la transición energética*. Ámsterdam: Transnational Institute; Trade Unions for Energy Democracy.

Sweeney, Sean (2023). *Reclaim and Restore: Preparing a Public Pathway to Address Energy Poverty and Energy Transition in sub-Saharan Africa*. Trade Unions for Energy Democracy. <https://www.tuedglobal.org/working-papers/reclaim-and-restore-preparing-a-public-pathway-ssa>

U. S. Energy Information Administration (2023). Frequently Asked Questions: How Much of US Energy Consumption and Electricity Generation Comes From Renewable Energy Sources? <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=92&&t=3>

U. S. Energy Information Administration (29 de noviembre de 2024). Petroleum & Other Liquids. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_exp_dc_NUS-Z00_mbbl_m.htm

York, Richard y Shannon, Elizabeth B. (2019). Energy transitions or additions?: Why a transition from fossil fuels requires more than the growth of renewables. *Energy Research and Social Science*, 51, 40-43. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.01.008>

Sobre los autores y las autoras

Nick Buxton es coordinador del centro de conocimientos del TNI y editor fundador del informe Estado del Poder.

Eliana Carolina Carrillo Rodríguez es una antropóloga e investigadora feminista sobre ecología feminista, justicia ambiental y feminismos en América Latina. Es investigadora y docente en Censat Agua Viva y coordinó la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa. Forma parte de un grupo de investigación feminista de la Universidad de los Andes y del Grupo Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia.

Daniel Chávez es investigador del Centro de Intercambio de Conocimientos del Transnational Institute. Dio sus primeros pasos en el activismo en la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en Uruguay, donde trabajó durante casi 10 años antes de mudarse a los Países Bajos para obtener una maestría y un doctorado. Es un activista-académico con un fuerte compromiso con el progresismo en América Latina y tiene un gran interés por la democracia participativa. Se sumó al TNI como cocoordinador del Proyecto de Energía en 2001, donde estudió las alternativas democráticas y participativas a la privatización de la electricidad en el Sur global. Además, contribuyó a crear el proyecto New Politics en el TNI en 2002 y ha seguido trabajando en temas relacionados con la energía, las empresas públicas y los movimientos políticos. En

2018, copublicó su más reciente libro: Repensar lo público: Estado, sociedad y servicios básicos en América Latina.

Ashley Dawson es profesor de inglés del Centro de Posgrados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y del College of Staten Island. Sus últimos libros se centran en temas clave de las Humanidades Ambientales e incluyen *People's Power: Reclaiming the Energy Commons* (O/R, 2020), *Extreme Cities: The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change* (Verso, 2017), y *Extinction: A Radical History* (O/R, 2016). Dawson es autor del libro *Environmentalism from Below* (Haymarket), de próxima publicación, y coeditor de la colección *Decolonize Conservation!* (Common Notions). Es miembro de la campaña Public Power NY y fundador del Public Power Observatory.

Ebla Research Collective es un colectivo integrado por investigadoras con un entendimiento sólido del contexto político, socioeconómico, ambiental y de seguridad en el Líbano y la región árabe. El grupo procura crear un espacio para explorar posibilidades e imaginarios colectivos en un momento de transformación. Está compuesto por *Dana Abi Ghanem, Zeina Abla y Muzna Al-Masri*, autoras del ensayo “*Cómo negociar la crisis energética mundial desde la escalera*”, basado en la investigación realizada por ellas, junto con las investigadoras de campo *Amr Dukmak, Fatima Fouad el-Saman, Firas Dabbagh, Karim Khansa, Mostafa Soueid, Mounia Chmailtilli, Rand Berjawi y Watfa Najdi*

Clémence Dubois es directora adjunta de campañas internacionales de la red de activismo por el clima, 350.org. Ha participado en la campaña StopTotal en Francia.

Communia Collective is a young think tank committed to developing and implementing strategies for a democratic economy. Their work centres on supporting social movements that advocate

for socialisation and exploring alternative models of public and democratic ownership. They strive to advance progressive economic thinking and action through policy shaping, rigorous research, and the development of compelling narratives that call for an economy that serves the many. Their essay was written by Lemon Banhierl, Justus Henze and Max Wilken, communia's team working on energy socialisation.

James Goodman y el grupo de investigación Decarbonising Electricity: Gareth Bryant, Linda Connor, Devleena Ghosh, Jon Marshall, Tom Morton, Katja Mueller, Stuart Rosewarne, Riikka Heikkinen, Lisa Lumsden, Mareike Pampus y Priya Pillai. El primer Proyecto del grupo se centró en la oposición a la explotación de nuevas minas de carbón y la ampliación de minas existentes en Lusacia, Alemania, el estado indio de Chhattisgarh y Nueva Gales del Sur en Australia, que dio lugar a la publicación de *Beyond the Coal Rush* (Cambridge University Press, 2020). El segundo proyecto se centra en la transición a energías renovables a nivel regional en Lusacia, el estado indio de Karnataka y Australia Meridional, publicado en 2024 con el título *Decarbonising Electricity*. Puede visitar el sitio web del proyecto en: www.decarbenergy.net

Steffen Haag, Johanna Tunn, Tobias Kalt, Franziska Müller y Jenny Simon son un equipo de investigación en la Universidad de Hamburgo, que estudia la economía política mundial de las transiciones energéticas en África. Su labor se centra en las relaciones de poder poscoloniales. El proyecto de investigación H2POLITICS examina los impactos socioecológicos y en el desarrollo de producir hidrógeno verde en el sur global para su exportación a Alemania con el fin de apoyar su transición energética.

Timothy Mitchell es un teórico político, historiador y catedrático de estudios sobre Oriente Medio, Asia Meridional y África en la Universidad de Columbia. En 2012, su libro *Carbon Democracy*:

Political Power in the Age of Oil redefinió la historia de la energía en Oriente Medio, demostrando el modo en que el petróleo debilitó la democracia, contribuyó al militarismo y al imperio, y creó un mito peligroso de crecimiento infinito.

Lala Peñaranda es una ecosocialista feminista de Colombia, radicada en Bogotá. Es coordinadora en América Latina de Trade Unions for Energy Democracy (TUED), una red mundial con sede en la Facultad del Trabajo y Estudios Urbanos del Centro de Posgrados de la Universidad de Nueva York (CUNY). También forma parte de Democratic Socialists of America (DSA) y Science for the People (SftP).

Olivier Petitjean es periodista y cofundador del Observatorio de las Multinacionales (Multinationales.org), creado en Francia en 2013. Se especializa en empresas y lobby.

Thea Riofrancos es profesora adjunta de ciencias políticas de Providence College y miembro del Climate and Community Project, un grupo de estudios de izquierda. Se dedica principalmente a investigar la política de extracción, en particular en América Latina y Estados Unidos. Su próxima publicación es *Extraction: The Frontiers of Green Capitalism*.

Tatiana Roa Avendaño es una ambientalista colombiana. En enero de 2024 fue nombrada viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio por el Gobierno de Gustavo Petro. Anteriormente fue cofundadora y coordinadora de Energía y Justicia Climática en Censat Agua Viva. Ha sido parte de diversas redes nacionales e internacionales como Oilwatch, la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Es ingeniera de petróleos, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y es candidata a doctorado en la Universidad de Ámsterdam.

Kristian Stokke es catedrática del Departamento de Sociología y Geografía Humana de la Universidad de Oslo. También es presidenta del directorio del Comité Noruego de Birmania. Investiga el papel de los movimientos sociales en la democratización y la resolución de conflictos, específicamente en Birmania/Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Nepal y Sudáfrica.

Gz. MeeNilankco Theiventhran es estudiante de doctorado del Departamento de Sociología y Geografía Humana y director de la cátedra del programa de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Oslo. Su investigación se centra en las transiciones energéticas en el sur global. Además es geógrafo político, especializado en geopolítica, la sociedades de posguerra y la democratización en Asia Meridional.

Ozzi Warwick es director de educación e investigación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Trinidad y Tobago y secretario general del Movimiento Sindical Conjunto. Es miembro fundador de Trade Unions for Energy Democracy South (TUED South), una nueva plataforma sindical liderada desde el sur, que ha adoptado un enfoque público a una transición energética justa.

Este libro es la traducción al español de los artículos reunidos en el reporte Estado de Poder 2024. El sistema energético basado en combustibles fósiles ha dado forma al capitalismo y a nuestro orden geopolítico. Este informe revela los actores corporativos y financieros que sustentan este orden, los peligros de una transición energética injusta, lecciones para los movimientos de resistencia y las posibilidades de un cambio transformador.

